El proceso español

Juan Milián

La catalanización de la política española y el desmantelamiento de la España de la Transición

DEUSTO

Índice

Portada
Sinopsis
Portadilla
Introducción
Capítulo 1. Historia de una negación
Capítulo 2. El populismo de los narcisos
Capítulo 3. Se repite esta misma historia
Capítulo 4. El alma de la libertad
Epílogo
Agradecimientos
Bibliografía
Notas
Créditos

Sinopsis

El nacionalismo catalán llevaba décadas trabajando sin descanso para separar Cataluña del resto de España. Pero ese proceso se aceleró entre 2012 y 2017, los años del *procés*. Sin una mayoría social, sin ningún apoyo internacional y sin el amparo de la legalidad, era evidente que el proyecto estaba condenado al fracaso. Aun así, los líderes independentistas arrastraron a la población hacia la inestabilidad, destruyendo sectores clave de la economía y paralizando la actividad política real.

Años más tarde, nos encontramos con que el resto de España ha importado muchos de los rasgos del *procés*: la omnipresencia de intelectuales y tertulianos que solo pretenden polarizar, un Gobierno incapaz de gestionar que oculta su ineptitud acusando a los rivales de conductas imaginarias o el desprecio por la gestión económica y las políticas de prosperidad.

Una buena parte de las élites parece haber asumido esta estrategia, a pesar del daño evidente que causó en Cataluña. Y parece haberlo hecho sin pensar en el gravísimo, y quizá irreversible, perjuicio para las instituciones, la convivencia y la concordia.

El proceso español es una honda reflexión sobre el populismo, la crisis de la democracia liberal y el sanchismo en España, pero también un ensayo de combate que llama a la ciudadanía a movilizarse y defender los logros de los últimos cuarenta años de democracia exitosa.

El proceso español

La catalanización de la política española y el desmantelamiento de la España de la Transición

JUAN MILIÁN QUEROL

EDICIONES DEUSTO

Introducción

Tropezamos con la misma piedra. El proceso independentista catalán es una lección no aprendida por una España que está repitiendo el mismo error. Durante el funesto año 2020 el Gobierno de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez está llevando a cabo una aceleración del proyecto populista, que, si bien es difícil que llegue a culminarse en su totalidad, puede instalar a nuestro país en una amarga decadencia. Los paralelismos con la deriva que inició Artur Mas en Cataluña en 2012 son escalofriantes. La política de las emociones, la retórica de la hipérbole y la cadena de mentiras alientan el resentimiento, la paranoia y, finalmente, el cinismo. Dividen a la sociedad en dos bandos irreconciliables, convirtiendo a hermanos, compañeros y vecinos en enemigos. El objetivo, auténtico e inconfesable, es mantenerse en el poder el máximo tiempo posible y evitar, a cualquier precio, la alternancia en las instituciones. Rehúyen cualquier proyecto integrador, aplicando cordones sanitarios y removiendo las bajas pasiones. La fragmentación y la polarización de la sociedad son sus instrumentos para blindarse y esquivar cualquier rendición de cuentas ante sus seguidores. De este modo, se erosiona la cultura democrática y se socavan impunemente todos los pilares de la libertad, desde el pluralismo hasta el Estado de derecho. Se llenan la boca de democracia, pero impiden la labor de los controles y los contrapoderes que nos protegen de la tiranía de la mayoría. Así mueren las democracias.

El *procés* catalán es el periodo comprendido entre 2012, cuando Convergència i Unió decide subirse al lomo del tigre populista, y 2017, cuando todo se acelera en una vorágine de locura política y Carles Puigdemont, el sucesor de Mas, acaba huyendo de la justicia en la parte trasera de un coche y tras haber declarado infructuosamente la independencia de Cataluña en el Parlament. Si bien es cierto que el

nacionalismo llevaba décadas trabajando estratégica e incansablemente para alcanzar la separación de Cataluña del resto de España, es en ese periodo cuando la voluntad secesionista se convierte en un objetivo explícito del Gobierno de la Generalitat e, incluso, se comprometen a unos plazos determinados para conseguirlo. Sin una mayoría social, sin ningún apoyo internacional y sin el amparo de la legalidad vigente, era evidente que el proyecto estaba condenado al fracaso, pero la realidad es que lo intentaron. No fue una ensoñación. Premeditadamente crearon un clima de asfixia emocional contra el discrepante. Nadie quiso ser el traidor que explicara la verdad. Nadie levantó el pie del acelerador, mientras conducían a toda la sociedad catalana hacia el precipicio de la confrontación civil. Algunos de los protagonistas se fugaron cobardemente para seguir viviendo del cuento procesista en el extranjero. Otros fueron conde-nados por sedición; es decir, por su grave ataque a la democracia. Pero, sin duda, los auténticos perdedores del *procés* fuimos los catalanes que observábamos, entre atónitos y desesperados, la fuga de empresas, el desprestigio de las instituciones y la ruptura de la convivencia. El *procés* sólo trajo empobrecimiento, tanto económico como cultural, y discordia. Sin embargo, los engranajes del nacionalismo siguen intactos. Y siguen expandiéndose en la sociedad catalana y en el mundo. La trama de un poder que amenaza la democracia se consolida y, lo que es peor, encuentra en parte del Gobierno de España a sus mejores aliados.

El triunfo de la irracionalidad no hubiera sido posible en un contexto de sano escepticismo. El papel de los medios de comunicación, tanto públicos como concertados, y de presuntos intelectuales, auténticos clérigos del nacionalismo, fue clave para la aceptación mayoritaria de una gran mentira: que la independencia exprés era posible y no tendría costes. La manipulación de la identidad, la sublimación de una única pertenencia, se impuso a la realidad social, siempre compleja. El nacionalismo de siempre se había fusionado con las técnicas del populismo posmoderno, sacrificando el sentido común y cualquier aproximación a la verdad. Del laboratorio político que ha sido Cataluña surgió un virus ideológico: un conjunto de malas ideas que corroen la salud de la democracia liberal al atacar

no sólo a sus instituciones, sino también a las virtudes cívicas que salvaguardan la convivencia. Así, una sociedad próspera, con una calidad de vida envidiable como la catalana, se va sumergiendo, por decisiones propias, en un declive económico y social, prácticamente sin darse cuenta. La desconfianza va creciendo y, de repente, se produce una falla moral que parte la sociedad en dos. Ya no hay puentes. Sólo resentimiento. Incluso fenómenos que supuestamente deberían unirnos en un sentimiento de solidaridad, como fueron los atentados islamistas en Barcelona y Cambrils en el verano de 2017, son interpretados en clave de confrontación polí-tica.

Algo parecido está sucediendo, tres años después, en la España golpeada por la pandemia del coronavirus. Lo que debería unirnos nos separa aún más. La discordia impera. Se repite la misma historia, porque el Gobierno español no sólo tiene como aliados y sostén a quienes protagonizaron aquel golpe a la democracia en Cataluña, sino porque comparten la misma forma populista de gobernar, creando enemigos y desinformando, estresando a la sociedad y alentando la desconfianza. Si nada cambia, los resultados también serán los mismos: desgaste de las instituciones democráticas, agravamiento de la crisis económica y ruptura de la convivencia entre los españoles. Es lo que denomino el *proceso español* y pone en riesgo el mejor legado de la transición democrática. No obstante, e igual que en el *procés* catalán, encontramos el germen del caos en el pasado, en un proyecto ideológico divisivo. Ésta ya era la voluntad de la frívola e irresponsable presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, hoy compinche del autoritarismo bolivariano. Ahora, con la entrada de Podemos en el Gobierno de Sánchez, todo se acelera.

Sin duda, tanto en el *procés* catalán como en el proceso español han confluido fenómenos que también afectan a otras sociedades occidentales. El populismo ha resurgido en ambas orillas del océano Atlántico y en pleno siglo XXI. Cuando pensábamos que la democracia liberal significaría el fin de la historia, populismos, nacionalismos y fundamentalismos regresan para recordarnos que mala idea nunca muere y que nunca debimos bajar la guardia ante los enemigos de la sociedad abierta. Las preocupantes expectativas económicas, las inseguridades culturales y las dinámicas de las redes sociales han

catapultado a políticos oportunistas, demagogos y deshonestos. Los consensos se rompen, el reformismo se estanca y las guerras culturales se apoderan del debate público. El bien común es sustituido por unas políticas de identidad que eliminan la igualdad para conferir superioridad moral a ciertas pertenencias identitarias. A través de retóricas del resentimiento y la victimización, ciertos grupos de interés se apoderan de recursos económicos a costa de complicarnos a todos la vida. El secesionismo catalán y el feminismo podemita aplican esa misma lógica que ha venido reproduciéndose en los países anglosajones desde hace tiempo y que ya afecta a prácticamente todo Occidente. Quizá en España estemos acumulando más populismos de los que podemos digerir, pero éste, con diferentes rostros, golpea a otras democracias, algunas con más solera que la nuestra. En este sentido, no somos especiales y podríamos extraer advertencias y lecciones de lo que sucede en otros lares.

A pesar de nuestra historia, no estamos condenados al conflicto. La concordia fue posible y puede volver a serlo. Algunos autores creen que nos acercamos a una época pospopulista, ese momento en el que las sociedades ya podrán valorar las consecuencias de haber elegido a gobernantes populistas. Quizá entonces sea tarde, porque algunos daños pueden llegar a ser irreversibles. El Brexit es un ejemplo. Si esperamos sentados a que algún movimiento pendular de la historia nos devuelva a tiempos más felices, estaremos condenándonos a la frustración. El pasado 14 de febrero, sin ir más lejos, la alta abstención constitucionalista en las elecciones catalanas otorgó a los protagonistas del *procés* la mayoría más amplia que jamás ha conseguido el separatismo. En democracia todos los ciudadanos somos corresponsables de nuestro futuro común, por lo que dejarse arrastrar por el sentimentalismo o, incluso, quedarse en casa también tiene un precio. Tanto el desahogo como el pasotismo son un riesgo para la democracia, porque dejan huérfanos a los auténticos servidores públicos.

Mientras el narcisismo victimista supere al individualismo responsable, seguiremos abonados al declive social y económico y a un exaltado debate público sobre cuestiones que, hasta hace poco tiempo, a nadie preocupaban y a nadie deberían ocupar. Debemos librarnos de

esta trampa que es la guerra (sub)cultural y que nos arrastra a toda la sociedad al fango de unas agrias discusiones, que disimulan tanto la (ir)responsabilidad de los gobernantes como los debates más necesarios en un mundo lleno de retos. ¿Seremos capaces de cambiar de rumbo antes de que el daño sea totalmente irreparable?

Éstas son las principales cuestiones analizadas en las siguientes páginas. En el primer capítulo trato de realizar una autopsia a un muerto viviente, a un proceso separatista catalán que viví intensamente como miembro de la cámara de la discordia, el Parlament. Tuve el honor de representar a todos los catalanes como diputado del Partido Popular entre 2011 y 2017; es decir, durante toda aquella fase del *procés* que se inició en el verano de 2012 y concluyó justo antes de las navidades de 2017. Es extensa la literatura sobre aquel periodo y son múltiples las visiones sobre aquellos hechos. Todas parciales y subjetivas, también la mía. No he pretendido en ningún momento escribir una crónica completa del *procés*, sino simplemente escudriñar los motivos que nos llevaron a aquel año en el que vivimos peligrosamente.

En el segundo capítulo, «El populismo de los narcisos», reflexiono sobre las lecturas que, como politólogo, ofrecen instrumentos interesantes para entender qué nos pasa, no sólo en Cataluña o el resto de España, sino en Occidente. El auge de los populismos, los nacionalismos, las políticas de identidad y las guerras culturales tienen causas que trascienden nuestras fronteras, y es fundamental realizar este ejercicio de política comparada para acertar con el diagnóstico y evitar el ensimismamiento. Sufrimos una pandemia de malas ideas que deben ser combatidas si queremos preservar y reforzar nuestras democracias liberales. Este análisis y la experiencia catalana nos servirán, a su vez, para comprobar cómo *se repite esta misma historia* —título del tercer capítulo— en España. De alguna manera, Pedro Sánchez y sus aliados han metido el *procés* en la Moncloa. Observar los paralelismos entre el año 2017 catalán y el 2020 en toda España nos ayudará a entender hacia dónde nos dirigimos si no le ponemos remedio. No estamos en un rumbo hacia lo desconocido. Sabemos perfectamente que la discordia estimulada desde la política y los medios sólo puede tener un final infeliz. Mi voluntad es dejar

constancia de ello para que, al menos, después no nos repitan que «no se podía saber».

En el último capítulo, «El alma de la libertad», esbozo algunas ideas en defensa de la libertad y la democracia. Es una propuesta, inevitablemente imperfecta, de superación de todo populismo y de recuperación de los mejores principios del liberalismo clásico, adaptándolos, en la medida de lo posible, al siglo XXI. Es también una muestra de respeto a nuestro mejor pasado, al legado de la España de la Transición que algunos adanes pretenden desmantelar. Por último, concluyo con un «Epílogo poselectoral», unas notas a vuelapluma sobre la campaña y los resultados de las elecciones catalanas del 14 de febrero que, lamentablemente, confirman algunas de las peores hipótesis barajadas en este libro.

Capítulo 1

Historia de una negación

A las 17.00 horas del 17 de agosto de 2017 una furgoneta entraba en el tramo central de La Rambla de Barcelona. No había bolardos ni nada que impidiese la tragedia que se iba a perpetrar. Tras dejar un reguero de sangre y muerte a sus espaldas, el conductor, el terrorista Younes Abouyaaqoub, cruzaría a pie el barrio El Raval y aún asesinaría a una persona más, la decimoquinta, a la que le robaría el coche. El islamismo golpeaba en el corazón de la capital catalana y toda España se estremecía. El atentado tendría una secuela en Cambrils. En total, 16 muertos cuya memoria sería respetada durante unas horas, unas pocas horas. El dolor de las familias y de una sociedad conmocionada pronto pasaría a un segundo plano. La élite independentista no iba a permitir que una tragedia como ésa estropeara el que iba a ser su gran otoño, el otoño de la República catalana.

Tras años de tensión identitaria, algo no funcionaba en esta sociedad. El proceso independentista nos había saturado emocionalmente tanto a los nacionalistas como a los constitucionalistas. La política se había metido en todos los rincones de nuestras vidas, enrareciendo las relaciones familiares, las comunidades de vecinos y los ambientes laborales. Durante mucho tiempo no hubo conversación que no desembocara agriamente en el dichoso monotema. El nacionalismo se había acostumbrado a actuar sin contención moral; lo embrutecía todo con su manipulación y su perversión de la identidad. La fractura entre catalanes alcanzó tal nivel que ni el duelo por las víctimas de un atroz atentado iba a darnos la

más mínima tregua. Todo debía estar al servicio de la misma causa. Todo era explicado por esa causa. El *conseller* de Interior, Joaquim Forn, distinguió entre víctimas españolas y víctimas catalanas. «Dos personas catalanas y dos personas de na-cionalidad española», declaró en una entrevista a TV3. Im-ponían el fastidioso relato incluso en el momento más ino-portuno. La asociación independentista Assemblea Nacional Catalana (ANC) pidió en Twitter que no se usara la bandera española para mostrar solidaridad con las víctimas. Sólo les parecían legítimas la *senyera* o la *estelada*, la bandera oficial de Cataluña o la independentista. Ni un respiro al pluralismo. Al enemigo, ni agua.

El control que ejercía el independentismo de la agenda mediática era asombroso. En lo que llevamos de siglo, ningún movimiento europeo ha alcanzado un dominio de la agitación y la propaganda como el subvencionado por la Generalitat de Cataluña. La radicalización islamista en el seno de nuestra sociedad o los posibles fallos en la seguridad y la vigilancia nunca llegaron a consolidarse en el debate público. La identidad alterada siempre reduce la responsabilidad a su mínima expresión. Enseguida se elevó al mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, a los altares patrios por contestar: «Bueno, pues *molt bé*, pues adiós» a un periodista holandés que, ajeno al genio nacionalista, cometió la imprudencia de protestar por el uso del catalán en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros. Para el nacionalismo, la identidad siempre está por encima de la comunicación, por encima de la eficacia policial, por encima de la gestión económica, por encima de la excelencia educativa, por encima de la cultura libre, por encima de la lucha contra la pandemia, por encima de todo. La identidad es la medida de todas las cosas para el nacionalista. Quizá le faltó diplomacia al impaciente reportero, pero el nacionalismo magnificó la ofensa. La manipuló y exageró como suele hacer con todo lo que huele a agravio. Al principio dijeron que se trataba de un periodista español. Daba igual. Los reparos de un periodista holandés les servían como prueba de la catalanofobia española, y la respuesta de Trapero se convertiría en una muestra del orgullo y la dignidad de un pueblo que se autopercibía oprimido. Lo convirtieron en un héroe. Se estamparían camisetas con la frase y su cara, al estilo Che Guevara. En el pasado, el jefe de los Mossos ya

había obtenido el sello de calidad nacionalista: era el hombre de camisa hawaiana y guitarra en mano que cantaba en torno a una de las famosas paellas de la mediática Pilar Rahola en Cadaqués. Cantaba con Carles Puigdemont y con Joan Laporta. Ahora era un héroe entre héroes. Años después, cuando anunció que había estado dispuesto a detener a Puigdemont en caso de que una orden judicial así lo pidiera, los mismos independentistas lo mandaron al ya abarrotado infierno de los traidores. El nacionalismo no entiende de matices, porque se sitúa en un mundo binario. El trabajo y el talento no importan; la afinidad a la causa, recordemos, es el único criterio.

Cuando una sociedad pivota sobre una única cuestión, la discrepancia política acaba degenerando en una profunda fractura moral. Disculparán que parafrasee la expresión de Mario Vargas Llosa, pero así se jodió Cataluña. El no nacionalista no sólo sería un catalán equivocado, sería un mal catalán, incluso una mala persona, un fascista dispuesto a todo para impedir la liberación del pueblo catalán. Esa desconfianza abonaba el terreno a cualquier teoría conspirativa. Las asociaciones y los partidos independentistas alimentaron la paranoia, traspasando todos los límites éticos en la manifestación de rechazo a los atentados. Fue el 26 de agosto. El *establishment* independentista quería evitar que se percibiera la solidaridad del resto de España con los catalanes. Les chafaba el relato de la catalanofobia que cuenta que los catalanes éramos ancestralmente odiados por unos españoles que ni nos entendían ni nos querían entender. Nada debía torcer el plan a pocas semanas del referéndum y de la declaración de independencia. Durante años se había abusado de la expresión «jornada histórica» para definir la *performance* mensual del separatismo, pero ahora sí estaban a las puertas de la historia y todo debía dirigirse a la consecución de ese *momentum*. Algo había que hacer para frenar cualquier tentación de fraternidad, y se hizo. Llenaron la cabecera de la manifestación de banderas independentistas, insultaron al rey y a los políticos constitucionalistas. La mayoría de los catalanes que allí acudimos fuimos a mostrar una sentida solidaridad con las víctimas y sus familias y un absoluto rechazo al terrorismo, pero el ruido hábilmente estimulado convirtió la manifestación en otro acto de rechazo a España. Si el nacionalismo

había manipulado el pasado, cómo no iba a manipular también el presente. Caldearon el ambiente con un odio dirigido a hermanos, amigos y compañeros. No lograrían romper España, pero aquel día consumaron la ruptura de la sociedad catalana. La rabia fue políticamente dirigida contra la convivencia social. Personas que en otros ámbitos de la vida pueden tener comportamientos decentes o incluso modélicos se dejaban arrastrar por la irracionalidad en esta cuestión política. El civismo se esfumó. Insultaron a quienes iban con una bandera española con una furia que nada bueno podía presagiar.

Ese día acompañé a un grupo de aragoneses, afiliados del Partido Popular, que habían venido a mostrar su solidaridad con las víctimas y su cariño a la sociedad catalana. Fui a recibirlos y recuerdo perfectamente sus rostros emocionados cuando bajaban del autobús cerca del paseo de Gracia. Deseaban un reencuentro. Tenían ganas de concordia. Les dolía lo que se estaba viviendo en Cataluña. Me explicaron su relación con Barcelona. Algunos habían trabajado durante su juventud en algún restaurante de la ciudad; otros tenían a sus hijos estudiando en alguna universidad catalana. Las anécdotas y los recuerdos fluían con ternura y nostalgia. Admiraban esta tierra y les entristecía el *procés*. En todo caso, no estaban preparados para lo que se iban a encontrar minutos después. Yo tampoco. El independentismo aplacó cualquier buen sentimiento y diseñó una manifestación de un rencor inaudito. Dinamitaron todos los puentes con la Cataluña que no se ilusionaba con su utopía rupturista. Tengo grabada a fuego la imagen de personas maduras, incluso mayores, envueltas en *estelades* y gritando a otras personas mayores con banderas españolas: «Vosaltres, feixistes, sou els terroristes», vociferaban. «Vosotros, fascistas, sois los terroristas.» La rabia era real. Era el nacionalismo reconcentrado, el fanatismo desatado, la fractura temida. El diario italiano *La Repubblica* titularía: «Il nazionalismo senza solidarietà». No respetaba ni a los vivos ni a los muertos.

La infamia no quedó ahí. Enseguida promovieron la teoría conspiranoica según la cual el Estado era cómplice o promotor de aquellas muertes. Años más tarde siguen haciéndolo. Recientemente, durante el juicio a los islamistas, se han mostrado vídeos grabados por los propios terroristas mientras preparaban los explosivos, reían y

amenazaban en varias lenguas. Una tertuliana de TV3 sólo destaca que el catalán de esos chicos le parece forzado, poco natural. La insinuación es clara para un espectador que apenas vislumbra el exterior de la burbuja: apuntaba a una operación del Estado. El *procés* estuvo lleno de mentiras, pero también de insinuaciones obscenas e inmorales. Cualquier conspiración es creíble dentro del marco mental nacionalista si el Estado aparece como presunto culpable. De este modo, las noticias falsas y la desinformación corren sin obstáculos. El odio permite una credulidad pasmosa.

El Estado era el mal absoluto, pero públicamente se requería al Gobierno español que dialogara. Era un engaño más. Una astucia, diría Artur Mas. La decisión estaba tomada. En realidad, se exigía al Estado que la acatara, que aceptara la ruptura constitucional y facilitara la separación. La palabra *diálogo* era una simple treta para reforzar la superioridad moral del oprimido y para enredar al incauto corresponsal extranjero. Sin ir más lejos, nunca quisieron dialogar con los catalanes que discrepábamos del *procés*. La animadversión hacia los federalistas equidistantes, por ejemplo, es una prueba de que el nacionalismo no buscaba la negociación, sino la sumisión. Al entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, le poseía la rabia cuando el arzobispo de Barcelona, Joan Josep Omella, hablaba de «tender puentes». En los funerales de las víctimas de los atentados, Omella habló de paz, convivencia y amor. El *president* colapsó. Al acabar la ceremonia corrió hacia el arzobispo y, como Greta Thunberg con barretina, le espetó su particular: «How dare you?». «¿Cómo se te ha ocurrido tratarnos en ese tono?», inquirió enfurecido e, inmediatamente, se largó sin esperar la respuesta de su atónito interlocutor. Ésos eran el respeto y la tolerancia que pregonaba.

De hecho, Puigdemont siempre se negó a un diálogo abierto y sincero. Dejaba la silla vacía en la Conferencia de Presidentes autonómicos. Tenía miedo a exponerse públicamente a las razones del otro. A pesar de ser invitado, nunca se atrevió a acudir al Senado o al Congreso a explicar su proyecto, como sí había hecho en el pasado el *lehendakari* Juan José Ibarretxe. Sólo quiso encontrarse con representantes del Gobierno a escondidas, sin luz ni taquígrafos. En la Escuela de Verano de Sociedad Civil Catalana de 2018,[1] el que había

sido delegado del Gobierno de España en Cataluña durante la etapa final del *procés*, Enric Millo, reconoció haber celebrado varias reuniones en privado con Puigdemont: «Él no quería que esos encuentros se hicieran públicos. Prefería mantener las conversaciones en secreto y se lo respeté, aunque él utilizó ese acuerdo de discreción para mantener el discurso de que nosotros no queríamos dialogar. Era como hablar con una pared, todo se reducía siempre a lo mismo, el único interés era votar la independencia en referéndum, no quería hablar de nada más. El diálogo para él era un peligro con demasiado riesgo. Una mentira más del relato secesionista». Según Millo, en esas conversaciones Puigdemont siempre se mostró «decidido a ir a por todas y hasta el final contra el Estado», ya que «de alguna manera ellos pensaban que siempre saldrían ganando, o bien por claudicación del Estado, o por una reacción contundente que les permitiría construir un relato victimista ante la comunidad internacional». En todo momento, Puigdemont buscaba, como él mismo reconocería en sus memorias, el falazmente denominado choque de trenes.

Esta imagen, la de dos locomotoras a punto de colisionar, era fruto de la disonancia cognitiva que siempre caracterizó a los líderes nacionalistas. Por un lado, el nacionalismo llevaba tantos años tratando a España como un Estado fallido que, de alguna manera, llegó a creer que el conflicto sería entre dos fuerzas equiparables. Por otro lado, Puigdemont y gran parte de quienes lo acompañaban cometían la grave equivocación de confundir el Gobierno con el Estado. Es curioso el desconocimiento sobre el funcionamiento de un Estado democrático de aquellos que aseguraban que estaban construyendo uno. Creían que, una vez vulnerada la ley, el Gobierno español podría rescatarlos y ordenar la marcha atrás de los procesos judiciales. En no pocas ocasiones traté de practicar cierta pedagogía con diputados nacionalistas. Teníamos la oportunidad de charlar prácticamente cada día tras las comisiones parlamentarias o las tertulias radiofónicas, pero era realmente frustrante. Se les advertía de las consecuencias que podía acarrear una declaración de independencia y miraban por encima del hombro: «No se atreverán a meternos en la cárcel», presumían algunos erróneamente. La mayoría de los políticos nacionalistas que hacia esas fechas no se habían bajado de aquel barco

a la deriva, por usar una metáfora marinera tan al uso por aquella época, habían desconectado de la realidad. Ostentaban un sentimiento de impunidad tan desvergonzado que, pocos meses más tarde, a la hora de asumir responsabilidades, contrastaría con sus lloros y sus aseveraciones de que ellos no habían hecho nada, que todo había sido simbólico, una simple *performance* política. El «no se atreverán» fue una fatal arrogancia. Fue una de las negaciones más estúpidas de esta historia, pero no la única.

Así, entre la ignorancia y la arrogancia, iniciaron el golpe al Estado de derecho los días 6, 7 y 8 de septiembre. Se aprobaron las bases jurídicas de la independencia unilateral: la Ley del Referéndum de Autodeterminación y la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República. Fue cuando Puigdemont y compañía cruzaron su particular Rubicón. Abandonaron definitivamente la orilla democrática para adentrase en la selva autoritaria, acelerando un golpe que ya no era posmoderno. Durante aquellas jornadas parlamentarias se vulneraron flagrantemente los derechos de los parlamentarios de la oposición. En su libro *No todo vale*, el entonces letrado mayor del Parlament, Antoni Bayona, define aquella sesión parlamentaria como «la menos democrática jamás celebrada». Cada uno de los diputados éramos representantes de todo el pueblo catalán, pero al nacionalismo no le temblaba la mano a la hora de pasarnos su despótico rodillo por encima. Fueron días largos e intensos. Nunca esta institución había captado tanta atención mediática. Los diputados constitucionalistas recibíamos decenas de men-sajes de apoyo de toda España. Si alguien había pensado que el *procés* no iba en serio, sería entonces cuando se diera cuenta del error. Otra negación fatal. Fueron horas tristes, pero no íbamos a bajar los brazos. Los constitucionalistas estábamos dispuestos a poner el foco sobre la cacicada que allí se estaba perpetrando. El periodista Rafa de Miguel lo definió magníficamente en las páginas de *El País* como «noble filibusterismo». Con el apoyo del reglamento, los portavoces de los grupos de la oposición no buscaban tanto frenar el inevitable atropello como denunciar los métodos antidemocráticos e iliberales del separatismo. Las sesiones se suspendían continuamente y se eternizaban. La épica nacio-nalista degeneró en un bochorno parlamentario. La presidenta de

la Cámara, Carme Forcadell, parecía por momentos absorta, ajena a lo que allí acontecía. Estaba sobrepasada. Percibí que ella andaba con la mosca tras de la oreja, como temiendo ser el chivo expiatorio en los planes urdidos por los partidos separatistas. Sin embargo, entre tanto cansancio y desesperación también emergió una esperanza: la coordinación estratégica de los partidos constitucionalistas. Ésta no sólo iba a darse entre Ciudadanos, PSC y Partido Popular. Los comunes, o una parte de ellos, tampoco querían ser avasallados por la deriva autoritaria del nacionalismo. Nuestros vecinos en las bancadas superiores eran los ilustres diputados de la CUP. Continuamente se mostraban irritados por los procedimientos parlamentarios y democráticos. Ellos querían un golpe rápido. No habían venido a discutir nada con la oposición. Tras aguantar estoicamente sus quejas, el portavoz popular, Alejandro Fernández, se dirigió a ellos y les recordó que «si es necesario, estaremos aquí defendiendo la libertad hasta que el infierno se congele».

Se sucedieron las broncas parlamentarias, las reuniones de la Mesa y la Junta de Portavoces, las reconsideraciones y las reclamaciones, pero a altas horas de la noche se aprobó la Ley 19/2017 del Referéndum de Autodeterminación. Se había vulnerado el reglamento del Parlament y mucho más. La presidenta de la Cámara y los grupos independentistas ignoraron un acuerdo por unanimidad del Consejo de Garantías Estatutarias que señalaba que no se podía aprobar la ley sin el preceptivo dictamen, como establecía el Esta-tuto de Autonomía. No iba a quedar ley sin quebrantar durante aquellas jornadas. El mismo Estatuto exige que para aprobar un organismo equivalente a la Junta Electoral Central se precisan 90 diputados. Se aprobó la Sindicatura Electoral con sólo 72. Todo daba igual. Todo menos la *butxaca*. Cuando el Tribunal Constitucional decidió multar a los miembros de dicha sindicatura, gracias a la reforma de la ley del TC que el Gobierno del Partido Popular había promovido dos años atrás, todos los miembros renunciaron rápidamente. Eran revolucionarios de medio pelo.

No contentos con la ley del referéndum, y sin más necesidad que la de exhibir un prepotente radicalismo, los partidos independentistas quisieron repetir la jugada con la Ley 20/2017 de Transitoriedad

Jurídica y Fundacional de la República. Entre otras lindezas autoritarias, esta ley pretendía que no se pudiera impugnar ningún decreto ley del Gobierno. También preveía instaurar un Poder Judicial al servicio del presidente de la Generalitat. Se esfumaba la separación de poderes. De haberse implementado esa república, Cataluña habría dejado de cumplir todos los estándares democráticos que se le suponen a un país europeo en pleno siglo XXI. Era un retroceso democrático en toda regla. Ahora entendíamos por qué los políticos independentistas repetían cada minuto que ellos eran demócratas. Necesitaban autoconvencerse, mientras iniciaban un camino sin retorno hacia un despotismo poco ilustrado. No obstante, en el debate de esa ley vivimos un momento parlamentario memorable, la intervención del diputado de los comunes Joan Coscubiela. No le hizo mucha gracia, como después reconocería, que algunos diputados de Ciudadanos y del PP le aplaudiéramos instintivamente al escuchar sorprendidos cómo los comunes abandonaban, por una vez, la equidistancia entre el Estado de derecho y el nacionalpopulismo. En ese preciso instante, la cuestión principal no se dirimía entre la izquierda y la derecha. Era algo previo y más importante. Sus protagonistas no lo reconocerán, y quizá sus seguidores nunca lo sabrán, pero en aquellos momentos el nacionalismo intentaba impulsar un régimen autoritario y nosotros estábamos defendiendo la democracia liberal. Y ese espíritu democrático unía a sindicalistas, como Coscubiela, y a liberales clásicos, como un servidor. La idea de democracia que impulsaba el independentismo, ya plenamente populista, no era para nada democrática. Se trataba de una tiranía de la mayoría, de una mayoría que ni siquiera era social, sino simple y coyunturalmente parlamentaria. Bien lo explica el mismo Coscu en su libro *Empantanados*: «Repitieron tantas veces en esas cuarenta y ocho horas que la mayoría, por el simple hecho de serlo, lo puede todo, sin límites legales ni democráticos, que terminaron por creérselo y hacérselo creer a una parte importante de la ciudadanía». Finalmente, y como contraposición al vibrante discurso de su compañero parlamentario, la diputada podemita Àngels Martínez tuvo su minuto de gloria retirando las banderas españolas que los diputados del Partido Popular habíamos dejado sobre nuestros escaños. También dejamos señeras. Éstas ni las

tocó. Era España lo que le molestaba.

La fiebre populista había convertido el nacionalismo catalán en un peligro para el marco de convivencia. Más allá de la cuestión identitaria, el *procés* ponía en evidencia un choque entre dos maneras de entender la democracia. Por un lado, los partidos constitucionalistas defendíamos una democracia liberal, moderna y pluralista en una sociedad abierta. Por otro lado, el nacionalismo seguía abrazado a una concepción profundamente iliberal, premoderna y aclamativa que aspiraba a una sociedad cerrada y fácil de controlar, en la que la identidad múltiple desaparecía y todos los individuos debían diluirse en una sola pertenencia. Durante aquellos infames plenos del Parlament eclosionaba en Cataluña esa fractura que hoy divide gran parte de Occidente; una falla ideológica que recorre la mayoría de los sistemas de partidos, partiendo tanto la izquierda como la derecha. Es la diferencia entre aquellos que entendemos que la democracia necesita controles y contrapoderes para no degenerar en una tiranía de la mayoría (o de una minoría dura y organizada, como era el caso) y aquellos que la entienden al modo populista, donde cualquier aberración contra los derechos individuales está justificada con el pretexto del mandato popular o democrático (como así lo defienden los portavoces independentistas). Más allá del debate sobre los costes o los beneficios de una independencia prácticamente imposible, la cuestión trascendente que se dirimía aquellos días versaba sobre la cuestión democrática. «Esto va de democracia», solían repetir los políticos independentistas. Era cierto. Ellos habían elegido acabar con ella, situándose en el lado erróneo de la historia. Habían decidido aplicar con toda su crudeza la peligrosa vía populista, la que no respeta la libertad del que piensa o siente diferente. A pesar de su engañosa retórica, el *procés* era antidemocrático, porque se basaba en la voluntad de arrebatar los derechos políticos a los catalanes no nacionalistas y al resto de los españoles. Era limitar la democracia a unos pocos.

El golpe había empezado, pero no todo saldría como estaba previsto en el plan. El 20 de septiembre se produjeron unos sucesos que marcarían el devenir del *procés*. Agentes de la Guardia Civil entraron en el Departamento de Economía con una orden judicial. Era

la Operación Anubis, y fueron detenidos catorce altos cargos del Govern. Entre ellos, Josep Maria Jové, persona de la máxima confianza de Oriol Junqueras y propietario de la famosa libreta Moleskine que tanto ayudaría a la instrucción del caso, ya que confirmaba la existencia del plan que, a pesar de los obstáculos y las chapuzas, estaban tratando de implementar. Aquella mañana, Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana llamaron a la masa a concentrarse delante de las puertas de la consejería dirigida por Oriol Junqueras. Los agentes judiciales quedaron literalmente sitiados. Algunos manifestantes destrozaron coches policiales y robaron munición. Ni gente de paz ni revolución de las sonrisas. Habían llamado a «parar a la Guardia Civil» cuando ésta estaba ejecutando una orden judicial. Era una sedición de manual o, mejor dicho, de Código Penal, concretamente, de su artículo 544: «Son reos de sedición los que, sin estar comprendidos en el delito de rebelión, se alcen pública y tumultuariamente para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público, el legítimo ejercicio de sus funciones o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales». Los agentes habían accedido al edificio a las ocho de la mañana, pero no lograrían salir hasta la madrugada. La secretaria judicial lo haría atemorizada por la azotea. La agresividad de la masa era evidente. Estábamos ante un claro ejemplo de lo que acertadamente Daniel Gascón definió como «victimismo matón». La intimidación formaba parte del plan. Recordemos como «Carles Puigdemont pidió que los ciudadanos mirasen a sus alcaldes y les preguntaran si no les iban a dejar votar». Días más tarde, la Audiencia Nacional mandaría a la cárcel a los dirigentes de las organizaciones que habían convocado a miles de personas a sitiar el Departamento de Economía: Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, los Jordis.

Pero antes de ello, el golpe a la democracia, iniciado en los plenos de septiembre, continuaría con el referéndum ilegal del 1 de octubre. Puigdemont llegó a asegurar que el referéndum contaba con el aval de la Unión Europea y Estados Unidos. Nadie en el universo mediático o político del nacionalismo se atrevía a contradecir las mentiras de sus líderes, aunque fueran tan evidentes y fáciles de refutar como ésa. Los

profesionales de los medios de comunicación públicos no sólo se dejaron arrastrar por el engaño masivo, fueron colaboradores necesarios de la gran estafa e, incluso, grandes promotores de ésta; y siguen sin pedir perdón ni rectificar. Ya no recuperarán su prestigio. TV3 y Catalunya Ràdio son ya medios ajenos, incluso hostiles, a la Cataluña plural. Todo lo hacían en nombre de la democracia, nos decían, como si ésta fuera votar cualquier cosa en cualquier momento y de cualquier modo y, además, el resultado pudiera afectar también a todo el mundo. Allí se redobló el golpe. El referéndum ilegal era una parte más del plan que ya se estaba consumando. Del 1 de octubre quedan las imágenes sobre las cuales el nacionalismo trató de desprestigiar al Gobierno de España y sobre las que ahora asienta el cansino relato victimista. Con todo, el impacto emocional de lo vivido durante aquel día no debería esconder que la gravedad del asunto reside en los plenos anteriores del Parlament y en la voluntad de Puigdemont y sus aliados de seguir adelante a pesar de las resoluciones judiciales. Puigdemont fue el máximo responsable al decidir poner en un compromiso a los agentes de los diferentes cuerpos policiales y en peligro a una parte de sus seguidores que creían que la independencia era posible. De hecho, los líderes nacio-nalistas querían que fuera la población quien realizara el trabajo sucio, quien se enfrentara a las consecuencias de saltarse la ley y desobedecer a los tribunales. Fueron unos absolutos irresponsables que condujeron a los catalanes al borde del conflicto civil.

A pesar de las nulas garantías de aquel referéndum, el nacionalismo consiguió las imágenes que quería. El ambiente era irrespirable. La rabia del independentismo se disparó contra la Policía, contra el Gobierno de España y contra los catalanes que nos oponíamos al *procés*. Las redes sociales se llenaron de odio, aunque, en realidad, no había habido más violencia ni más heridos que en los desalojos realizados por los *mossos* de las plazas ocupadas por el movimiento del 15-M. Una de las fotografías que más circularon había sido tomada en Tarragona en 2012. Todo valía. El Departamento de Salud de la Generalitat difundió un informe en el que se contabilizaban 991 heridos. Algunos medios prestigiosos cayeron en la trampa. *The Guardian* rectificaría poco después. El exdirector del periódico

británico, Peter Preston, reconoció que «las informaciones sobre lo que ocurrió no se habían comprobado» y que la realidad era que: «Heridos graves aquel día: tan solo dos». Si las informaciones de la Generalitat hubieran sido ciertas, Puigdemont y Junqueras habrían corrido a los hospitales a fotografiarse con los heridos. En TV3 apareció Marta Torrecillas, exconcejal de ERC, que aseguraba que le habían roto los dedos de una mano, uno a uno. Diferentes días, diferentes manos vendadas. Al final, resultó ser sólo una capsulitis. La mayoría de los considerados heridos eran personas que habían llorado al ver las imágenes en TV3. Lógico, la producción nos mostraba una guerra de Vietnam. El Jordi presidente de la ANC aseguró que no se había producido un balance de heridos tan grande en Europa «desde la Segunda Guerra Mundial». Ni en los atentados yihadistas de aquel verano ni en las guerras balcánicas. El narcisismo nacionalista no tenía límites. Deseaban protagonizar la peor tragedia europea «desde la Segunda Guerra Mundial». Deseaban ser más víctimas que nadie. En otras ocasiones se habían comparado con la población negra sudafricana durante el *apartheid* o con la del estado de Alabama durante el periodo de la segregación. Junqueras era Mandela, Puigdemont, Rosa Parks. La banalización de las luchas por los derechos humanos o civiles fue constante. Sin embargo, la realidad era, una vez más, muy diferente. El balance, como recordó *The Guardian*, no pasaba de dos heridos graves: una persona sufrió un infarto y otra, que con anterioridad había agredido en cinco ocasiones a la policía, acabó perdiendo un ojo por el impacto de una pelota de goma. Pero la posverdad se imponía y las mentiras, si confirmaban pre-juicios, eran asumidas como hechos sin ser contrastadas. El aparato de propaganda estaba perfectamente engrasado y la sociedad catalana no podía estar más estresada. Unos sentían rabia; los otros, ansiedad. El *procés* había conseguido convertir Cataluña en una sociedad emocionalmente desgarrada. Durante años el nacionalismo había usado las redes sociales para difundir bulos y amedrentar a la oposición, pero ahora esa estrategia de engaño e intimidación había alcanzado su cenit. Los objetivos eran, por un lado, reforzar el victimismo que contribuye a que los seguidores nunca exijan a sus líderes una rendición de cuentas. Jugaban en el terreno de las percepciones, mientras el Estado sólo

podía situarse en el plano de los hechos. De ahí la victoria propagandística. Por otro lado, la intimidación les servía para mantener la espiral del silencio no sólo sobre la mayoría no nacionalista, sino también sobre aquellos nacionalistas que en algún momento pudieran dudar de la acción o las palabras de sus líderes. El nacionalismo supo usar técnicas del siglo XXI para imponer una ideología del siglo XIX, olvidando todo el daño que estas malas ideas habían producido en el siglo XX.

Saltarse la ley e incumplir resoluciones judiciales tiene consecuencias. Así lo entiende cualquier sociedad democráticamente adulta. Sin embargo, el nacionalismo había tratado a los catalanes como si fueran niños cuyos actos no acarrearan responsabilidad alguna. La infantilización es una de las consecuencias del populismo, por lo que no es de extrañar que el 3 de octubre el discurso del rey Felipe VI provocara un *shock* entre los ensimismados. Trató a los catalanes como adultos. No hubo intento de seducción ni de apaciguamiento. Aquel día se había convocado una huelga general por parte de algunos sindicatos como la CGT, la CNT y el radicalmente independentista Intersindical-Confederació Sindical Catalana (I-CSC), liderado por el terrorista Carles Sastre. Éste fue el asesino de José María Bultó en 1977, fue también uno de los fundadores de Terra Lliure y, cómo no, estaba siendo glorificado en la televisión pública catalana como un «independentista pata negra». Al menos esta vez, CC. OO. y UGT no ejercieron su habitual papel de tontos útiles de la élite nacionalista. Ésta había llegado demasiado lejos. A la huelga la llamaron «paro de país» y, en cierta manera, recordaba a aquella amenaza que Oriol Junqueras profirió en el Parlamento Europeo en 2013: «¿Alguien cree que no somos capaces de parar la economía catalana durante una semana?». El revolucionario «cuanto peor mejor» estaba en el *procés* desde sus orígenes, pero aquellos días mostraron claramente cuán poco les importaba la prosperidad de la sociedad que decían defender. Comités de Defensa del Referéndum, los CDR de inspiración cubana, ejercieron una acción coactiva contra los que se oponían a seguir las directrices de unos sindicatos minoritarios. El infantilismo y el narcisismo nacionalistas sólo podían conducir a la frustración y la agresividad. Hubo acoso contra la policía, sobre todo

en Pineda de Mar. El ambiente era insoportable para el constitucionalismo, pero esa noche habló el monarca y se produjo un punto de inflexión. Se debía seducir a los independentistas, aconsejaba la equidistancia esnob. Tendrían un helado cada día, prometía el cartel de la ANC. El nacionalismo comparaba la realidad imperfecta del *statu quo* con la posibilidad de un paraíso terrenal. Qué les ofrecía España, se cuestionaban, faltos de amor propio. El discurso del rey los cortocircuitó, y éste pasó a ser el enemigo número uno. Se había dirigido a todos los españoles y tuvo la audacia de explicar simple y lla-namente la verdad, pero hubo una frase que fue en especial apreciada por los catalanes que queríamos recuperar la concordia: «Les digo que no están solos, ni lo estarán». No estamos solos. Fue oxígeno puro en medio de la asfixia identitaria.

Sin embargo, el separatismo ni rectificaba ni aflojaba. Y lo que prometía que no iba a suceder con la independencia empezó a ocurrir con la mera posibilidad de ésta. Artur Mas había asegurado que los bancos se pegarían por venir a una Cataluña independiente, pero el 5 de octubre el Banco de Sabadell anunciaba su marcha. El consejo de administración de la entidad bancaria decidió trasladar su domicilio social a Alicante. Pronto la Comunidad Valenciana también daría la bienvenida a La Caixa. En pocos días se esfumó el sector financiero de Cataluña y miles de empresas seguirían el mismo camino. Desde entonces la fuga empresarial, en busca de más seguridad jurídica y menos carga fiscal, no ha cesado, siendo la Comunidad de Madrid la más beneficiada por el nacionalismo catalán. El miedo cundió también entre los pequeños ahorradores. Tanto constitucionalistas como independentistas acudieron a las sucursales bancarias temerosos por sus cuentas corrientes. No pocos for-maron colas en Fraga (Huesca) o Vinaroz (Castellón) para crear una nueva cuenta. Otros pidieron al banco abrir cuentas espejo. La locura política no era gratis y Cataluña empezaba a pagar un alto precio.

En medio de aquel bucle de autodestrucción y espoleados por el discurso del rey, la Cataluña constitucionalista por fin reaccionó. Necesitábamos decir basta ya. El nacionalismo había ido demasiado lejos. Así, el 8 de octubre, Sociedad Civil Catalana (SCC) nos citaba a todos en la plaza Urquinaona, esa plaza que dos años después la *kale*

borroka destrozaría orgullosa ante el aplauso de personajes como la exconsejera de Educación Clara Ponsatí. Sí, de Educación. Miles de catalanes fueron por primera vez a una manifestación. Ya no podíamos más. «Recuperem el seny» era un lema suficientemente transversal. Aquella mañana, cientos de miles de catalanes salimos de casa con una bandera española o una *senyera*. Las dos nos representaban. Nos miramos a los ojos y, finalmente, sonreímos: no estábamos solos. Descubrimos a vecinos que sentían lo mismo que nosotros, la misma angustia ante el fanatismo. Tras un largo silencio, surgió una nueva fraternidad. La Cataluña plural, abierta y cosmopolita despertaba. El diputado y cantante nacionalista Lluís Llach nos llamó buitres a todos los catalanes que aquel día defendíamos la convivencia y la democracia. El nacionalismo siempre tiende a deshumanizar al adversario. Ya señaló George Orwell que el nacionalismo es una manera de clasificar a los seres humanos como si fueran insectos. Bien, aquel día hicimos una metamorfosis. Y salimos a la calle y nos abrazamos y gritamos que no estábamos solos. Caminamos muy poco. Algunos no pudimos pasar de la plaza de Cataluña, quedándonos a más de dos kilómetros de la cabecera de la manifestación. Era increíble. El centro de Barcelona estaba lleno de «buitres», estaba lleno de ciudadanos catalanes libres de nacionalismo, que, a diferencia de las manifestaciones organizadas por la ANC, no seguían consignas. No era una masa homogénea. Al contrario, era un auténtico caos. Ni íbamos uniformados con la misma camiseta ni había cánticos previstos. Sin escenografía norcoreana, todo era espontáneo. Éramos libres. Fue una catarsis. Muchos lloraron, porque era demasiada la tensión acumulada.

No obstante, el nacionalismo se mantuvo ciego ante la realidad plural de Cataluña. Era impermeable a la angustia de los otros catalanes. Dos días después de aquella histórica manifestación, se produjo uno de los discursos más surrealistas del ya de por sí surrealista proceso independentista. Puigdemont compareció ante el Parlament. Miles de entusiastas esperaban desde el paseo de San Juan una declaración unilateral de independencia. Todo parecía organizado. Aquella mañana salí de la sede del Partido Popular Catalán con Alejandro Fernández y tomamos un taxi hacia el Parlament. Normalmente usaba el autobús, pero ese día había medidas especiales

de seguridad. El parque de la Ciutadella estaba acordonado. Recuerdo que en el taxi compartimos nuestra preocupación. No teníamos ni la más remota idea de qué iba a pasar. Habíamos dormido poco. Creíamos que Puigdemont era muy capaz de provocar un conflicto civil. Era un cobarde, como demostraría días después con su fuga a Bélgica, por lo que bien podría declarar la independencia y dejar que fuera la masa fanatizada la que siguiera con el plan, ocupando infraestructuras del Estado o el propio edificio del Parlament. Todos los diputados comimos allí mismo. Era mejor no salir. Diputados de otros partidos constitucionalistas nos transmitían la misma preocupación: no habrá independencia, pero Puigdemont es capaz de provocar un peligroso choque entre catalanes. Sin embargo, al llegar al despacho percibimos que algo había cambiado. Compartíamos pasillo con los diputados de la CUP. La cara de éstos era un poema. Cabizbajos, evidenciaban que aquel no iba a ser el día de la independencia. No obstante, el discurso de Puigdemont fue demencial. En su línea. Empezó, de manera inaudita, reconociendo la pluralidad de Cataluña. Quizá la manifestación de Sociedad Civil Catalana había servido de algo. La Unión Europea también había dejado muy claras las consecuencias de la independencia, y las grandes empresas estaban trasladando sus sedes fuera de Cataluña. Quizá «el boig» —así le llamaban en la sede de su propio partido, el loco— había sido iluminado por un haz de cordura. Pero no. Fue elevando el tono. Repitió todos los mantras y todas las mentiras, incluso aquellas que habían quedado olvidadas en otras etapas del *procés*. Y en el punto más álgido de la alocución, cuando parecía claro que iba a declarar la independencia, la declara..., y ocho segundos después la deja en suspenso. O no, porque sus palabras exactas, tras asumir «el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de república», fueron las siguientes: «Y con la misma solemnidad, el Govern y yo mismo proponemos que el Parlament suspenda los efectos de la declaración de independencia para que en las próximas semanas emprendamos un diálogo». En ningún momento el pleno del Parlament suspendió ninguna declaración de independencia, aunque tampoco quedaba claro si ésta se había producido. Retórica ambigua e inseguridad jurídica; era el *procés* en

todo su esplendor. Ahora entendíamos la frustración en los rostros de los cuperos. Sin embargo, estos diputados y los de Junts pel Sí firmarían en otra sala del palacio una declaración según la cual se constituía «la República catalana, como Estado independiente y soberano de derecho, democrático y social». No llegarían a registrarla.

La incertidumbre era absoluta y el Gobierno de España tuvo que tomar una decisión que hasta entonces no contaba con el apoyo de algunos partidos constitucionalistas como el PSOE y Ciudadanos. De acuerdo con el artículo 155 de la Constitución, se mandó un requisito previo a Puigdemont para que explicara si había declarado la independencia y, en todo caso, rectificara. Éste contestó con evasivas, miedoso de pinchar la burbuja de ilusión que había creado entre los más radicales. El Ejecutivo de Mariano Rajoy le envió un segundo requerimiento. Era su última oportunidad para restaurar el orden constitucional, pero Puigdemont seguía oficiando una ceremonia de la confusión. Así pues, el Consejo de Ministros aprobó un conjunto de medidas que, amparadas por el artículo 155, enviaría al Senado.

La cuenta atrás avanzaba imparable. En la madrugada del 25 al 26 de octubre se reunieron en el palacio de la Generalitat el Govern, diputados de Junts pel Sí y aquellos que influían desde la sombra. Puigdemont estaba dispuesto a convocar elecciones. Junqueras lo deseaba, pero no podía admitir públicamente que su principal objetivo era ser *president* lo antes posible. Prefería que fuera Puigdemont quien asumiera el desgaste de la rectificación, así que calló. Los silencios del líder de ERC hicieron tanto daño como los lloros de su secretaria general, Marta Rovira. Ésta exigía una declaración unilateral de independencia con todas sus consecuencias. Al final se decidió convocar elecciones, pero el consejero Santi Vila, al que todo el nacionalismo ya consideraba un traidor, se puso exquisito y pidió que el decreto de convocatoria se firmara a la mañana siguiente. No podía hacerse con nocturnidad, alegaba. Fue un error fatal, ya que la espera permitió que se desencadenara una espiral de acusaciones, presiones y golpes en el pecho. Al final, no con-vocó.

La oscuridad invadía el parque de la Ciutadella. Allí se aloja el Parlament de Cataluña. Era el jueves 26 de octubre y salía acompañado de Fernando Sánchez Costa, amigo y entonces también

compañero en el Grupo Popular. Más tarde sería elegido presidente de Sociedad Civil Catalana. Como en tantas otras ocasiones, conversábamos sobre las experiencias vividas durante las últimas semanas y nos preo-cupaba el futuro de una sociedad tan polarizada. Habíamos hablado con diputados de partidos independentistas. Había de todo. Aunque públicamente mantenían una disciplina férrea respecto a un mismo argumentario, en privado manifestaban visiones muy diferentes sobre cómo habíamos llegado hasta allí y sobre qué iba a suceder en el futuro. No pocos compartían la opinión de que la competición entre Puigdemont y Junqueras estaba llevando a Cataluña hacia un conflicto civil. Otros seguían creyendo que el *procés* era una manera de lograr un pacto fiscal y el blindaje de competencias. Ésos mentían deliberadamente a sus votantes. También es cierto que unos pocos estaban convencidos de que la independencia estaba a punto de ser una realidad. Un dirigente de ERC me aseguró que los reconocimientos internacionales llegarían en tres meses, porque así se lo había asegurado Vicent Partal, un periodista valenciano y activista independentista ultrasubvencionado. Con esos referentes no podían llegar muy lejos. De todas maneras, los que vivían en una nube aquel día bajaron de ella. Puigdemont les había dicho que no había nada. Nada de nada. Ni estructuras de Estado, ni apoyos internacionales, ni tan siquiera los *mossos* estarían a favor de quebrar la legalidad.

Aún seguía en el parque cuando se me acercó un diputado de Junts pel Sí. Estaba tremendamente inquieto, pero no por el futuro de Cataluña, sino por el suyo personal. Había coincidido con él en algunas tertulias radiofónicas, tras las cuales solía advertirme de que nadie les iba a parar y que la independencia era inminente. Era de los que se lo creían, de los pocos que decían lo mismo en público que en privado. Y lo hacía con una prepotencia que destilaba ignorancia respecto al funcionamiento de un Estado y a las relaciones internacionales. Sin embargo, aquella tarde le habían abierto los ojos. Mañana iban a declarar la independencia sin ambigüedades ni subterfugios, y él no quería ir a la cárcel, sollozaba. Pedía que «vuestros amigos en Madrid» los rescataran, que negociaran y evitaran la declaración. Me explicó que Puigdemont quería ser ahora como Josep Tarradellas y llegar a grandes acuerdos con el Gobierno español. Me quedé atónito. Pasaban

con asombrosa facilidad de la amenaza a la súplica. Reconozco que me vinieron a la mente las palabras que se le atribuyen a la madre del rey Boabdil. Aquellos lloriqueos eran fruto de la irresponsabilidad absoluta y de un pasmoso analfabetismo político. ¿A esas horas se daban cuenta de que el final del *procés* no sería un choque de trenes? Otra diputada de su partido, de la vieja escuela y con algo de dignidad, se lo llevó para que no siguiera haciendo el ridículo. Ella dejaría la política, pero aquel diputado seguiría en el Parlament en la siguiente legislatura y seguiría amenazando con volver a hacer lo que fuera que hiciesen. El separatismo tiene una capacidad increíble para aceptar las contradicciones y dar bandazos sin inmutarse. Será imposible confiar en la palabra de toda esa generación de políticos nacionalistas.

El día después se aprobaría la célebre declaración unilateral de independencia (DUI). El independentismo iba a disparar su bala de plata, pero apuntaron a su propia cabeza. Las caras de los diputados independentistas no eran precisamente eufóricas. Sabían que no estaban atracando en el puerto de Ítaca. Nadie se fiaba de nadie, pero ya todos tenían muy claro que ningún país iba a reconocer la independencia de Cataluña y que aquella misma tarde el Senado aprobaría la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Se había acabado el juego. Una vez más, el nacionalismo había apostado por el *tot o res*, por el todo o nada, y el resultado fue el de siempre. No habían leído a Gaziel, aquellos imprudentes. Tras el pleno del Senado, se celebró el Consejo de Ministros. El presidente Mariano Rajoy explicaría las medidas aprobadas: se cesaba a todo el Govern y se convocaban elecciones autonómicas que se celebrarían lo antes posible, el 21 de diciembre. Para apoyar estas medidas, el PSOE exigió dejar fuera del control del Estado los medios de comunicación públicos y los Mossos d'Esquadra. Según el periodista Santiago Tarín, algunos dirigentes socialistas le comentarían más tarde que se habían equivocado. Una vez más. Con todo, y tras meses de emociones al límite y noches sin dormir, la mayoría de los catalanes sentimos alivio. El golpe había fracasado rotundamente, pero no había tiempo para relajarse. Ya nos encontrábamos en plena precampaña electoral.

La vicepresidenta del Gobierno de España, Soraya Sáenz de Santamaría, tomó las riendas de la Generalitat. Nadie opuso

resistencia. Puigdemont se había ido a tomar unas tapas a Gerona y, tras animar a sus *consellers* a ir al trabajo al siguiente lunes, se fugó a Bélgica escondido en la parte trasera de un coche. Tapas y fuga, ésa fue la reacción del valiente cobarde tras provocar la pérdida de la autonomía. En la sede de su partido se escucharían palabras más gruesas sobre él. Tras la aplicación del artículo 155 surgieron las divisiones en el separatismo. Ya no volverían a acudir unidos a las urnas. Todas las contradicciones acumuladas en los últimos años estallarían. Había diferencias ideológicas y estratégicas, pero sobre todo había una lucha partidista por el reparto del botín, por el control de los medios, por el reparto de cargos y recursos. Entonces también surgiría una disputa por imponer el relato de lo que había pasado. Empezaban a colgarse las etiquetas de traidor.

Los dirigentes independentistas tuvieron muchas oportunidades para reconocer la verdad y rectificar; por ejemplo, tras cada contienda electoral en la que no conseguían un apoyo mayoritario o cada resolución judicial que mostraba la ilegalidad del camino emprendido. A sus seguidores tampoco les faltaron indicios de que el *procés* era una gran estafa: sólo debían sacar la cabeza de aquella burbuja mediática, escuchar qué estaban diciendo las autoridades europeas o prestar algo de atención a los catalanes angustiados. Sólo un exceso de sentimentalismo puede explicar que tantas personas se dejaran engañar durante tanto tiempo. Por esta razón, en este repaso cronológico de los últimos meses del *procés* he querido añadir algunas pinceladas autobiográficas con la pretensión de mostrar la atmósfera emocional que entonces envolvía la sociedad catalana: cómo vivimos la manifestación contra los atentados yihadistas, la aprobación de las leyes de desconexión en el Parlament o las horas previas a la declaración de independencia. Fueron momentos claves en los que la historia pudo haber tomado otro rumbo menos peligroso. Con el paso de los años y el enfriamiento de las pasiones, cuesta creer que todo aquello sucedió realmente. ¿Cómo habíamos llegado hasta allí? Quienes prometían la independencia habían provocado la intervención de la autonomía. Una sociedad próspera y hasta entonces admirada había sucumbido a los cantos del peor populismo y se lanzaba a una aventura cuyo final no podía ser, de ninguna manera, feliz. El

nacionalismo nunca es una buena idea, pero en una sociedad tan compleja como la catalana esa radicalidad nacionalpopulista resulta nefasta, sólo puede conducir a una fractura difícil de reparar. Se sacralizó la independencia y cuestiones tan importantes como la educación, la sanidad o la economía se convirtieron en irrelevantes. El *procés* fue un atroz abandono de la ética de la responsabilidad. Sólo importaban las convicciones o, mejor dicho, la convicción. Las consecuencias no eran tenidas en cuenta, por lo que todo degeneró con rapidez. Los principales bancos y miles de empresas trasladarían sus sedes sociales. Aún hoy no han vuelto. El declive económico sigue siendo un coste de aquella locura política. Es el efecto Quebec. Mientras se siga amenazando con volver a hacerlo, aunque sea con poca convicción, las empresas no volverán y el declive seguirá. El dinero no quiere revoluciones ni inseguridad jurídica. No pocas inversiones se paralizaron. Se perdió la Agencia Europea del Medicamento. Ésta no iba a escapar del Brexit para caer en una región que pretendía proclamar el *catexit*. El talento también aceleraría su huida. La decadencia cultural de Barcelona respecto a Madrid también empezó a ser evidente. Debería analizarse la diáspora provocada por el *procés*, un daño discreto, pero real y profundo. La permanente politización de la sociedad no es en especial atractiva para aquellas personas que aspiran a vivir en paz. En definitiva, el nacionalismo infligió un golpe irreparable a la Cataluña que tanto decía amar. Una parte extasiada de los catalanes nos arrastró a todos hacia el abismo. Pero la de esos meses no fue una locura transitoria. Aunque con una engañosa menor intensidad, aún hoy persiste. Y tampoco podemos decir que surgiera de la nada, ya que se fraguó, de manera más o menos discreta, durante décadas.

El inicio del *procés* suele situarse en 2012. Un año antes emergía en España otro tipo de populismo: el movimiento del 15-M o de los indignados. Desde la madrileña Puerta del Sol se expandió por todo el país, impactando notablemente en Cataluña. Aquí se produjo una de las imágenes más impactantes que explican la posterior deriva de la gobernante Convergència. El 15 de junio, el Parlamento catalán iba a aprobar unos presupuestos que suponían recortes en materias sociales. Los «indignados» se organizaron para sitiar el edificio donde reside el

Legislativo catalán. Algunos diputados fueron atacados. El ambiente ya estaba caldeado por el desalojo de la plaza Cataluña por parte de los *mossos* que días antes había dejado decenas de heridos. El nivel de agresividad contra los políticos era elevado, pero lo que más preocupaba al nacionalismo era que los manifestantes no blandieran ni una sola *estelada*. Artur Mas acabó accediendo al Parlament en helicóptero. Y aunque a finales del año anterior aún rechazaba en TV3 cualquier planteamiento que pasara «por dividir la sociedad catalana en dos mitades», en su cabeza germinaba la idea de frenar el populismo izquierdista alentando el nacionalpopulismo independentista.

El asalto se había convocado bajo el antidemocrático lema «Aturem el Parlament» («Paremos el Parlamento»). Como hemos visto, años después el nacionalismo llamó a «aturar la Guàrdia Civil». El objetivo explícito era impedir la sesión plenaria que iba a debatir los presupuestos de la Generalitat de Cataluña. El choque entre manifestantes y *mossos* provocó más de veinte heridos de carácter leve. Los sucesos fueron graves —algunas imágenes, crueles— y así lo entendieron tanto la Generalitat como el propio Parlament. Ambas instituciones pidieron penas de hasta tres años de cárcel para los asaltantes. También cinco diputados de Convergència i Unió presentaron denuncias. Interferir en el buen funcionamiento de las instituciones era un ataque a la democracia que no se debía permitir. El convergente Jordi Turull fue de todos el más contundente al tildar los sucesos de «golpe de Estado encubierto» y apuntar directamente a los organizadores, ya que la convocatoria de un acto de ese tipo era como «llamar a los violentos antisistema a su festín».

Aquel populismo sería superado con rapidez por los que entonces formaban parte de la «casta» catalana. Los «indignados» fueron íntegramente absorbidos por el *procés*, una de las fusiones entre el nacionalismo y el populismo más conseguidas en la Europa de las últimas décadas. El *president* Artur Mas pasaría de ser abucheado por los recortes sociales a ser aclamado como un Bolívar posmoderno. Una fecha clave, que suele pasar inadvertida en las crónicas de aquellos años, fue el 23 de marzo de 2012. Convergència Democràtica de Catalunya celebró un congreso en Reus que cambiaría la historia del

partido y también la de la sociedad catalana. El *establishment* iba a promover un movimiento populista. Aquel congreso aupó a Oriol Pujol como nuevo secretario general de la formación y aprobó la ponencia política coordinada por Francesc *Quico* Homs titulada «La transició nacional», que es como se denomina-ba al *procés* antes de llamarse *procés*. En tiempos venideros se abusaría tanto de los eufemismos como de las metáforas marineras, pero por si la cuestión no estaba suficientemente clara, el nuevo secretario general aseveró que Convergència era «mucho más que un partido independentista».

Un populismo engulló a otro populismo. Si en 2011 algunos diputados convergentes habían escondido la corbata para pasar inadvertidos entre los «indignados» que les increpaban, un año después se la quitarían definitivamente para adentrarse en la selva a lomos del tigre populista. En un arrebato de sinceridad, el entonces consejero Santi Vila preguntó en voz alta: «¿Si este país no hubiera hecho un relato en clave nacionalista, cómo hubiera resistido unos ajustes de más de 6.000 millones de euros?». Fue, claramente, un movimiento impulsado desde el poder autonómico, una confrontación incentivada desde la Administración y los medios públicos. Una enorme irresponsabilidad. Así se lo dije a un *conseller* en los pasillos del Parlament. Bajó la cabeza y susurró: «Ya se lo he dicho al *president*. Cuando sacas la pasta de dientes del tubo, es imposible volverla a meter». El sensato *conseller* no repetiría en el próximo Gobierno. Sabía que sacar la política de las instituciones es peligroso; una vez en la calle, la reflexión y el diálogo se complican.

En nuestra búsqueda de paralelismos y paradojas, cabe recordar un epílogo de la historia del asedio del Parlament. En 2014, la Audiencia Nacional absolvió a los encausados, pero la Generalitat y el Parlament recurrieron la sentencia ante el Tribunal Supremo, que acabaría dándoles la razón en marzo de 2015, al condenar a ocho personas a tres años de cárcel. Ante esta decisión, miles de personas se manifestaron desde la plaza Universitat a la plaza Sant Jaume al grito de «Jo també estava al Parlament, jo també ho tornaria a fer». Ellos también amenazaban con volver a hacerlo. Sin embargo, el entonces consejero de Presidencia, Homs, se congratulaba y afirmaba que la sentencia del Tribunal Supremo estaba en consonancia «con el

sentimiento mayoritario del pueblo de Cataluña». Fuera como fuese, no lo volvieron a hacer.

Con toda una Administración pública como la Generalitat y la gran mayoría de los medios de comunicación catalanes volcados a favor de la causa, la batalla por el relato era totalmente desigual. Las cuestiones sociales desaparecieron de la agenda pública y, en todo caso, había una respuesta única y sencilla para responder a cualquier crítica al Govern nacionalista: «expolio fiscal». La culpa siempre era de Madrid. Así no sólo se ofrecía una explicación simple a problemas complejos, también se creaba un enemigo externo, que permitía abolir la crítica interna fortaleciendo el sentimiento de comunidad o tribu. Cualquier desviación del discurso oficial era una traición. De este modo, la izquierda catalana, siempre acomplejada ante el nacionalismo, se vio incapaz de ofrecer una alternativa. Además, el PSC había demonizado al Partido Popular en sus últimas campañas electorales. Este partido, que en la actualidad se presenta como la voz de la moderación, había radicalizado a miles de catalanes contra el partido constitucionalista que ahora gobernaba España. Las campañas socialistas dirigidas por el entonces secretario de organización del PSC, José Zaragoza, generaron un caldo de cultivo perfecto para el crecimiento del separatismo en caso de que el Partido Popular accediera al Gobierno de España. «Si tú no vas, ellos vuelven» fue el eslogan de una campaña, la de 2008, que se sustentaba en las emociones adversativas, en la confrontación. «Ellos» y «nosotros». Los nacionalistas tomaron buena nota y pulieron aún más la estrategia, incluyendo a los propios socialistas dentro del «ellos». Es lo que tiene jugar con el fuego populista, siempre hay alguien capaz de superarte.

Pero volvamos a 2012. Ahora, un PSC liderado por el poco conocido Pere Navarro se sumaba a la tramposa campaña del «derecho a decidir» y prometería un referéndum en su programa electoral. Más tarde corregirían la estrategia, pero el daño ya estaba hecho. Habían colaborado en el señalamiento de los que legítima y razonablemente se oponían a un referéndum como panacea. Sin embargo, quien siempre jugaría el papel de siervos del nacionalismo era la supuesta izquierda alternativa, desde Iniciativa per Catalunya hasta, más tarde, los comunes y Podemos, así como los sindicatos. Tanto CC. OO. como UGT

participarían en todas aquellas *performances* que servían para legitimar el proyecto rupturista del nacionalismo. Los dirigentes de las organizaciones izquierdistas y sindicales catalanas siempre han estado más preocupados por agradar al *establishment* nacionalista que por defender los intereses de sus votantes o afiliados. Objetivamente no hay ningún elemento que permita defender el *procés* como una causa progresista. De hecho, ha perjudicado en especial a los trabajadores y a los más vulnerables, limitando las oportunidades laborales y desviando recursos del Estado del bienestar hacia las políticas nacionalistas o las denominadas «estructuras de Estado». La izquierda catalana siempre tuvo miedo de enfrentarse a lo que consideraba un movimiento mayoritario.

En aquellos tiempos, el PSC solía justificar el proceso independentista invocando la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía. Era una excusa espuria. La sentencia había sido publicada en 2010. Convergència i Unió siguió durante dos años apoyando medidas del Gobierno de España. El PSOE votó a favor de la investidura de Artur Mas y el PPC permitió, con su abstención, la aprobación de dos presupuestos de la Generalitat. No fue la sentencia. El lector puede pedir a cualquier converso al separatismo que le diga uno, sólo uno, de los artículos suspendidos por el TC y no sabrá qué contestar. La sentencia era una simple excusa *a posteriori*. El gran cambio que impulsa el *procés* es la estrategia adoptada por CiU en 2012. Por una parte, Artur Mas temía ser devorado por el populismo de los indignados, como hemos comentado, pero también había otros motivos. La corrupción no era el menor de ellos. El conocido como Caso Palau o Caso Millet había estallado en 2009, y por aquellos años estaba en periodo de instrucción. Afectaba al corazón de la financiación del partido de Mas. La empresa Ferrovial a través del Palau de la Música pagaba comisiones por la adjudicación de obra pública al partido que más años había gobernado en Cataluña. El runrún en Cataluña sobre las comisiones del 3 por ciento venía de lejos, pero el oasis político todo lo tapaba. No sería el único caso. En aquel mismo 2012 se conoció un informe de la Agencia Tributaria que situaba a Oriol Pujol, hijo de Jordi Pujol y flamante secretario general de CDC, como colaborador necesario de una trama que trataba de

arreglar concursos de concesiones de estaciones de inspecciones técnicas de vehículos. Sería el caso ITV. Acabaría siendo imputado por tráfico de influencias y condenado. Ingresó en prisión en 2019, pero a los dos meses la Generalitat le otorgó el tercer grado.

La radicalización de Convergència tenía, pues, motivos menos épicos que la liberación nacional. En gran parte, se trataba de generar una gran cortina de humo que pudiera tapar la mala gestión y la corrupción y, así, continuar ostentando un poder prácticamente absoluto sobre la sociedad catalana. Este cambio de discurso no podía motivarse públicamente sólo sobre las bases étnicas, culturales o lingüísticas. La cuestión étnica nunca ha abandonado del todo el nacionalismo catalán, como muestran algunos ar-tículos de Junqueras o Torra, pero desde la Segunda Guerra Mundial no son argumentos internacionalmente aceptables. La cuestión lingüística también estaba allí, pero no era suficiente para movilizar a una mayoría de catalanes a su favor. Así que, aprovechando la crisis económica, impulsaron un discurso de xenofobia fiscal similar al de la Liga Norte italiana. El famoso «Espanya ens roba» era un plagio adaptado del «Roma ladrona» de Umberto Bossi. Dos años después, Mas invitaría al número dos de la formación ultraderechista, Roberto Maroni, al Palau de la Generalitat y éste reconocería que ambos partidos mantenían contactos periódicos.

Artur Mas exigió un «pacto fiscal» imposible en un contexto en el que España despertaba cada mañana pendiente de la prima de riesgo. Es indiscutible que buscaba la excusa para alimentar el resentimiento y romper puentes de diá-logo. Había tramado el portazo. De otra manera, no se entendería una estrategia negociadora tan improductiva. Su planteamiento era amenazar con la «transición nacional» (la independencia) si el Gobierno de España no aceptaba ese pacto fiscal; pero en caso de llegar a un acuerdo, Mas prometía a los catalanes que sería simplemente la antesala de la «transición nacional». Así pues, era independencia o independencia. La diferencia es que con el pacto fiscal tendrían más recursos para financiar la rebelión. Es obvio, pues, que Mas pretendía crispar la sociedad catalana a las puertas de unas elecciones autonómicas que iba a adelantar con el objetivo de obtener una «mayoría indestructible».

En aquella campaña electoral, el partido, que en las anteriores se

había presentado como un proyecto «bussiness friendly», adoptó todos los elementos del populismo. Mas se presentaba como el intérprete de «la voz de la calle». Su liderazgo se imbuía del espíritu del pueblo. Éste se había manifestado multitudinariamente en la primera de las grandes *diades* del 11 de septiembre. El clamor debía ser escuchado. La Assemblea Nacional Catalana había convocado al independentismo bajo el lema «Catalunya, nou Estat d'Europa». Gran parte de la burguesía catalana abandonaba el *seny* y abrazaba la épica revolucionaria. Estaban deseosos de protagonizar un momento histórico o, más bien, histérico. No pocos rememoraron una lucha contra el franquismo que, en realidad, nunca habían practicado. En el cartel electoral aparecía Mas con los brazos abiertos, liderando a la masa, cual Moisés posmoderno. «La voluntat d'un poble», rezaba el eslogan. Populismo en vena. Cataluña siempre había sido tierra de vanguardias desde la Revolución Industrial. Ahora también lo iba a ser, pero, en este caso, de las improductivas revoluciones nacionalpopulistas.

A pesar de la retórica unanimista, la sociedad catalana era más plural de lo que el nacionalismo deseaba. Una vez más, la suma de los partidos nacionalistas no alcanzó el 50 por ciento de los votos. Y Mas recibiría un golpe de realidad al perder doce diputados. Aquella noche, la del 25 de noviembre, estuvo a punto de dimitir. Cuántos problemas nos habríamos ahorrado los catalanes. Al menos, podría haber reconocido el error y rectificar la deriva populista. Pero no. Nunca rectificaría. Ésa es una práctica de sabios. El insensato Mas dobló la apuesta de la mano y lo hizo de la mano de la siempre desleal ERC. Centraría toda la legislatura en el «derecho a decidir», un subterfugio del derecho de autodeterminación, que haría fortuna no sólo entre los independentistas, sino también entre incautos y esnobs equidistantes. Los dos grandes partidos nacionalistas firmaron el «Acord per a la Transició Nacional» y marcaron en el calendario el primero de los plazos formales del *procés*. En 2014 debía celebrarse una consulta. Para ayudar técnicamente en todo ese proceso se creó el Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), presidido por el exvicepresidente del Tribunal Constitucional Carles Viver Pi-Sunyer, quien ya había hecho de las suyas en la gestación del Estatut. El Consell estaba

formado por académicos como Núria Bosch, Enoch Albertí, Ferran Requejo, Salvador Cardús o Àngel Castiñeira. No faltaron clérigos a favor de la nueva religión. Entre ellos también estaría la omnipresente tertuliana, y biógrafa de Mas, Pilar Rahola. El CATN redactaría diversos informes que conformarían el libro blanco de la independencia. Todo estaba allí: la hoja de ruta de la «transición nacional» y cómo superar los obstáculos que pondría el Estado.

En aquellas elecciones emergió la Candidatura d'Unitat Popular (CUP), un grupo que adquiriría una desproporcionada influencia política teniendo en cuenta su escaso apoyo social. Hijos de una burguesía sin virtudes burguesas, los cuperos son revolucionarios sin solidaridad. Lejos de cualquier obrerismo, defienden causas identitarias y legitiman el discurso de xenofobia fiscal de los nuevos convergentes con toques aparentemente progresistas. Son lo que Christophe Guilluy denomina «antifascistas de pandereta», porque su supuesto antifascismo sólo sirve para justificar las prácticas menos democráticas y, también, para aparcar respuestas eficaces a los problemas reales de los más vulnerables. La CUP entró de cabeza en la competición por la pureza nacionalista que ya protagonizaban Mas y Junqueras, y sería un acelerador del *procés*, uno de los elementos que lo harían descarrillar.

Una de las cumbres de la demagogia nacionalpopulista de aquella legislatura fue la celebración del denominado tricentenario. El derroche de recursos públicos en propaganda fue colosal. Se conmemoraban los trescientos años de la guerra de sucesión, que ahora se reescribía como una guerra de secesión. La gran manipulación se había iniciado en el anterior mes de diciembre en el simposio titulado «Espanya contra Catalunya. Una Mirada Històrica 1714-2014», dirigido por el siempre oportunista Jaume Sobrequés. «La historia es un arma pacífica al servicio del futuro de nuestro pueblo», clamaba en la inauguración. El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por el convergente Xavier Trias, convirtió el Centre Cultural del Born en la zona cero, renunciando a la que podría haber sido una magnífica biblioteca. A este mausoleo de piedras con poco valor arqueológico el nacionalismo le otorgaba una gran importancia simbólica. En la puerta y ante el paseo del Born, una *senyera* con un mástil de 17,14 metros

sigue dando la bienvenida a quien visita estas ruinas. Ese año tuvimos cabalística nacionalista en torno al 1714 hasta en la sopa. La política catalana miraba al pasado, pero a un pasado muy lejano. El más reciente no interesaba tanto. Las corruptelas de Jordi Pujol y familia no debían ensombrecer la mística lograda por aquellas fechas. Así, la confesión del fundador de Convergència sacudió la política catalana, pero sólo momentáneamente. Pujol reconoció que él y su familia tenían cuentas sin regularizar en Andorra, una fortuna oculta. Rápidamente se enterró al mito. Y se volvió a situar en el centro del debate la consulta ilegal que se celebraría el 9 de noviembre. En ese momento parecía que, por una vez, el contexto internacional podía ayudar a la causa. En Escocia se celebró un referéndum de independencia el 18 de septiembre. Sin embargo, ganó el «no». El primer ministro británico, David Cameron, había jugado con fuego, pero esta vez no se quemó. Sería en el siguiente, en el del Brexit.

El carácter binario de los referendos concuerda perfectamente con esa visión antipluralista de la sociedad que promueve el populismo. Ésta se dividiría entre el pueblo y el antipueblo, amigos y enemigos, nosotros y ellos, colonos y oprimidos, *nyordos* e *indepes*. Se anula toda complejidad. Se impone la voluntad de la parte ganadora, sin concesiones. Hay algo de futbolización de la política. Sólo uno puede ganar. El *procés* era un Barça-Madrid, un clásico como el que enfrentaba a los equipos de Pep Guardiola y José Mourinho. Se vivía la política con pasión y minuto a minuto. Así era la retransmisión que más audiencia alcanzaría aquellos años: vibrantes narraciones de los acontecimientos por Jordi Basté en la cadena de radio RAC1 y Antonio García Ferreras en La Sexta. Ambos provenían del periodismo deportivo, y como un partido de fútbol nos contaron la política.

Artur Mas firmó el decreto de convocatoria y el Gobierno de España lo recurriría ante el Tribunal Constitucional, quedando automáticamente suspendido. Aquí apareció la fa-mosa «astucia» del *procés*; a saber, una nueva mentira, un reajuste táctico o un cambio de nombre. En este caso, la consulta pasó a llamarse «proceso participativo». Nueva impugnación y nueva suspensión. Con todo, la consulta del 9-N se celebró y Artur Mas se regodeó con ese éxito ante las cámaras. Más tarde sería inhabilitado y, con los cabecillas de

aquella jornada, acabaría devolviendo el dinero malversado en ella. En el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre el 9-N ya veríamos el doble discurso que los líderes sediciosos emplearían tiempo después ante el Tribunal Supremo. Ante los medios de comunicación el vanidoso Mas clamaba: «Nos quieren de rodillas, pero nos hallarán de pie». Sin embargo, en el juicio descargó todas las responsabilidades sobre los voluntarios y su defensa apuntó a cuestiones técnicas para evitar cualquier pena. Los políticos nacionalistas no se irían de rositas, pero aquella consulta había aumentado la sensación de desamparo del constitucionalismo en Cataluña. Parecía como si el Estado no tuviera instrumentos para cortocircuitar el proyecto secesionista o que el Gobierno no quisiera actuar preventivamente, sino sólo arrastrado por los acontecimientos. Por su parte, el nacionalismo tampoco se creía vencedor del todo. Las disputas internas se hicieron más evidentes tras la consulta. Ésta, al fin y al cabo, no había tenido más impacto que el puramente propagandístico, por lo que las organizaciones independentistas exigían una inmediata convocatoria electoral con carácter plebiscitario. «President, posi les urnes», mandaba la presidenta de la ANC Carme Forcadell. La mala experiencia de 2012 y la confesión de su padre político no aconsejaban a Mas concurrir en solitario. Así que presionó a ERC para una candidatura conjunta y, tras enormes tensiones, Oriol Junqueras, como casi siempre, cedió.

Las elecciones se celebrarían el 27 de septiembre de 2015. La campaña se iniciaba, cómo no, el 11 de septiembre. La lista de la coalición independentista, Junts pel Sí (JxSí), sería encabezada por el comunista Raül Romeva. Después aparecían las lideresas de la ANC y Òmnium, Forcadell y Muriel Casals. Mas se situaba en el cuarto puesto de la lista. Evitaba dar la cara, pero se postulaba como el presidenciable. Era otra astucia del *procés* para esconder la corrupción, otra manera de no dar la cara y rendir cuentas. Junqueras era el número cinco y el exfutbolista Pep Guardiola cerraba la lista de Barcelona. A pesar de que el lema fue «el voto de tu vida», una vez más, el separatismo no alcanzó la mayoría de los votos. El plebiscito había fracasado, pero sólo el candidato cupero Antonio Baños lo reconocería. Sería pur-gado. Dentro de la burbuja, señalar la verdad

merece un castigo. Así pues, siguieron negando la existencia de la Cataluña no independentista. Siguieron ignorando a la mayoría de los catalanes. El nacionalismo se inventó un plebiscito y, después, se inventó que lo había ganado. Perdió otra oportunidad para la rectificación y siguió prometiendo la independencia, esta vez, en dieciocho meses. La cuenta atrás estaba en marcha, pero Mas no sería el *president*. JxSí no había logrado la mayoría absoluta en escaños, por lo que dependía de la CUP. Ésta mandaría al sucesor de Pujol «a la papelera de la historia» tras una esperpéntica votación asamblearia que resultaría en un poco creíble empate a 1.515 votos. Puestos a dar un pucherazo, podrían haber empatado a 1.714. Las garantías en las votaciones nunca han sido el punto fuerte del nacionalismo catalán. Finalmente, se invistió como presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont, alcalde de Gerona y presidente de la Associació de Municipis per la Independència (AMI). Era un separatista de toda la vida con buenas relaciones en la CUP. Artur Mas, aconsejado por periodistas de su cuerda, lo eligió pensando que sería manipulable y que podría seguir, de alguna manera, gobernando en la sombra. Se equivocó, una vez más.

La legislatura empezó mal y acabó peor. El buen gobierno nunca fue una prioridad de aquellos que debían guiar a los catalanes hacia la tierra prometida. Sin embargo, alguien debía gestionar la realidad social y económica de esta autonomía. Al menos debían aprobarse unos presupuestos, y la CUP presionaba para que se concretaran pasos hacia esa independencia en dieciocho meses que se había prometido. Sin la CUP, no había presupuestos, así que Puigdemont se sacó de la chistera procesista aquel «referéndum o referéndum» que iniciaría la historia de desobediencia ya contada. Ahí hubo un punto de inflexión. Durante años el *procés* había invadido nuestras vidas. Parecía como si estuviéramos sufriendo una frenética sucesión de cambios históricos. Sin embargo, más allá de la propaganda y el simbolismo, poco o nada se había avanzado hacia la independencia. Detrás de toda aquella agitación sólo había un enorme vacío. El procesismo se había convertido en un *modus vivendi*. Prometiendo la independencia, se mantiene toda una red clientelar y se captan recursos públicos. Pero con Puigdemont todo cambió. A pesar de los continuos retoques

tácticos y las ocurrencias de última hora, era la hora de implementar el plan. Actuaron con una delirante prepotencia. Se creyeron por encima de la ley y se vanagloriaban de ello. El senador de ERC Santi Vidal se jactaba de la obtención ilegal de los datos fiscales de los catalanes para poder celebrar el referéndum. El *procés* fue un imán de frikis con incontinencia verbal. Éste sería uno de sus puntos débiles. Aquella declaración permitió abrir una investigación judicial que se ampliaría hasta el registro de la Consejería de Economía del 20 de septiembre de 2017. También Puigdemont presumía de estar por encima de la ley tuiteando un *selfie* en el que posaba con las notificaciones del Tribunal Constitucional. «No dejaremos de seguir adelante», aseguraba. Delante había un precipicio.

Entre la incompetencia y la cobardía de sus líderes, el *procés* descarrilaría poco después. La gran mentira de una independencia exprés y sin costes sería puesta en evidencia. La independencia no llegó, pero sí una parte de sus costes. Éstos nunca fueron simbólicos. Artur Mas había prometido que con la independencia «los bancos se van a pelear por estar en Cataluña», pero los grandes bancos catalanes acabaron refugiándose en la Comunidad Valenciana en búsqueda de una mayor seguridad jurídica. Importantes empresas trasladaron sus sedes sociales a Madrid. La autonomía fue intervenida y la sociedad permaneció más fracturada que nunca. El independentismo sumergió Cataluña en una amarga decadencia. Aun así, aquellos políticos demagogos y mentirosos mantienen un importante respaldo por parte de una población que no quiere admitir haber sido engañada, quizá por haber invertido tanto tiempo de sus vidas en una fantasía. El *procés* ha fortalecido una pertenencia identitaria que, aunque autodestructiva, es prácticamente inasequible al desaliento. La identidad todo lo tapa y todo lo justifica. Actúa como un antónimo de la responsabilidad. Ciertamente, el independentismo está perdiendo apoyos, sobre todo entre los jóvenes urbanos, pero la frustración y el resentimiento se reconcentran en amplias capas de la población. Son demasiadas energías volcadas en la utopía. Será necesaria toda una generación de persistencia e inteligencia para erosionar la sedimentación nacionalista que durante décadas se ha acumulado sin una alternativa al mismo nivel en recursos y medios.

Y es que el *procés* viene de lejos, muy lejos. Lo ocurrido entre 2012 y 2017 es simplemente una etapa más. La más explícita y radical quizá, pero hay un antes y habrá un después. El antes es lo que conocemos como el pujolismo. El después encuentra sus aliados en el Gobierno de Pedro Sánchez y es una amenaza real para todo el legado de la transición democrática. Volveremos a ello en un capítulo posterior, pero antes es importante reconocer que el *procés* no ha sido simplemente una fiebre emocional pasajera, sino algo que se venía trabajando desde hace tiempo. Tal vez la crisis económica y la fragmentación política aceleraron la estrategia, y esa misma aceleración provocó que no se sumara la mayoría social que esperaban, provocando el fracaso se-paratista en esta etapa. Sin embargo, el fenómeno nacionalpopulista sigue ahí, esperando un nuevo momento y con la base prácticamente intacta, como había planeado Jordi Pujol.

Pujol lo tuvo claro desde el principio. Obsesionado con la identidad, en 1980 inició un proceso de nacionalización de Cataluña desde el poder autonómico. Jordi Amat considera que el pujolismo tuvo tres pilares: «La fundamentación de la institución de la Generalitat, la consecución de transferencias que consolidaban el autogobierno regional y la implementación de políticas de nacionalización». Seguía un programa de «normalización» fundamentado en la lengua y la cultura; es decir, un programa de homogeneización identitaria. Los pactos con los diferentes Gobiernos de España, que solían priorizar la táctica a la estrategia, facilitaron la consumación del proyecto nacionalista. Las alarmas deberían haber saltado en aquella época. El *expresident* Josep Tarradellas, defensor de un catalanismo cívico, en-seguida advirtió de la deriva del nacionalismo etnicolingüístico del pujolismo, al que definió como una «dictadura blanca». El victimismo fundado en agravios reales, exagerados o inventados estaría siempre en el corazón de una política destinada a ocupar todos los espacios de la sociedad. El caso Banca Catalana fue el gran primer aviso. Éste dejó más lagunas que certezas. Lo único que quedó claro es que el agujero costó 334.049 millones de pesetas a las arcas públicas. Y también que estábamos ante un primer momento nacionalpopulista que se repetiría en el futuro y se exacerbaría durante el *procés*. El 30 de mayo de 1984, Pujol fue

reelegido *president*. Salió del Parlament y, acompañado por una masa vocinglera, se dirigió a la plaza Sant Jaume, donde pronunciaría el discurso que mejor definiría el cinismo que gobernó Cataluña durante décadas: «A partir de ahora, cuando alguien hable de ética, de moral y de juego limpio hablaremos nosotros, no ellos». La superioridad moral iba a cubrir un estercolero de corrupción e ingeniería social. A partir del caso Banca Catalana se instauró definitivamente el denominado oasis catalán. Pujol hacía y deshacía, y la izquierda se acomplejaba. Era un sistema de *omertá*, de silencios cómplices o miedosos. El 3 por ciento, que en realidad era más, era susurrado por todas las esquinas, pero nadie investigaba. Años después, en el debate sobre el hundimiento del túnel de la línea 5 de metro, que provocó un enorme socavón en el barrio barcelonés de El Carmel y afectó a unas quinientas viviendas, Pasqual Maragall bloqueó por un momento los filtros del oasis y exteriorizó lo que nadie se atrevía a decir públicamente: «Ustedes tienen un problema, y ese problema se llama 3 por ciento». Artur Mas montó en cólera y amenazó con dinamitar las negociaciones del Estatut. Maragall retiró de inmediato sus palabras y volvía la *omertá*. Más tarde, las investigaciones judiciales sobre la corrupción convergente serían mediáticamente tapadas con el arrebato del *procés*. Se pasaba del silencio al griterío: la cuestión era conseguir que nadie preguntara nada sobre el latrocinio. Los múltiples casos y la confesión de Jordi Pujol con el posterior desfile de su familia por una comisión de investigación en el Parlament mostrarían a las claras cómo se estaba gobernando Cataluña. El periodista de *La Vanguardia* Santiago Tarín lo resume bien en su libro *El tsunami catalán*: «El oasis nació con una soflama y se secó con una confesión». Sin embargo, la complicidad social con la corrupción sigue siendo elevada en Cataluña. Los corruptos se han envuelto con la bandera independentista, y esto es lo único que quiere ver una gran parte de la población que, informándose a través de TV3, acaba creyendo que todo es un invento de unas supuestas cloacas madrileñas. La sociedad actual puede acceder a más información que nunca, pero parece que las exigencias éticas continúan siendo tan laxas como en los años ochenta y la desinformación prevalece.

El *procés* ha sido fruto de un cúmulo de irresponsabilidades y

cegueras. Son demasiadas negaciones de la realidad. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero alimentó el proceso separatista al generar unas expectativas sobre el Estatuto que no iban a cumplirse. Aquel «apoyaré» irresponsable inició una dinámica competitiva entre la izquierda y CiU que los alejaba progresivamente de la Constitución. El Pacto del Tinell, con el que se formó el primer Govern tripartito, no sólo supuso un cordón sanitario contra el Partido Popular, sino también la exclusión de una parte importante de la sociedad catalana. Era la negación del pluralismo. Ni Zapatero ni los líderes del PSC quisieron combatir las mentiras nacionalistas. Al contrario, sus campañas se dirigían únicamente a promover el odio contra el Partido Popular, debilitando así el constitucionalismo y regalando argumentos al separatismo en caso de que los populares volvieran a gobernar en España. Era la sublimación de las emociones adversativas antes de la época de los Donald Trump y los Pablo Iglesias. José Montilla no rectificó. Quiso hacerse perdonar por sus orígenes andaluces ante un supremacismo que nunca lo aceptaría. Abanderó el ataque al Tribunal Constitucional tras la sentencia del Estatut en 2010. La irresponsabilidad de Montilla fue enorme. Sus declaraciones se alejaban totalmente de la democracia liberal para abrazarse al más rancio nacionalpopulismo: «No hay tribunal que pueda juzgar nuestros sentimientos ni nuestra voluntad. Somos una nación». Así, con una cúpula tan desnortada y alejada de los intereses de la mayoría de sus votantes, no es de extrañar que el PSC se subiera al carro del derecho a decidir, incluso prometiendo el referéndum en su programa electoral de 2012. Como gobernaba el PP, todo valía, también desgastar al Estado y polarizar a la sociedad. Colaboraron en la gran mentira.

Otra miope negación fue creer que el *procés* no llegaría tan lejos. El Gobierno del Partido Popular, con mayoría absoluta, se volcó, como era lógico, en sacar al país de la crisis económica. Sin embargo, a pesar de los avisos, no se abordó la necesaria preparación del Estado para un desafío como el que se nos venía encima. Posiblemente se creyó que el separatismo era la típica fiebre populista que desaparecería con la recuperación económica, sin tener en cuenta que el componente nacionalista multiplicaba los efectos del desafío. Sin lugar a duda, gran parte de la élite catalana contribuía a que el Gobierno de España

mantuviera una visión sesgada de la compleja realidad. Los interlocutores no fueron siempre los más adecuados. No pocos presumían de tenerlo todo bajo control y que Artur Mas, en el fondo, sólo pretendía conseguir más recursos o más competencias. Era una teoría bastante extendida que llevó a algunos a votar a partidos independentistas pensando que así Cataluña obtendría un concierto económico o el denominado blindaje de ciertas competencias. Pocos entendieron que se había iniciado un camino sin retorno hacia el disparate político y, por lo tanto, hacia el declive económico y social. *A posteriori* es muy fácil juzgar, pero en aquellos momentos ya había señales suficientes de lo que podía acontecer; y el Estado no se estaba preparando. En 2014 publiqué el libro *El acuerdo del seny*. Pretendía ser una aportación liberal, inevitablemente imperfecta, a la superación del nacionalismo. También quise que fuera una advertencia de la magnitud del problema. El problema catalán era también el problema español y europeo. Era la plasmación en nuestra sociedad del fantasma del populismo iliberal que ya recorría Europa. En la introducción señalaba que «el problema es institucional, pero también lo es de actitudes y valores. Es un problema de instituciones que fomentan la centrifugación y la desunión. Es la ausencia de un relato de finalidades morales compartidas. De comunicación, también. De información asimétrica». Hoy el problema sigue siendo el mismo. El nacionalismo cuenta con toda una Administración e infinidad de recursos volcados a explicar su relato. El constitucionalismo, sin embargo, sigue desestructurado y desamparado.

Apunta Joaquim Coll en *Anatomía del «procés»* que éste «fue una mezcla entre aquello que sus líderes prometieron hacer desde la Generalitat, es decir, la creación en un plazo determinado de mecanismos y estructuras para hacer efectiva la independencia, y un reajuste táctico permanente con el fin de estimular un escenario de confrontación social entre la legalidad constitucional y la arrogada legitimidad soberana del Parlament». Los líderes no hicieron su parte, como después pudimos confirmar al escuchar diferentes grabaciones telefónicas en las que los políticos independentistas mostraban una total desconfianza hacia sus socios y reconocían esconderse información los unos a los otros. En público no querían aparecer como

traidores y aseveraban que todas las estructuras estaban preparadas para la instauración de la nueva república de manera inmediata y pacífica, pero, en privado, reconocían una realidad muy di-ferente. Esto no significa que no intentaran imponer la independencia. Es peor aún. Lo intentaron promoviendo el conflicto social. Esperaban que sus seguidores les hicieran el trabajo sucio. Algunos pensaban que si estallaba la violencia, habría una intermediación por parte de la Unión Europea.

Con todo, la peor negación de toda esta historia es la de un nacionalismo que niega la pluralidad de Cataluña. Aquí está el fundamento del conflicto y el carácter profundamente iliberal del nacionalismo. Éste se presenta como la expresión de la voluntad del pueblo, cuando nunca ha obtenido más del 50 por ciento de los votos en unas elecciones. Niega la catalanidad al no nacionalista. Por esta razón, no observa contradicción cuando asegura que la voluntad del pueblo es la independencia o el referéndum. Quienes no pensamos así no formamos parte de su pueblo. En Cataluña se ha producido incluso una fractura sobre la fractura. La élite nacionalista niega que el *procés* haya fracturado la sociedad catalana. Sin embargo, la mayoría de los catalanes no nacionalistas pueden explicar la ansiedad con la que han vi-vido estos últimos años, los amigos que han perdido, las discusiones familiares que han sufrido o las cenas de compañeros de trabajo a las que han dejado de acudir. Los grupos de WhatsApp se revelaron como pequeños infiernos debido al activismo propagandístico y, a veces, a la agresividad de los nacionalistas. Fueron muchos quienes se retiraron discretamente de grupos de padres de alumnos, de amigos o de compañeros. El periodo de las caceroladas merece mención aparte. El nacionalismo salía a los balcones. Quienes golpeaban inmisericordemente las cacerolas podían creer que su acto formaba parte de una lucha por la libertad nacional, pero los no nacionalistas sufrían esas acciones como una invitación a abandonar su propia tierra. Esa angustia nunca fue atendida por los políticos nacionalistas. Al revés, la promovieron siempre que pudieron. Forcadell llamaba enemigos del pueblo de Cataluña a los miembros del PP y Ciudadanos. Llach nos llamó buitres o carroña. En algunas pequeñas poblaciones, la presión y la intimidación entre vecinos sigue siendo un grave problema

democrático.

El *procés* ha provocado graves daños a Cataluña. Desde el punto de vista institucional, encontramos unas instituciones que son percibidas como hostiles para la mitad de la sociedad. Sigue la fuga de empresas y talento. Y cada vez se muestra una imagen menos atractiva para las inversiones. El independentismo no persigue la solución de los problemas, sino generar agravios que le permitan cargarse de razones y mantener prietas las filas. Mientras tenga apoyos sociales su incentivo será fomentar el victimismo, nunca la prosperidad. Es, pues, una trampa narcisista de la que los catalanes debemos escapar si realmente queremos un futuro mejor. No obstante, la peor consecuencia de esta manera de hacer política es la desaparición de los afectos, la fractura social. La Cataluña nacionalista, en el mejor de los casos, sigue ignorando a la otra Cataluña, cuando no la insulta. Expresiones como colonos, traidores, *botiflers* o *nyordos* llenan las redes sociales. Tras el desastre colectivo de 2017, no ha habido una petición de perdón ni el menor acto de contrición, a pesar de perseguir el indulto o la amnistía para los culpables de aquellos graves delitos contra la democracia. El nacionalismo sigue gobernando sólo para una parte de la sociedad. Los medios de comunicación públicos siguen al servicio de una única causa. Siguen fomentando una sociedad cerrada con la mal llamada inmersión lingüística en la educación. Y uno de los peligros es que el constitucionalismo, cansado de tanta tensión y percibiendo que la amenaza de una independencia inmediata se ha desvanecido, pueda bajar los brazos en la defensa de sus derechos y libertades. El nacionalismo, a pesar de sus disputas internas, no va a parar, va a seguir expandiendo su red clientelar y ocupando espacios en la sociedad civil a la espera de un mejor contexto internacional para asestar otro golpe a la convivencia y al Estado de derecho. A pesar de que la presidencia de la Generalitat de Quim Torra ha supuesto una ralentización del *procés* político, el independentismo asociativo no ha dejado de avanzar, haciéndose con el control de instituciones como la Cámara de Comercio de Barcelona, la Universidad de Barcelona y el Fútbol Club Barcelona.

El nacionalismo nunca aceptará la pluralidad, porque dejaría de ser nacionalismo. Y mientras gobierne será imposible recoser las

heridas provocadas en la sociedad catalana. No hay solución mágica ni oferta que apacigüe a los dirigentes nacionalistas. A principios del año 2021, y desde la cárcel de Lledoners, el líder de ERC Oriol Junqueras aseguraba a *El Confidencial* que no se arrepentía de nada y que nunca renunciaría a la independencia unilateral. Además, amenazaba con «prepararnos mejor antes de volver a intentarlo». Si pueden, volverán a hacerlo. Si se les deja, lograrán convertir la sociedad catalana en dos comunidades definitivamente enfrentadas. Algunos politólogos aseguran que cuando una sociedad se divide, sólo una gran amenaza puede volver a unirla. No ocurrió en Cataluña. Hemos empezado el capítulo explicando cómo un atentado yihadista separó aún más a los catalanes. Tampoco ocurrirá, más tarde, en la España de la pandemia. Cuando más necesaria está siendo la cooperación política, el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias opta por la división y la tensión, priorizando la retención del poder por encima de la salud y el trabajo de los españoles. Opta por eliminar controles y socavar los contrapoderes. Opta por la mentira, por otra historia de negación. Opta por un proceso español.

Capítulo 2

El populismo de los narcisos

Todo se acelera, también la política, o al menos ésa es la sensación que tenemos. Lo que parecía eterno se convierte en efímero. Los sistemas de partidos se fragmentan, aparecen nuevos movimientos con nuevas demandas, y las antiguas formaciones políticas se sumergen en procesos de reconversión hacia no se sabe muy bien dónde. Surgen nuevos líderes con retórica revolucionaria, con palabras de un pasado que creíamos olvidado. Prometen cambiarlo todo, asaltando los cielos o reformulando las fronteras, pero una vez instalados en el poder apenas logran reformar nada, porque nunca buscaron los acuerdos necesarios. Su objetivo era y seguirá siendo ensanchar las fallas que dividen la sociedad, alimentando, así, el resentimiento que los aupó al Gobierno. Nos etiquetan y dejamos que nos introduzcan en una caja en la que sólo resuenan nuestros prejuicios. Nuestros entornos son cada vez más homogéneos, porque ya no toleramos al que piensa o siente diferente, y lo expulsamos de nuestra vida. Con un clic dejamos de seguirlo en Twitter o salimos del grupo de WhatsApp. Se levantan muros imaginarios, pero su efecto es tan real como letal para la convivencia: el odio. Patriotas contra cosmopolitas en Estados Unidos, *leavers* contra *remainers* en el Reino Unido, derechas contra izquierdas en España, nacionalistas contra constitucionalistas en Cataluña... La política deja de trabajar para el bien común y se centra en derrotar al enemigo, al que se considera un paria moral. Es el regreso de las tribus.

La democracia liberal se consideraba una conquista definitiva.

Error fatal. No se veía una alternativa posible ni una vuelta atrás. Derribado el Muro de Berlín, se confió en un inexorable triunfo de la libertad. Los años noventa del pasado siglo desbordaban optimismo. El fin de los autoritarismos era cuestión de tiempo. Caerían por su propio peso. Los nacionalismos y los fundamentalismos religiosos eran rémoras de un pasado que pronto se iba a superar definitivamente. El comunismo y el fascismo eran residuales, neuras de cuatro nostálgicos. De este modo, se desatendió la batalla de las ideas por creerla innecesaria. La clase media crecía y la revolución tecnológica auguraba un futuro esperanzador. El progreso económico confundió a no pocos que llegaron a creer que la libertad era una cuestión más utilitarista que moral. Así, la responsabilidad individual se fue erosionando. *Empoderamiento* pasó a ser la palabra de moda, pero se olvidaron del esfuerzo y el mérito. Se exigían más derechos y menos deberes. Se delegaba en la Administración pública. Nadie se preguntaba ya qué podía hacer por su país. Kennedy estaba definitivamente muerto. Y las promesas políticas fueron creciendo al mismo tiempo que la sociedad se infantilizaba. El narcisismo fue más allá de los *selfies*. Las expectativas eran imposibles de cumplir, por lo que la frustración fue asomándose por la esquina. La crisis económica y financiera de 2008 sería simplemente el acelerador de unos fenómenos que ya estaban agazapados entre nosotros. Emergieron los oportunistas y los mercaderes de la ira y la indignación. Falsos aduladores de la masa digital aprovechan la madre de todas las crisis, la crisis de valores.

Sin apenas darnos cuenta, estos agentes de la discordia fueron ganando posiciones en los medios de comunicación y en nuestras vidas. Las emociones negativas inundarían el debate público, mientras la verdad cotizaba a la baja. No se aplaudían la propuesta y la sensatez, sino el señalamiento y el escarnio. Nos abandonamos a la comodidad psicológica de creer que todo es culpa del otro. La gama de chivos expiatorios fue creciendo. Podía ser la Unión Europea, el Estado español, la casta política, la inmigración..., cada demagogo tenía su enemigo favorito. El pueblo, por su parte, era puro. Merecía ser halagado continuamente. Era una víctima con toda la legitimidad para exigir venganza. Se sacraliza la indignación. Así pues, la solución a todo problema resultaba simple: expulsar al culpable. Sin embargo, el

crepúsculo de la responsabilidad augura malos tiempos para la libertad. Se acaban confundiendo las ilusiones con los derechos y se deja el futuro en manos de embaucadores.

Los charlatanes regresan para enriquecerse electoralmente con sus tóxicas pócimas mágicas. Vótales y lo tendrás todo, y gratis. La independencia, la república..., la tierra prometida. Pero llegan a los Gobiernos y, entonces, surge la impaciencia. No hay resultados tangibles, más allá de la degradación acelerada de las instituciones. Corre la sospecha de que las promesas eran falsas, pero no hay rectificación. Se buscan más culpables. A la lista de enemigos, se suman ahora los traidores. El pueblo puro es cada vez más reducido. La duda comporta la excomulgación. Se denigra a los moderados y se desciende por la resbaladiza cuesta del fanatismo. Cómo una sociedad culta y educada puede estropearse tan rápido, se preguntan muchos sorprendidos. El *procés* catalán fue el epítome de esta degeneración. Los que alcanzaron el poder con demagogia y mentira empiezan a temer ser devorados por el monstruo que irresponsablemente cebaron. En este mundo de la posverdad siempre surgen políticos más radicales y menos escrupulosos. Aumentarán las dosis de hipérbole y paranoia. Estresarán y fracturarán aún más a una sociedad exhausta. Y laminarán todos los contrapoderes: la justicia, el Parlamento, los medios de comunicación, la sociedad civil. Gobiernan, pero no se hacen responsables. Reivindican más poder para superar los obstáculos y hacer realidad los sueños prometidos. Subvencionan el victimismo y, de repente, la política lo ensucia todo. Todo es política, aseveran con faz intelectualoide. Los antagonismos trascienden las tertulias de los medios de comunicación y se instalan en nuestras vidas cotidianas, en nuestros hogares y puestos de trabajo. Las familias se rompen. Las amistades se pierden. Compartimos rellano con el enemigo. La batalla está en las calles y en los balcones. Los demagogos no trajeron ninguna solución, sólo desgastaron las instituciones, aumentaron las inseguridades y fracturaron la sociedad. Es lo que ocurrió en la Cataluña del proceso separatista. Es lo que está ocurriendo en España con el Gobierno de Pablo Iglesias y Pedro Sánchez. No somos especiales. Está ocurriendo en otros países occidentales, pero el mal de muchos no debe consolarnos. En todo caso debe alertarnos. Si el

populismo ha provocado graves daños en democracias de larga tradición como Estados Unidos y el Reino Unido, no deberíamos infravalorar su amenaza en nuestra sociedad.

El populismo es camaleónico, capaz de adaptarse a la idiosincrasia de cualquier sociedad. Aprovecha prejuicios existentes y exagera problemas reales. No surge de la nada, sino que recoge el sustrato cultural y lo pervierte. Tampoco es una anomalía histórica. No es un invento del siglo XXI. Tiene una larga tradición, aunque en los últimos años se ha convertido en el fenómeno que ha revolucionado la política en la mayoría de los países occidentales. Donald Trump, Nigel Farage, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Pablo Iglesias, Carles Puigdemont o Matteo Salvini son los últimos rostros de la retórica del resentimiento, no los primeros. Ya en el siglo XIX, en Estados Unidos, pero también en Europa, surgió el populismo de la mano de la democratización de los sistemas políticos. Aunque cualquier tiempo pasado nos parece mejor, el descontento o la decepción con las élites políticas no son una rareza característica de nuestros días. El término *desafección* inundó las tertulias a partir de la crisis económica de 2008, pero no hay originalidad en ese sentimiento. Simplemente escuchamos ecos del pasado.

La democracia y el liberalismo se necesitan mutuamente, pero desde sus orígenes la democracia liberal no ha estado exenta de tensiones. La tentación autodestructiva siempre ha estado ahí. No existe el sistema político perfecto y siempre habrá motivos para la crítica. De hecho, el diag-nóstico de los populistas puede ser plenamente acertado, aunque el tratamiento que prescriben suponga agravar la enfermedad, incluso matar al paciente; es decir, a la democracia. Con todo, hacía décadas que estos dos conceptos, *democracia* y *liberalismo,* no colisionaban tan estruendosamente como en la actualidad. A través del método democrático se toman decisiones que conculcan gravemente los derechos individuales. En unas ocasiones son ataques directos, en otras, el método es más sibilino y socava con disimulo los pilares de la libertad. Con tanto disimulo que cabe recordar la advertencia que nos dejó Friedrich A. Hayek en los años cuarenta: «Allí donde se destruyó la libertad tal como la entendemos, casi siempre se hizo en nombre de alguna nueva libertad

prometida a la gente». Del mismo modo, en nombre de la voluntad del pueblo se toman decisiones que excluyen a buena parte de él, incluso a la mayoría. El separatismo en democracia, por ejemplo, no deja de ser una apuesta por la extranjerización de conciudadanos. Blandirán la bandera de la democracia, pero su objetivo supone excluir de ella a parte de la población, quizá a la mayoría. La trampa retórica es evidente, pero se sigue cayendo en ella. Si un líder se presenta como la encarnación de la voluntad popular, no dudará en eliminar cualquier límite a su poder arguyendo falazmente que está defendiendo la democracia. Una democracia popular o una democracia real, prometerá. Se removerá cualquier contrapoder por antidemocrático, justificando los ataques a la independencia ju-dicial, a la libertad de prensa, a la labor de control de los parlamentos u otras instancias de gobierno, en nuestro caso, desde los ayuntamientos y las autonomías hasta la Unión Europea. En nombre de la democracia se atacan los principios básicos del liberalismo en un proceso que significaría el inicio del fin de la propia democracia tal como la conocemos. Sin los límites, los controles y los contrapesos que el liberalismo ideó, la democracia degenera con rapidez en la tiranía de la mayoría o, en todo caso, en el poder absoluto de una minoría dura frente a una mayoría desorganizada o indiferente. Un poder absoluto corrompe absolutamente y es el virus más letal contra la salud de la democracia.

«Això va de democràcia», repite constantemente el secesionista catalán. El populismo iliberal se llena la boca de democracia. En cierta manera, necesita autoconvencerse. Incluso nos dice que la democracia representativa no es una democracia auténtica. «Democracia real ya», coreaban los indignados. Plantean otro tipo de democracia, más plebiscitaria, con menos intermediarios, pero también con menos deliberación y sin ninguna concesión al adversario. Es el retorno del «trágala» que tanta inestabilidad constitucional supuso para España. Es la imposición sin respetar los derechos y las libertades de los demás. Atacando al Estado de derecho, a la separación de poderes y a los derechos de la oposición, los partidos nacionalistas catalanes demostraron en los plenos del Parlament del 6 y 7 de septiembre de 2017 que su proyecto era puro populismo iliberal, auténtico enemigo de la democracia y de la libertad. De manera más sutil, pero también

más eficaz, el actual Gobierno español ha aprovechado la pandemia del coronavirus para replicar el *modus operandi* de unos partidos separatistas que, de hecho, llevaron a Pedro Sánchez a la Moncloa pocos meses después de la infructuosa declaración de independencia. En el proceso español coinciden, pues, los protagonistas y los métodos del *procés* catalán. Dados los resultados de este último, los españoles deberíamos estar más que preocupados ante la deriva populista del PSOE o lo que se ha denominado como el «sanchismo». La discordia es, lamentablemente, posible.

El fin vuelve a justificar los medios, no sólo para los maquiavelitos monclovitas. En tiempos de polarización política parece importar más la victoria de los que uno considera suyos que los métodos que éstos usan para lograrlo. Así, una pertenencia identitaria, en este caso partidista, se sitúa por encima del respeto a la democracia o a la libertad de los otros. La etiqueta «izquierda» acaba siendo un rasgo de la identidad que poco tiene que ver con el tipo de políticas públicas que se implementen, como ser seguidor del Barça independientemente del juego que éste practique. Es la futbolización de la política, o la tribalización, tendencia que provoca que los políticos tengan menos incentivos para la buena gestión que para fortalecer, mediante la propaganda y el conflicto, la división entre bloques. Si los seguidores temen a un enemigo externo, relativizarán la incompetencia y las corruptelas de sus líderes. De este modo, las virtudes cívicas se desgastan, mientras la retórica de la hipérbole gana terreno. El adversario con el que antaño se dialogaba se convierte, apenas sin ser conscientes del cambio, en un enemigo al que derrotar. Todo vale. Las mentiras del *procés* no son tan diferentes a las mentiras del Brexit. El asalto al Capitolio de los seguidores de Trump no está tan lejos de los sitios a parlamentos españoles como los protagonizados por la izquierda populista. Y es que prácticamente toda la literatura de terror politológico que nos explica las causas del Brexit o las consecuencias del trumpismo nos sirve para entender qué pasa en nuestro país. *Cómo mueren las democracias*, *La edad de la ira*, *La gran degeneración*, *El pueblo contra la democracia*, *Fascismo*... son títulos que han llenado los estantes de novedades en los últimos años, y me temo que a los autores no les falta razón en el análisis. ¿Por qué los valores

liberales están en retroceso? ¿Por qué las democracias se desconsolidan? ¿Por qué en las sociedades con más educación crece el populismo?

Pero, antes que nada, y para saber a qué nos enfrentamos, ¿qué es el populismo? El *Diccionario* de la Real Academia Española lo define como una «tendencia política que pretende atraerse a las clases populares», pero, como veremos, el populismo secesionista o incluso el izquierdista en España penetran, sobre todo, en clases medias-altas, en personas con las necesidades materiales bien cubiertas. El abuso del adjetivo *populista*, como el de *fascista*, tampoco ayuda a delimitar su significado. Se ha tachado de populistas a políticos, partidos y movimientos tan diferentes que resulta complicado formular una definición precisa. En general, el epíteto se arroja como un dardo contra el político que nos desagrada como un sinónimo de *demagogo*. Sin embargo, algunos políticos se autodefinen como populistas. Hay populismos buenos y malos, nos dicen; pero ésta es la típica confusión entre lo populista y lo popular. En todo caso, el populismo es, como mínimo, un tipo de retórica. Sí, la demagogia es una de sus características. Son los continuos halagos al pueblo con la intención de ganarse su favor. Es también la exageración de los problemas a los que éste se enfrenta, la simplificación de las soluciones y la exaltación de las bajas pasiones. Es consustancial a la democracia o, mejor dicho, es una degeneración a la que la democracia es proclive. Ya existían los demagogos en la Grecia clásica. Ya trataban de engatusar al personal con discursos que masajeaban el ego de la audiencia. No obstante, si la cultura democrática y las instituciones son sólidas, el populismo es débil y se mantiene agazapado en extremos marginales, esperando la llegada de una crisis que marque el inicio de su hora. Por tanto, el populismo es una manera de hacer política, incluso podríamos decir una estrategia para alcanzar el poder en democracia.

Pero es algo más. Es también una ideología. Una ideología sencilla que se sustenta sobre un par de creencias, pero una ideología, al fin y al cabo. Algunos politólogos la han definido como una ideología débil o blanda, refiriéndose a su pobre marco teórico. Pero esta definición genera equívocos, ya que el populismo no deja de ser un potente instrumento de movilización social, sobre todo en periodos

de crisis. A diferencia del liberalismo, el conservadurismo o el socialismo, no hay grandes obras escritas que fundamenten la base teórica del populismo, por lo que, en general, deberemos acudir a los discursos y a las prácticas políticas de sus protagonistas para entresacar las ideas que nos permitan conceptualizarlo. En este sentido, pronto nos damos cuenta de que el populismo es una manera profundamente antiliberal de entender la democracia. Pretende negar el pluralismo de la sociedad al considerar que sólo hay una voluntad del pueblo; por lo que, una vez en el Gobierno, trata de de-sactivar los controles y los contrapoderes, los *check and balances* que pudieran poner límites a la realización de dicha voluntad. Ese antipluralismo se materializa en la división de la sociedad en dos colectivos enfrentados: el pueblo y el antipueblo; es decir, el enemigo del pueblo. El antipueblo puede ser la clase política (la «casta») o una parte de la sociedad (los inmigrantes, los empresarios o los discrepantes). Si no estás de acuerdo con la interpretación que el líder o el partido populista realiza de la voluntad general, pasas a ser un traidor, un enemigo. Es una lógica schmittiana. Distingue con claridad entre un «nosotros» y un «ellos», formulando un discurso simple pero altamente eficaz, sobre todo en entornos en los que predominan las emociones adversativas, la indignación o el odio, como en las redes sociales, aún más en épocas de crisis económica o de conflictos culturales. Lejos del liberalismo, entre cuyas metas está garantizar la concordia en las sociedades plurales a través de la negociación y el pacto, para el populismo no hay adversarios polí-ticos, sino enemigos que deben ser derrotados. Cualquier cesión a éstos será considerada un signo de debilidad, incluso una traición. Esta lógica imposibilita la fiabilidad de los acuerdos y, por tanto, el diálogo sincero. El apaciguamiento está condenado al fracaso. Por esta razón, en España tanto la nueva izquierda como los diferentes nacionalismos están destruyendo uno de los grandes legados de la transición democrática, el que convirtió a enemigos furibundos en simples adversarios con los que se podía dialogar y pactar. En este sentido, el populismo es regresivo para nuestro país. Es un camino de vuelta a nuestro peor pasado. Considera que los adversarios deben reconvertirse en enemigos y desaprueba cualquier idea de reconciliación o de concordia. Su estrategia se basa

en la confrontación permanente, en el resentimiento perpetuo. De este modo genera una cultura política perversa y peligrosa para la propia existencia de la democracia, porque las palabras siempre tienen efectos secundarios. Conforman ideas y valores. Si predomina el lenguaje del odio, las virtudes cívicas se esfumarán. Convertirá el sistema democrático en un peligroso juego de suma cero, en una guerra entre el bien y el mal, donde la transacción es impensable.

Pero el mayor peligro del populismo es la degradación de las instituciones democráticas cuando gobierna. Si el líder populista es el intérprete de la voluntad popular, nadie ni nada debería oponerse a él, ni las leyes, ni los tribunales, ni los parlamentos, ni otras instancias de gobierno, ni los medios de comunicación. Así pues, tomado el poder, los populistas se dedican a eliminar cualquier límite a su nuevo reinado. Retiran los guardarraíles que permiten que la democracia no se salga de su camino y caiga por el barranco del autoritarismo. Si ellos son el pueblo, no puede considerarse legítima la alternancia en el Gobierno. Buscan, por tanto, un poder irreversible. Más allá de su discurso barnizado de democracia, en la gran mayoría de las experiencias de Gobiernos populistas el sistema democrático se ha resentido profundamente y, en no pocas ocasiones, ha degenerado en un régimen autoritario.

Las apariencias engañan. El populismo ofrece, a simple vista, más democracia como terapia para curar la democracia. Ofrece convertir la voluntad del pueblo en decisión política de una manera más inmediata. El problema reside en cómo se define esa voluntad del pueblo y en quién es el pueblo. En este caso, la voluntad la «interpreta» el líder y el pueblo es quien lo apoya. Y el instrumento empleado para disimular el autoritarismo es el plebiscito. El populista antepone la democracia directa a la representativa. Ésta le parece un engorro. Tener que tratar con visiones diferentes a la suya (y, por tanto, equivocadas y malignas) sería reconocer que el pueblo es plural y que ellos no pueden ser su único intérprete. Así tienden a apostar por mecanismos que descarten absolutamente al perdedor, como son los plebiscitos y los referéndums. Al ser los convocantes ya parten con la ventaja de establecer unas condiciones de la votación que les aseguran la victoria. Elementos de democracia directa pueden ser, sin duda, un

buen complemento para la democracia representativa. Suiza suele ser el ejemplo. Sin embargo, el populismo propone una sustitución, ignorando que en las sociedades modernas, como ya teorizara Benjamin Constant, los ciudadanos no pueden permitirse el lujo de formarse continuamente sobre debates cada vez más complejos y sectoriales, ni tampoco parece posible una deliberación continua entre millones de personas. De ahí la necesidad de la representación y de los cuerpos intermedios, como son los partidos políticos. Sin embargo, la intención del líder populista no es el perfeccionamiento del sistema democrático, sino conseguir que una minoría movilizada, y a su servicio, sea decisiva en la toma de decisiones fundamentales. Se mantiene el vocabulario democrático, pero acaba siendo la imposición de una minoría dura.

A pesar de que el populismo considera que sólo hay una voluntad legítima y que el resto son intereses espurios que deben ser rechazados, la realidad es tozuda y la diversidad no puede ser eliminada de la noche a la mañana. En la propia base populista existen colectivos con principios e intereses contrapuestos. Por esta razón, es fundamental que el líder carismático actúe como gran armonizador, captando y expresando, sin intermediarios, los deseos de su pueblo, eliminando con las cabriolas retóricas necesarias cualquier aparente contradicción y evitando cualquier concreción programática que pueda molestar o contravenir a parte de su base. Para lograr este extraordinario equilibrio, el teórico del populismo Ernesto Laclau pensó en los «significantes vacíos», conceptos que sirven de gancho sin tener que especificar su significado. Cada uno puede volcar en ellos sus propios deseos. Ejemplos sobran en la política española: casta, patria, pueblo, indignación, transición nacional, derecho a decidir... Aunque el conjunto de los intereses sea incoherente, el establecimiento de un enemigo común y el discurso del significante vacío funcionan como un mecanismo de agregación. Las ideas de Laclau, que se autodefine como posmarxista, suponen una revolución en el discurso y la política de la izquierda. En cierta manera, ésta renuncia a la idea de lucha de clases y pasa a fomentar otro tipo de conflictos, a saber, entre sexos, géneros, razas, territorios... Ahora su objetivo es fragmentar y tensionar la sociedad en torno a una o varias pertenencias de identidad, alentando

el resentimiento y la victimización de una parte de la sociedad y, por tanto, movilizándola políticamente a favor de unas siglas políticas. Paulatinamente, la izquierda ha abandonado el obrerismo para apostar por las políticas de identidad. Fracasada la utopía socialista y tras la caída del Muro de Berlín, se abonó a la religión identitaria para cautivar a nuevos electorados. Es en este contexto en que aparecen las políticas de identidad y las nuevas guerras culturales. Pero observemos antes las posibles causas del populismo y las razones del debilitamiento de las democracias.

El populismo prospera en épocas de crisis económica, por lo que intuitivamente creemos que está vinculado a la pobreza y a la desigualdad. A raíz de la crisis de 2008, que afectó en especial al sur de Europa, el desapego hacia la democracia creció, sobre todo entre aquellos que nunca habían vivido en otros regímenes políticos, como es el caso de los jóvenes. En los últimos años, en la Europa mediterránea han aparecido potentes partidos de izquierda populista o extrema como Podemos en España, el Movimiento 5 Estrellas en Italia, Syriza en Grecia o la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon. Tras esta estela, también han crecido partidos de derecha radical o populista en estos mismos cuatro países. El populismo aprovecha las inseguridades sociales para hacer su negocio electoral. El crecimiento del desempleo o el descenso de la capacidad adquisitiva pueden ser cuestiones reales y provocan una lógica preocupación. Sin embargo, asimismo es cierto que el populismo tiene incentivos para exagerar los problemas y las amenazas, y hacer así más atractiva su oferta proteccionista: más regulación, más gasto público, más estatismo. En no pocas ocasiones, el populismo actúa como un bombero pirómano, lanzando cerillas encendidas en una sociedad inflamable. Con independencia de su color ideológico, es denominador común de todo populismo un proyecto que, lejos de dinamizar la economía e incentivar la creación de empleo, teje redes clientelares y coloniza la sociedad civil. Se sacrifica la libertad en el altar de la seguridad y, al final, acaban creando sociedades más dependientes y endeudadas, rompiendo el pacto intergeneracional y agravando los problemas económicos; es decir, perdiendo tanto la libertad como la seguridad. Con todo, la decadencia por ellos promovida servirá a los populistas

para seguir acusando a sus enemigos de todos los males y mantener prietas las filas, enrocándose definitivamente en el poder. Por tanto, es un círculo vicioso en el que deberíamos evitar caer, si no nos hemos lanzado ya en él de cabeza.

Del mismo modo que las crisis económicas acrecientan la desafección política, el crecimiento económico es uno de los factores clave en la consolidación de cualquier democracia. Según el politólogo Yascha Mounk, todo parece indicar que «los ciudadanos desarrollaron cierta lealtad hacia su sistema político porque éste mantenía la paz y les garantizaba unas buenas fuentes de ingresos, no porque sintieran un compromiso profundo con los principios más fundamentales en los que se sustentaba». Es decir, la democracia liberal goza de prestigio mientras garantice cierta prospe-ridad. Mounk huye de la simplificación y encuentra causas del auge del populismo no sólo en la inseguridad económica, sino también en cierta ansiedad ante los cambios culturales y el impacto de las nuevas tecnologías de la comunicación, como son las redes sociales. Respecto a las motivaciones económicas, un análisis riguroso permite descartar algunos de los motivos que los propios populistas suelen esgrimir. A pesar de todas las crisis que sufrimos en Occidente, nunca habíamos disfrutado de un periodo de paz y prosperidad tan prolongado como el actual. No obstante, la sensación extendida es que, como titularía el historiador Tony Judt, algo va mal. Tememos que el futuro no sea tan brillante como el pasado y que ni nosotros ni nuestros hijos gocemos de la seguridad económica de nuestros padres. El crecimiento económico tras la Segunda Guerra Mundial sirvió para legitimar y fortalecer las democracias occidentales. En los días de vino y rosas, la corrupción no parecía preocupar excesivamente a la ciudadanía. Mientras la economía ofreciera empleos y oportunidades, fiscalizar la gestión de la cosa pública no era prioritario. Todo parecía sólido. El endeudamiento tampoco era motivo de preocupación. Pero la curva de la desafección política y la del producto interior bruto son inversamente proporcionales, y cuando estalló la crisis económica, también lo hizo la indignación. Aparecieron los *savonarolas* que señalaban con el dedo a la clase política, «la casta», y denunciaban la desigualdad y la pobreza.

Intuitivamente consideramos que las personas en una situación de pobreza serían más proclives a votar a partidos populistas o antisistema, ya que cambiar las reglas del juego no les podría suponer mucho más dolor. Sin embargo, no es así. En el caso de España, la encuesta poselectoral del CIS tras las elecciones generales de 2015 indicaba que las rentas más altas votaron mayoritariamente a los dos partidos que rompían el tradicional bipartidismo español, es decir, a Podemos y Ciudadanos. En todas las franjas superiores a los 1.800 euros mensuales fue el partido radical de izquierdas de Pablo Iglesias el que ganó, alcanzando su máximo (31 por ciento) en la franja de los que más ingresan (más de 4.500 euros al mes).[1] Algo parecido pasaría en Cataluña con el independentismo. La opción política más radical, la que pretendía romper una democracia de la Unión Europea, era la preferida entre las rentas más altas. Según los datos del Centre d'Estudis d'Opinió, en 2017, año de la declaración de independencia frustrada, el sí a la independencia ganaba entre los catalanes que ingresaban más de 1.800 euros mensuales, llegando al 54 por ciento entre aquellos que superaban los 4.000. Sin embargo, el no a la independencia era mayoritario entre las rentas bajas, alcanzando el 66 por ciento en la franja que va de 900 a 1.200 euros.[2] Estos datos nos indican que, al menos en España, la pobreza no predispone a votar a opciones radicales o antisistema. Y tiene sentido.

Volvamos a Mounk. Según nuestro autor, lo importante podría no ser la situación económica en la que se encuentra en determinado momento una persona, sino la ansiedad que siente; es decir, sus expectativas de futuro. A partir del estudio de las elecciones norteamericanas de 2016, Mounk concluye que el voto a Donald Trump no se explica por la situación económica personal presente, sino por la pertenencia a un barrio o a un sector donde empiezan a escasear las oportunidades, en el que se puede temer un futuro más oscuro debido a fenómenos como la deslocalización de empresas o la automatización de la producción. Son personas que observan temerosas cómo empresas similares a aquellas en las que trabajan cierran o trasladan sus plantas a otros países. Es la ansiedad la que incentivaría a sociedades relativamente prósperas a decidirse por opciones proteccionistas como la del entonces candidato republicano.

Otra explicación interesante al auge del populismo nos la ofrece a este lado del océano Christophe Guilluy. Según este geógrafo francés, durante las últimas décadas se ha producido un proceso de desvinculación política y cultural entre las élites y la mayoría de las clases populares situadas en zonas rurales o desindustrializadas, en ciudades pequeñas y medianas. Guilluy describe una Francia periférica que sufre una doble inseguridad: socioeconómica y también cultural; es decir, el aumento del desempleo y la inmigración. A medida que aumenta la inmigración y los modelos de integración se desvanecen, crece la ansiedad en la sociedad. Las mayorías temen dejar de serlo y las minorías se recluyen en guetos. La combinación de estas dos inseguridades, y el desentendimiento de las élites progresistas, ampliaría la fractura entre perdedores y ganadores de la globalización, entre los *somewheres* y los *anywheres* (la gente de un determinado lugar frente a los de ningún sitio, los cosmopolitas). Para Guilluy, Donald Trump y Emmanuel Macron serían los arquetipos de estos dos nuevos bloques, el candidato populista y el candidato globalista. Los dos habrían entendido a la perfección esta nueva fractura que divide a las sociedades occidentales y rompe los partidos políticos tradicionales. Trump y Macron son los hijos de la «pospolítica tradicional».

Esta fractura social se está convirtiendo en lo que en ciencia política se conoce como un *cleavage* (clivaje), una escisión que influye decisivamente en el sistema de partidos políticos. En la década de los sesenta, Seymour M. Lipset y Stein Rokkan ofrecieron una explicación sociológica al origen de los partidos políticos y al sentido del voto de los ciudadanos. Determinados fenómenos económicos, sociales o culturales pueden llegar a generar la aparición de nuevos partidos políticos y la fragmentación o el realineamiento de los tradicionales. Las propias dinámicas de los partidos, con sus estrategias o programas, también pueden incitar a sus seguidores hacia una determinada cuestión divisiva y polarizadora. A lo largo de la historia se han producido diferentes fracturas que han configurado los sistemas de partidos modernos: tensiones territoriales durante la modernización de los Estados, tensiones políticas en torno a cuestiones religiosas, tensiones sociales derivadas de la Revolución Industrial. Hoy estamos en una de esas encrucijadas. En todo Occidente una reestructuración

social está provocando la alteración de los sistemas de partidos. Con la aparición de nuevos partidos y movimientos, la izquierda se divide y la derecha también. Según Guilluy, «el estancamiento o el descenso del nivel de vida de las categorías modestas, la polarización del empleo y el aumento de los empleos precarios, pero también el envejecimiento de la población, hacen emerger un grupo mayoritario, el de las nuevas clases populares». No obstante, esta fractura no es sólo una cuestión de renta o patrimonio. Es fundamentalmente una cuestión cultural y geográfica. La clase media está perdiendo su estatus como referente cultural. Se está convirtiendo en lo que Hillary Clinton calificó despectivamente como «deplorables». Las élites progresistas y cosmopolitas desprecian a una clase media que queda relegada culturalmente, fragmentando la sociedad y eliminando cualquier modelo integrador. Guilluy define el proceso como «balcanización» y apunta que «es en ese vacío cultural donde fermentan hoy el multiculturalismo, el relativismo cultural, el comunitarismo o el islamismo».

En España los nuevos clivajes también están dando lugar a nuevos partidos políticos. Sin embargo, en algunas de nuestras regiones, sobre todo en Cataluña y el País Vasco, el clivaje identitario suma, desde hace décadas, una nueva dimensión política al tradicional eje ideológico izquierda--derecha. En estas comunidades, la presencia de los nacionalismos periféricos construyó sistemas multipartidistas ya antes de la eclosión populista actual. Sin embargo, ahora encontramos curiosas convergencias, ya que el nacionalismo es una potente fuerza de movilización política que entronca perfectamente con el fenómeno populista. El propio Guilluy señala que el independentismo catalán es un ejemplo claro de la fractura centro-periferia. Como en otros casos de «reacción de las regiones ricas a la crisis económica», estaríamos ante una nueva burguesía que propone «desmantelar las solidaridades nacionales y validar el modelo territorial desigualitario de la globalización». A ojos de este observador externo, el *procés* independentista es un claro ejemplo de la hipocresía de aquellos que disfrazan la insolidaridad de antifascismo. Se recubren de buenas intenciones y de superioridad moral unos intereses nada progresistas. Bien calados los tiene el perspicaz autor de *No Society*: «Si llega a

producirse la independencia de las nuevas fortalezas tomará la forma de resistencia al fascismo (de España, en Cataluña) o al populismo (de Trump, en California). La nueva burguesía propondrá el día de mañana la creación de ciudades-Estado en el nombre del bien y de la apertura, lo que le permitirá alejarse definitivamente de la plebe». Y concluye que el «ejemplo catalán ilustra la fiebre de una burguesía dispuesta a cualquier cosa para abandonar el bien común».

Ahora, el *procés* catalán no sólo es una cuestión monetaria. La burguesía ha sustituido las virtudes burguesas por las pasiones identitarias. La paranoia en torno a la identidad explica en gran medida todo lo que nos está ocurriendo. En la actualidad, cualquier diferencia étnica, lingüística o religiosa puede convertirse en una amenaza y, por tanto, en un arma política. Afecta a minorías y a mayorías. El freudiano «narcisismo de la pequeña diferencia» es usado como palanca para el odio y la movilización. Al poner el acento en lo que nos separa, por pequeño y particular que sea, y marginalizar lo que nos une, crece la sensación de que estamos ante un juego de suma cero en el que no importa tanto lo que piensas, sino lo que eres. En esta época narcisista, ser y querer importan más que saber y hacer. Con todo, la democracia y el pluralismo siempre han tenido una relación compleja. Es más fácil consolidar un sistema democrático en una población cultural y étnicamente homogénea que en una en la que haya diversidad. El diferente despierta temores, sobre todo entre las personas que ya sufren una angustia por su situación económica. Así, en sociedades en proceso de cambio es más fácil que surjan políticos que alimenten tensiones contra la inmigración, como es el caso de los populismos de derecha, o contra aquellos que poseen una identidad más plural, como es el caso de los nacionalismos. El resentimiento no tiene por qué surgir en las sociedades más plurales. Por ejemplo, en las grandes ciudades multiculturales el apoyo a este tipo de populismos suele ser más bajo y la diversidad es percibida como una riqueza. El miedo se concentra en las sociedades que empiezan a cambiar, allí en las que la mayoría puede imaginar un futuro en el que puede convertirse en minoría.

Estos miedos lógicos y comprensibles son una de las fuentes del crecimiento del nacionalpopulismo en gran parte de Europa y de

Estados Unidos. A diferencia de la derecha liberal, que en las últimas décadas se ha centrado en un programa fundamentalmente económico, el nacionalpopulismo prioriza la cultura y antepone su idea de nación al cosmopolitismo y al individualismo. Es una llamada a recuperar el control, como afirmaban los *brexiters*, y a dar voz, o al menos eso prometen, a aquellos que se sienten abandonados o despreciados por las élites. Reprochan a éstas haber acelerado la llegada de inmigrantes para favorecer la reducción de los salarios e incrementar la competencia por unas ayudas sociales que ya no alcanzan a los nativos. Pero también se indignan al entender que las élites apuestan por un multiculturalismo que potencia la cultura o la tradición foránea mientras desprecia la propia. Llama la atención que políticos de izquierda o instituciones gobernadas por ella feliciten públicamente festividades musulmanas o chinas e ignoren o banalicen las cristianas. La reacción a desprecios de este tipo es el aplauso a discursos como el de Le Pen y su «Francia olvidada».

Los politólogos Roger Eatwell y Matthew Goodwin definen el nacionalpopulismo como «una ideología que da prioridad a la cultura y los intereses de la nación y que promete dar voz a quienes sientan que las élites, a menudo corruptas y distantes, los han dejado de lado e incluso despreciado». Y consideran que uno de los pilares en los que se sustenta su auge es «cómo la inmigración y el hipercambio étnico están ayudando a la aparición de grandes temores sobre la posible destrucción de las comunidades y la identidad histórica de los grupos nacionales y de los modos de vida establecidos». Es fundamental escapar de los tópicos y realizar correctamente el diagnóstico sobre los orígenes de los nacionalpopulismos, porque tachar de racistas o fascistas a los que sienten miedos legítimos no sólo es una ineficaz manera de combatir el radicalismo, sino que amplía la brecha de desconfianza entre la élite y la base. Además, como señalan ambos politólogos, sus votantes «no son votantes transaccionales que sopesan los costes y los beneficios como si fueran contables», sino que pretenden reafirmar su identidad ante lo que consideran una amenaza o un desprecio. No sólo es, pues, una reacción a la inmigración, sino también a las políticas de identidad, como las de la nueva izquierda o las de los nacionalismos periféricos.

La identidad está en el centro de la política actual, por lo que merece la pena reflexionar sobre ella. Las personas somos incapaces de abstraernos de nuestras circunstancias. A lo largo de la vida recibimos influencias externas y conformamos nuestra identidad. Desde el nacimiento nos vamos adscribiendo a diferentes pertenencias cuya suma da como resultado nuestra identidad, siempre múltiple y única. Todos somos únicos. Cada uno de nosotros es un mosaico de pertenencias y, como huellas dactilares, no encontrarás dos iguales. Nos sentimos del pueblo en el que nacimos y de la ciudad en que vivimos, de nuestra comunidad y de nuestra nación; somos nuestra religión o nuestras creencias; sentimos afecto por un partido político y pasión por un club de fútbol; nos vinculamos a personas con nuestras mismas aficiones; somos, en definitiva, una infinita combinación de sentimientos y lealtades. Algunas impuestas por nacimiento y otras elegidas con el paso del tiempo. Y aunque somos libres para olvidar o potenciar algún elemento de nuestra identidad, alguna de estas pertenencias, no solemos plantearnos esta cuestión de manera consciente y explícita. En todo caso, nadie debería tener el derecho a imponernos una identidad simple, como pretenden los nacionalismos, ni tampoco a exacerbar una única pertenencia, como hacen las políticas de identidad. El nacionalismo catalán, sin ir más lejos, pretende obligarnos a sacrificar una parte de lo que somos, y lo hace desde la superioridad moral de quien cree que nos brinda un derecho. Pues no. Nadie tiene el de-recho a empobrecernos culturalmente, nadie debería obligarnos a perder una de nuestras pertenencias. Éstas no suelen ser compartimentos estancos. Podemos sentirnos catalanes, españoles y europeos. Y sentir las tres pertenencias de manera plena, no una más que la otra, ya que no son elementos medibles con porcentajes. Así, el proyecto independentista se fundamenta en una gran mentira, en la supuesta incompatibilidad, e incluso el antagonismo, de dos de nuestras pertenencias. «O catalán o español» exigen con la trampa de un derecho a decidir que, en realidad, es una obligación a renunciar. Es un discurso divisivo y excluyente de aquellos que pretenden una sociedad culturalmente más pobre y cerrada para, de este modo, poder dominarla políticamente.

Sumar es mejor que restar. Las diferentes pertenencias pueden ser

recursos culturales que nos fortalezcan ante un mundo complejo y globalizado. Renunciar a ellas nos fragiliza y debilita. Sin embargo, crecen los movimientos políticos a favor de pertenencias excluyentes y beligerantes. Justo cuando empezábamos a creer que la democracia liberal triunfaría definitivamente y dejaría los choques culturales, étnicos o religiosos para los libros de historia, la fuerza de la identidad resurge y rompe el paradigma dibujado por Francis Fukuyama y su fin de la historia. *Identidades asesinas* y *El desajuste del mundo* son dos magníficas obras que nos explican cómo los conflictos en torno a la identidad han resurgido en el siglo XXI, de cómo hemos pasado de la fractura ideológica a la identitaria. El autor, Amin Maalouf, no sólo es una persona con una evidente identidad múltiple, de madre francófona y padre anglófono, cristiano, árabe, libanés y francés, es también un escritor tremendamente sugerente a la hora de aproximarnos a la cuestión identitaria.

Al reforzar la lealtad de grupo y agitar las pasiones, la tentación nacionalista o la manipulación de una pertenencia es un arma política de primer nivel. Bunkeriza al co-lectivo frente a un enemigo, real o imaginario, y exime de responsabilidad a los dirigentes propios. Por ello no es de extrañar que, ante casos de corrupción y pésima gestión, los políticos mediocres activen el discurso nacionalista e inicien algún tipo de *procés*. La identidad es un factor de voto clave, porque ofrece una manera sencilla de entender el mundo y facilita una respuesta para prácticamente cualquier pregunta. El lingüista y gurú progresista, George Lakoff, señala que «los votantes votan por su identidad; votan sobre la base de lo que son, de sus valores y de lo que admiran y a quién admiran. Un determinado número de votantes se identifica con sus intereses y votan conforme a ellos. Pero esto es la excepción, no la regla. Hay otras formas de identificación personal: con su etnia, con sus valores, con los estereotipos culturales y con los héroes de la cultura». Por tanto, no es extraño que, tras el fracaso del proceso independentista y la evidencia de las mentiras, la base electoral nacionalista continúe siendo tan fuerte en Cataluña. Se le atribuye a Franklin Delano Roosevelt la célebre frase sobre el dictador nicaragüense Tacho Somoza: «Sí, es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta». Pues eso. Y es que nuestras decisiones políticas no se

motivan solamente por razones de interés económico personal, sino también, y en gran medida, por la búsqueda de reconocimiento, por la identidad. Asimismo, un líder puede instrumentalizar el resentimiento de una parte de la población que percibe que su identidad ha sido insultada o despreciada. Según Fukuyama: «Un grupo humillado que busca la restitución de su dignidad tiene mucho más peso emocional que las personas que sólo buscan una ventaja económica». El resentimiento, espontáneo o estimulado, es una fuente inagotable de apoyo electoral, aunque nos envuelva en una amarga decadencia.

El nacionalismo juega de manera brillante con las teorías de los marcos mentales teorizados por Lakoff, con el lenguaje, las emociones y las identidades. También la nueva izquierda. Son ideologías que no requieren una gran elaboración intelectual, simplemente basta con apelar a los sentimientos y activar el narcisismo. Por esa razón es tan complicado luchar contra estos fenómenos apelando simplemente a la razón o a la realidad. Como advierte Maalouf, cuando se incita a afirmar una pertenencia identitaria, sea ésta una religión, una nación o una etnia, «los que reivindican una identidad más compleja se ven marginados». Se dificulta la labor de moderación y reconciliación. La reducción de toda la identidad a una sola pertenencia es, pues, un instrumento eficaz para la movilización política, pero también para la destrucción de la convivencia. Nuestro autor se pregunta: «¿Acaso no es la principal virtud del nacionalismo hallar para cada problema un culpable antes que una solución?». Además, la afirmación de la supremacía de una de las pertenencias adquiere fuerza cuando se contrapone a otra pertenencia, forjando una dialéctica amigo-enemigo y generando un efecto parecido, simétrico, en el otro. Inconscientemente fortalecemos las pertenencias que sentimos atacadas. Esto explica también por qué el nacionalismo es tan aficionado a la elaboración de listas de agravios y a la fabricación de victimismo. Si creemos que nos atacan por ser catalanes, nos sentiremos más catalanes, por lo que el político nacionalista tiene incentivos para inventar o, incluso, provocar esos ataques. Así se inflaman las pasiones, se exigen venganzas y victorias. Y crece la paranoia. El nacionalismo es terreno fértil para las teorías conspiranoicas. Es una dinámica peligrosa. Nos lo advierte Maalouf:

«El miedo puede llevar al crimen a cualquiera».

Tampoco son necesarias grandes diferencias para dejarse arrastrar por la destrucción. Los identitarismos saben explotar el freudiano narcisismo de las pequeñas diferencias. En este terreno político, si se le aplica una descarga emocional, lo simbólico o lo aparente puede ser tan decisivo o más que lo real. En explotar las diferencias está el éxito de las políticas de identidad, y también su riesgo, al desvirtuar el concepto de *ciudadanía* y dificultar la viabilidad de la democracia liberal. Priorizan los reconocimientos parciales de la dignidad humana —por razones de sexo, etnia, religión, lengua, etc.—por encima de un criterio más universal. Instauran nuevas discriminaciones y perpetúan el conflicto. Aquellos que no defiendan el paquete completo de las reivindicaciones de su tribu serán expulsados de ésta. Como si de una religión se tratase, el hereje merece peor consideración que el infiel. De esta manera, la sociedad se polariza en torno a razones identitarias. Si el debate fuera en torno a las ideas, el diálogo sería posible; pero cuando el problema no es el *qué*, sino el *quién*, todo se tuerce. Es una lucha de monólogos y etiquetas. No sólo se dinamitan los puentes del entendimiento, sino que los referentes comunes desaparecen. No queda nadie que pueda hablar a toda la sociedad. Todo se politiza, incluso el ocio. Y sin un mínimo cultural compartido, la cooperación se obstruye. Al final, la identidad exaltada acaba dificultando el progreso: se vetan las buenas políticas no por su contenido, sino por su firma. De la misma manera, sólo se condena la violencia si la provocan los adversarios, mirando a otro lado cuando la ejecutan los nuestros.

Fomentar políticamente una identidad única es fuente de violencia o tiranía. Es una mala idea. Mientras el sentimiento de una pertenencia compartida es positivo para generar confianza y mantener la convivencia, las campañas a favor de una pertenencia beligerante convierten con rapidez a amigos en enemigos y sitúan el fanatismo como el criterio determinante para la selección de las élites. Es la deriva que ha provocado el *procés* en Cataluña. Los partidos nacionalistas han escogido a candidatos y presidentes cada vez más radicales (y mediocres): Jordi Pujol, Artur Mas, Carles Puigdemont, Quim Torra, Laura Borràs, Joan Canadell…, el descenso en la escala meritocrática no tiene fin. La ilusión de una identidad única es

peligrosa, ya que excluye a buena parte de la sociedad. Siempre encuentran un peldaño más por el que seguir bajando. «Insistir en un aspecto singular de la identidad humana sin dejar margen a la elección no sólo nos disminuye como personas, también hace que el mundo sea más inflamable», nos avisa Amartya Sen, economista que sufrió la explosión identitaria en su India natal. El nacionalismo, como doctrina según la cual las fronteras de los Estados deben coincidir con comunidades culturalmente homogéneas, es siempre conflicto. «¡El nacionalismo es la guerra!», exclamó François Mitterrand en su último discurso en el Parlamento Europeo. Estas palabras las repetiría Jean-Claude Juncker, entonces presidente de la Comisión Europea, pocas semanas después de que el Parlamento catalán declarara la independen-cia de Cataluña y fracturara definitivamente la sociedad. Los nacionalistas pueden jugar con las reglas democráticas durante un tiempo, pero su proyecto es de homogeneización —normalización, lo llaman ellos—, por lo que tarde o temprano rebasarán los límites de la democracia y del Estado de derecho.

El nacionalismo es un tipo de política de identidad, pero no la única. La política actual en todo Occidente, y ésta es una de las razones de la fragmentación y la polarización sociales, pivota en torno a este tipo de políticas que buscan la superioridad moral a través de la victimización y, por tanto, de la culpabilización. Para presentarse como una víctima es necesario identificar un culpable. Consecuentemente, este tipo de políticas encienden el odio en la sociedad. Exigen el reconocimiento de la dignidad, pero no para todos los ciudadanos, sino solamente para los de su colectivo. Esta dialéctica víctima-culpable, esta retórica del resentimiento y esta ruptura de la igualdad también las adopta una nueva izquierda que está disolviendo la sociedad en una constelación de tribus enfrentadas. El proceso español sigue la misma lógica que el *procés* catalán, aunque en gran medida ha importado los marcos discursivos del mundo anglosajón. No deja de ser paradójico que nuestra izquierda más antiamericana esté copiando las peores ideas producidas en los campus universitarios de Estados Unidos. Son ideas que dividen y polarizan la sociedad y que destruyen carreras profesionales e, incluso, vidas. De hecho, la toxicidad de estas políticas es tal que se vuelven con facilidad en

contra de sus impulsores en forma de las mismas acusaciones exageradas o en el auge del nacionalpopulismo.

En *El regreso liberal*, Mark Lilla ha criticado, desde la propia izquierda, esa deriva de la política de identidad de sus correligionarios que han dejado de pensar en el bien común, que carecen de un proyecto para toda la nación y que tienen un tipo de discurso distinto para cada uno de los colectivos a los que se dirigen. Lilla sitúa el origen de este cambio en los campus universitarios. Hasta los años sesenta, los líderes progresistas provenían de la clase trabajadora o del mundo agrícola. Posteriormente, la educación política del progresismo se fue produciendo «en campus muy apartados tanto social como geográficamente del resto del país y, en particular, de los tipos de personas que constituían la base del Partido Demócrata». Alejados de las penurias económicas de una declinante clase trabajadora, se obsesionaron con la identidad. El «nosotros» pasa a ser un «yo», pero un «yo» irresponsable. Se fomenta una actitud de revolucionario de pacotilla entre jóvenes de entornos acomodados a los que se les dice que si potencian cierto aspecto de su identidad podrán alcanzar el estatus de víctima y ganarse así los apoyos que no merecen por su trabajo o esfuerzo. Lilla hace un llamamiento a recuperar un liberalismo cívico, centrado en lo que los ciudadanos compartimos, porque sabe que «en cuanto presentas un asunto exclusivamente en términos de identidad, invitas a que tu adversario haga lo mismo». En este sentido, Donald Trump fue también una reacción a las políticas de identidad de la izquierda y al abandono por parte de ésta de cualquier programa integrador. Y es que una de las respuestas a la corrección política que intenta imponer la izquierda identitaria es la incorrección sin límites. Es la incorrección por la incorrección, aunque también perjudique a la convivencia. Así, la política de identidad y el nacionalpopulismo se retroalimentan. El trumpismo en España crece, sobre todo, como reacción al secesionismo catalán y a la radicalización de las políticas divisivas del PSOE y Podemos. Este trumpismo también se siente víctima, también señala a un culpable y también exalta una pertenencia beligerante. En nuestro caso, abraza un nacionalismo español que puede llegar a ser muy diferente al patriotismo.

La política de identidad dictamina que ciertas pertenencias

confieren superioridad moral. Ya no se busca la igualdad, sino que se exige la superioridad. Por ejemplo, es el paso dado por la última ola del feminismo. Es la transformación de luchas legítimas y necesarias en una radicalidad que acaba representando todo aquello que critica. A este paso, nos advierte Murray, vamos directos a «un futuro en el que el racismo se combate con el racismo y en el que la marginación por motivos de género se combate con la marginación por motivos de género». En torno a las nuevas demandas políticas se crean grupos de interés, que con rapidez se tornan modos de vida. El incentivo a la agitación continua es, pues, evidente. En uno de los mejores artículos sobre el *procés* catalán publicado en *El País* (4/IX/2015), Benito Arruñada y Víctor Lapuente apuntaban que «a lo largo de la historia, el estamento que más ha promovido el independentismo no ha sido la burguesía ni el proletariado radical, sino la *clerecía*». Ésta incluye a funcionarios, escritores, académicos y a todo aquel que «gusta de la aventura porque, a diferencia de la burguesía, tiene mucho que ganar y poco que perder». Al clérigo nacionalista «hasta el mismo proceso soberanista le resulta rentable, pues cuanto más tormentosas son las relaciones con el resto de España, más se venden muchos de sus productos. De libros a tertulias. Al contrario que los de la burguesía, que se venden menos». Arruñada y Lapuente dan aquí la clave para entender lo que años más tarde se conocería como el procesismo: los intereses personales de una parte de la población fomentan una agitación que perjudica al resto, incluso le amarga la vida.

Podemos (nunca mejor dicho) encontrar clérigos en todas las políticas de identidad. Entusiastas o simples cínicos que pervierten luchas en defensa de los derechos humanos, contra el racismo o a favor de la igualdad entre hombres y mujeres, incrementando exponencialmente sus demandas cuando gran parte de sus objetivos ya se han alcanzado. Estos cambios a gran velocidad, que convierten en intolerable lo que hace cuatro días era común, es lo que Kenneth Minogue denomina «el síndrome de san Jorge jubilado», y que Douglas Murray rescata en su clarividente libro *La masa enfurecida*. Según contaría la leyenda, tras matar al dragón, san Jorge no quiso asumir que la misión de su vida ya había sido cumplida. Y recorrió el mundo, buscando nuevos enemigos, nuevas batallas que ampliaran su gloria.

Sólo encontró algunos pequeños dragoncitos, lagartijas que pronto se agotarían. Así, un día acabó quijotescamente enloquecido, dando mandobles al aire creyendo que luchaba contra alguna bestia feroz. Como señala Murray, «hoy en día, la vida pública está llena de gente ansiosa por echarse a las barricadas cuando la revolución ya ha terminado». Exageran los problemas para poder golpearse el pecho y mostrarse ante los demás como virtuosos. Unos son narcisistas, otros se dejan arrastrar por la corriente, pero todos acaban envileciendo legítimas reivindicaciones y agravando los problemas que prometían resolver.

Ésta sería una manera de explicar el *procés*: el catalanismo murió de éxito. Cuando había alcanzado todas sus metas, cuando España se había convertido en una de las democracias más descentralizadas del mundo y el catalán estaba hiperprotegido, incluso a costa de los derechos de los castellanoparlantes, el catalanismo se transformó en un separatismo populista que enfrenta a los catalanes con una retórica agresiva y despectiva. Si antaño se vanagloriaba de ser europeísta, ahora el nacionalismo catalán se aleja de los estándares democráticos europeos y se atrinchera, con Puigdemont al frente, al lado de los euroescépticos. El *procés* fue una redefinición acelerada del discurso catalanista. Acrecentó la intolerancia de unos clérigos que no dudan en atacar a aquel que sostenga postulados que ellos mismos defendían no mucho tiempo atrás. Sin ir más lejos, los convergentes, esos conversos de última hora a la religión independentista, reaccionan ahora con virulencia ante cualquier afirmación que ellos mismos defendían hace pocos años. En 2010, Artur Mas explicaba que un referéndum independentista sería perjudicial para Cataluña porque la dividiría en dos mitades. Dos años después ese sentido común se había esfumado, y los seguidores de Mas no dudaban en calificar de antidemócrata a quien hiciera una reflexión como aquélla. Este mismo síndrome afecta al proceso español. Las carreras por mostrar una pureza moral superior al resto alejan la política del sentido común, y se acaba retrasando la respuesta a una pandemia porque «el machismo mata más que el coronavirus». Cualquier crítica a la nueva izquierda acaba siendo merecedora de la etiqueta de fascismo. Igual que en el Parlament de Cataluña se activaba la «alerta fascista» ante cualquier discrepancia

con el *procés*, cualquier crítica a la negligente gestión de Sánchez con la pandemia te sitúa en un supuesto «trifachito». En realidad, para los guardianes de la corrección política es menos importante cumplir los objetivos prometidos que mantenerse en el poder. Murray lo describe perfectamente:

> En algún punto, el agravio político de las minorías se transformaba en activismo político y, seguidamente, en política a secas. Afirmar la existencia de bloques de votantes que coinciden con determinados grupos minoritarios beneficia a ciertos políticos [...], y puede beneficiar a los intermediarios profesionales que dicen hablar en nombre de toda una comunidad con el fin de obtener algún tipo de promoción. Se trata de una conjetura muy peligrosa, pero todos los grupos que luchan por algún tipo de derecho han acabado cayendo en ella.
>
> Es peligrosa porque sugiere que uno sólo pertenece a una minoría reconocida en tanto en cuanto haga suyos unos agravios, unos principios políticos y unas plataformas electorales ideadas por otros. A la que uno se sale del perímetro señalado, deja de poseer las características que había poseído hasta entonces y se convierte en alguien que no piensa según la norma prescrita. Se lo desposee de esas características.

En la última campaña electoral norteamericana, el entonces candidato demócrata Joe Biden afirmó que «si tienes un problema para decidir si estás conmigo o con Trump, entonces no eres negro». Esta asociación entre voto y pertenen-cia está implícita en todos los discursos de la nueva izquierda y del nacionalismo, pero pocas veces se había mostrado tan desnuda. Si no les votas, renuncias a la pertenencia que te victimiza, ergo, pierdes la superioridad moral. Es la tendencia que persigue la actual izquierda española al señalar que sólo se es feminista si se vota a partidos de izquierdas. Así lo señaló Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno y secretaria de Igualdad del PSOE: «¿El feminismo es de todas? No, bonita, nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista». Clara Campoamor se revolvería en su tumba. El último 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la fundadora de Izquierda Unida Cristina Almeida fue un paso más allá y se refirió a la presidenta de la Comunidad de Madrid con las siguientes palabras: «Yo te digo que si las mujeres mandásemos, hasta Díaz Ayuso, a lo mejor, era capaz de

ser más mujer». Isabel Díaz Ayuso manda, pero para la nueva corrección polí-tica, ser del Partido Popular la inhabilita como mujer o, al menos, no debería ser considerada tan mujer como una representante de la izquierda. En definitiva, si no compras todo el paquete de la izquierda, desde la política fiscal hasta el modelo de Estado, no sólo no puedes ser feminista, ni tan siquiera puedes considerarte mujer. Podrá ir toda vestida de color morado, pero las palabras de Cristina Almeida son un ataque a la libertad ideológica de las mujeres. El nuevo feminismo es, en realidad, muy poco feminista. Pronto la izquierda española alcanzará el mismo nivel de radicalidad que el nacionalismo catalán, que desde hace tiempo excluye de la catalanidad a todo aquel que no apoya al independentismo. En fin, Biden pidió disculpas por sus palabras, pero nuestros identitarios están muy orgullosos del camino emprendido, un camino que nos lleva a todos hacia un precipicio convivencial. La retórica de la exclusión y la confrontación no será gratis para nadie.

Las palabras tienen consecuencias y cambian el mundo, pero las innovaciones tecnológicas cambian a su vez el lenguaje. Es difícil entender el actual escenario de fragmentación y polarización sin analizar el papel de los nuevos medios de comunicación y cómo están afectando a la retórica de los políticos y a la degeneración del debate público. La cultura influye en la economía y ésta, en aquélla. Las inseguridades incentivan la inflamación política, y los discursos de confrontación agravan la crisis económica. Las redes sociales impulsan nuevos dogmas y empujan a los discrepantes a encerrarse en sus burbujas. La deliberación desaparece y los temas más complejos son tratados con simplismo y atrevida ignorancia. La reflexión y la prudencia no son precisamente virales en Twitter. El pionero de la realidad virtual Jaron Lanier ha sido muy claro: «Las redes sociales tienen sesgos, no hacia izquierda o derecha, sino hacia abajo». Para los personajes públicos, y no sólo para ellos, la hemeroteca de tuits se convierte en una pesadilla. Opiniones pasadas son manipuladas y sacadas de contexto. Y el aprendizaje a base de humillaciones provoca que los políticos eviten cualquier cuestión delicada —como hace la mayoría— o, por el contrario, se zambullan en la total incorrección política —como Trump y sus seguidores—. El narcisismo desbocado y

el individualismo sin responsabilidad encuentran en las redes sociales un enorme campo por el que expandirse. En una búsqueda de *likes* y retuits para satisfacer necesidades psicológicas de una autoestima debilitada, abrazamos tribus identitarias digitales. Facebook y Twitter son campo de batalla en la guerra cultural, la guerra por imponer unos valores y unos comportamientos. Se plantea como una lucha entre el bien y el mal. Blanco y negro. Binario, como los referéndums: sí o no, me gusta o no me gusta. Pero son referéndums continuos, 24 horas diarias, y en nuestros teléfonos móviles. No queda, pues, circunscrita a los parlamentos o a los medios de comunicación, sino que la guerra cultural invade nuestras vidas, ensucia cada rincón de nuestra existencia y nos incita a posicionarnos. Como señala Michiko Kakutani, internet ha acelerado ciertas dinámicas que ya se encontraban en la cultura contemporánea: «Desde el egocentrismo de las generaciones del "yo" y el *selfie* hasta el aislamiento de la gente en su propio silo ideológico y la relativización de la verdad».

Pero también convierte la hipérbole en la figura retórica más común en la política actual. La retórica es fundamental en la política democrática, porque es el arte de la persuasión. También fomenta ideas y cambia valores, aunque no siempre de la manera deseada. Es capaz de unir a la nación más diversa, pero también derribar el imperio más potente. Puede conseguir que cooperemos y persigamos finalidades morales compartidas, pero también que pongamos nuestras libertades en manos de un tirano. Puede servir a la causa más noble, pero también a la mentira más ruin. En la retórica, el *pathos* domina al *logos*, porque son las emociones las que nos mueven a tomar las decisiones. Es *a posteriori* cuando las justificamos con la razón. En palabras de Sam Leith, la retórica es «la herramienta imperfecta de un mundo imperfecto». Y para sobresalir en la jungla digital se inician demenciales carreras de demagogia y exageración. La crispación en la política actual no es ajena a la dinámica de las redes sociales y a la campaña permanente. No hay espacio para el sosiego y la moderación. Según el periodista Mark Thompson: «La crisis de nuestra política es una crisis de lenguaje político». Las palabras pierden su significado. Las frases se acortan. La narración se encapsula en 140 (o 280) míseros caracteres. Los medios de comunicación tradicionales se han quedado

sin autoridad ni influencia. La opinión pasa por delante de la información y los hechos son cuestionados. Internet puede ser una fuente de conocimiento inagotable, pero pocos tienen tiempo (y voluntad) para contrastar y reflexionar. Uno muestra su virtud atacando con más dureza al rival. La exageración lo contamina todo, también las promesas electorales, pero a la inflación programática la acompaña una polarización política que imposibilita las reformas. Es el paso previo a la frustración, al desengaño, a la desafección. El sentimiento de traición espolea a opciones más radicales, percibidas como más auténticas, y la política es abducida por una espiral de degradación y conflicto. La degeneración de la retórica política es, a la vez, síntoma y causa de la falta de respeto a la ley, de la creciente intolerancia y de la irresponsabilidad. Es una seria amenaza para la libertad, porque socava sus pilares.

La retórica de la hipérbole es adictiva. Ofrece noto-riedad a la mediocridad intelectual. Sin embargo, la inflamación verbal actúa como un bumerán: tarde o temprano regresa contra su impulsor. Es autodestructiva. Mark Thompson define la exageración como una droga en política, ya que

> proporciona un subidón instantáneo, pero puede tener efectos perjudiciales a largo plazo. Cada palabra que digas puede ser anotada y usada en tu contra, y puede llegar el día que lamentes aquella generalización indiscriminada o aquel desprecio tan feroz. En realidad, la exageración puede convertirse hasta tal punto en tu rasgo más característico que los medios de comuni-cación siempre la esperen de ti, y a menos que digas alguna barrabasada no se hagan ningún eco de tus declaraciones. Sin darte ni cuenta, te descubrirás representando un papel de reparto en un rancio culebrón político, y tu capacidad para hacerte oír en asuntos de entidad se perderá para siempre.

En la magnífica biografía de Joseph Fouché, Stefan Zweig explica la trampa de la retórica revolucionaria personificándola en la figura de Robespierre. Éste magnificaba los vicios del adversario y enardecía a sus creyentes. Éstos acabaron exigiendo respuestas a la altura de los supuestos crímenes cometidos contra ellos. Los cadalsos se abarrotaron, pero nunca es suficiente y se buscan traidores entre las propias filas que alimenten a la hambrienta guillotina. Y siempre

aparece alguien dispuesto a subir el grado de dema-gogia para alcanzar la gloria o el poder. Las palabras sangui-narias preceden a actos sanguinarios. A lo largo de la historia este proceso se ha reproducido innumerables veces. El comunismo, por ejemplo, es también la historia de las purgas. La burguesía catalana, cansada de vivir bien, jugó también a la revolución con el *procés*. Perdió sus virtudes burguesas y sus hijos se alistaron a la CUP, a los CDR y al germen de una nueva *kale borroka*. «Escucha, Convergència, se nos acaba la paciencia», cantaban los jóvenes revolucionarios el día que fueron a matar al padre. Zweig nos advertía ante esas dinámicas: «Los acusadores de ayer se convertirán en los acusados de mañana». Es el efecto del bumerán revolucionario.

El problema es que cuando la autodestrucción de los narcisos llegue, la sociedad puede haber perdido ya demasiado. El daño puede llegar a ser irreversible. La falta de confianza en una sociedad complica la convivencia, y el conflicto es más probable de lo que creemos los hijos de la democracia. Como hemos visto en este capítulo, la inseguridad económica, la ansiedad cultural y la política irresponsable son fuentes de polarización social. El identitarismo de la nueva izquierda y de los nacionalismos nos dividen y enfrentan aún más. Fragilizan nuestras sociedades ante los enormes retos a los que deberíamos hacer frente. Consumen todas nuestras energías combatiendo con mentiras e insultos. Sin embargo, convertir la identidad en una religión, en una falsa religión, es causa y consecuencia de una crisis de valores más profunda aún que la económica. Está fallando la ecología moral que sustenta la libertad. Si la sociedad no recupera el criterio y la responsabilidad, estaremos condenados a que unos demagogos sustituyan a otros demagogos hasta que el declive sea imparable. Es fácil destruir la confianza, pero prácticamente imposible reconstruirla. El populismo de los narcisos rompió Cataluña en 2017. En 2021, España sigue ese mismo camino.

Capítulo 3

Se repite esta misma historia

Después de los intentos fallidos de marzo de 2016 y julio de 2019, Pedro Sánchez inauguró el año 2020 consumando el pacto del insomnio, un Gobierno de coalición que por primera vez desde la Segunda República aunaba a las izquierdas españolas en el Poder Ejecutivo. El Congreso no había estado nunca tan fragmentado en nuestra democracia ni tampoco tan polarizado. Durante los últimos meses de 2019, el independentismo radical había vuelto a quemar las calles catalanas como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo que condenaba a algunos de los protagonistas del *procés*. El movimiento Tsunami Democràtic, con el apoyo de políticos independentistas, llamó a tomar el aeropuerto de Barcelona-El Prat. Miles de seguidores obedecieron y asaltaron esta infraestructura estratégica. Por el bloqueo, un pasajero francés tuvo que caminar tres kilómetros para obtener la tarjeta de embarque y sufrió un infarto. No se pudo habilitar ningún carril para emergencias. Murió de parada cardiaca. Los manifestantes cortaron también vías de tren, destruyeron mobiliario urbano por valor de millones de euros e hirieron a casi 300 agentes de policía, uno muy grave. Fue otro octubre terrible para la convivencia en Cataluña, pero el foco de atención pronto tomaría el puente aéreo. A finales de mes, Sánchez exhumaba los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos y los trasladaba al cementerio de Mingorrubio, en El Pardo. Celebró el traslado como una «victoria» y ofreció un espectáculo televisivo que más bien parecía una conmemoración. «Me alegra que la izquierda española por fin haya

decidido en-terrar a Franco», ironizó la entonces portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. Sin embargo, Franco seguiría muy vivo en el relato de una izquierda que, como los independentistas en Cataluña, se ha acostumbrado a etiquetar como fascista o facha a cualquier crítico.

Así se llegó a las elecciones del 10 de noviembre, en las que los españoles no le supieron reconocer a Sánchez su victoria contra Franco. Se trataba de una repetición electoral forzada por las previsiones erróneas de asesores presidenciales. La famosa batalla por el relato fue un fracaso en especial doloroso para unos gurús monclovitas obsesionados con la comunicación y la propaganda. El primer partido de la oposición, el Partido Popular, aumentó su representación respecto a los comicios de abril, pasando de 66 a 89 diputados. Ciudadanos, uno de los posibles aliados del PSOE en la formación de Gobierno, se hundió, pasando de 57 a 10 escaños. Y la derecha populista de Vox crecía hasta convertirse en la tercera fuerza del hemiciclo con 52 diputados. Tanto PSOE como Podemos habían perdido apoyo electoral, sobre todo los segundos. Otra repetición electoral habría sido letal para ambos, por lo que pronto Sánchez renegaría de todas sus promesas electorales y convertiría a Pablo Iglesias en su vicepresidente. Pero antes necesitaban más apoyos. La investidura más ajustada de la democracia, por sólo dos votos, fue posible gracias a aquellos que todavía hoy no han dejado de amenazar con volver a atacar a la democracia española en cuanto tengan la más mínima oportunidad. «Ho tornarem a fer», seguían y siguen proclamando. Montserrat Bassa, diputada de Esquerra Republicana, subió a la tribuna del Congreso para anunciar una abstención decisiva a favor de Sánchez y dejar claras sus prioridades: «La gobernabilidad de España me importa un comino». Los peores aliados, en el peor momento. Pocas horas antes de que Sánchez se pusiera en manos de partidos como ERC y EH Bildu, las autoridades chinas reconocían oficialmente que el causante de un preocupante brote en Wuhan, provincia de Hubei, era un nuevo coronavirus. El régimen comunista había silenciado las voces que alertaban de la peligrosidad de la enfermedad. El relato oficial no podía ser cuestionado. La censura amordazó a los científicos y encubó la mayor catástrofe humana

acaecida en nuestro planeta desde la Segunda Guerra Mundial.

Las pandemias han tenido un enorme impacto en la historia universal, aunque su reconocimiento tanto en la historiografía como en la literatura de ficción sea menor. Una pandemia tiene mala narrativa, por así decirlo. Las personas mueren por culpa de un enemigo invisible. No es una guerra; no existe una lucha entre el bien y el mal. La llamada «gripe española» de 1918 provocó más de cincuenta millones de muertes. Ninguna de las grandes guerras del siglo XX superó la mortalidad de aquella enfermedad. Y a pesar de ello, sólo hay que comparar la cantidad de ensayos escritos o películas producidas sobre las guerras mundiales con las escasas obras sobre aquella pandemia para darse cuenta del olvido en el que se encontraba una tragedia sufrida sólo un siglo atrás. Sin embargo, las consecuencias sociales y culturales fueron enormes. Cada sociedad respondió sobre la base de los valores predominantes en aquel momento. Al superar la pandemia, en algunas ciudades se dio rienda suelta a los placeres más carnales. En unos países aumentó la religiosidad, en otros se exacerbaron los recelos entre diferentes colectivos. Según Laura Spinney, autora de *El jinete pálido*, aquella «gripe remodeló las poblaciones humanas de una forma más radical que ningún otro acontecimiento desde la peste negra. Influyó en el curso de la Primera Guerra Mundial y, posiblemente, contribuyó a la Segunda. Empujó a la India más cerca de la independencia, a Sudáfrica del *apartheid* y a Suiza al borde de la guerra civil. Marcó el comienzo de la sanidad universal y la medicina alternativa, nuestra afición por el aire puro y nuestra pasión por el deporte, y probablemente fue responsable, al menos en parte, de la obsesión de los artistas del siglo XX por las múltiples maneras en que el cuerpo humano puede fallar».

José Enrique Ruiz-Domènec, catedrático de Historia Medieval en la Universidad Autónoma de Barcelona, ofrece una panorámica de los grandes avances culturales en unas sociedades del pasado que no se resignaron a ser derrotadas por un enemigo invisible. En su libro *El día después de las grandes epidemias*, relata cómo el nacimiento de Europa, el Renacimiento, el derecho de gentes, la Ilustración o el Estado de bienestar tuvieron entre sus causas las peores plagas y pestes. Las epidemias son inevitables y sólo la ciencia acabará con ellas. No

obstante, la buena política es fundamental para minimizar daños y recuperarse lo antes posible. En la Constantinopla del siglo VI, la peste bubónica hacía estragos mientras los «expertos» se perdían en debates, cómo no, bizantinos. Quedaron atrapados entre el pasado y las disputas teológicas. Como hoy, «los métodos son los mismos, hay que crear una tensión, un suspense, en el ágora o en el plató de televisión». También la mala política empeoró la situación en Europa durante la peste negra del siglo XIV. Las advertencias fueron ignoradas. La solución requiere siempre de la participación de la verdad. «Y no repetir las habituales mentiras de los gobernantes cuando un hecho les sobrepasa.» Tampoco faltó la negligencia en los inicios de la conquista de América, con una nefasta gestión de las epidemias que asoló a las poblaciones nativas, aunque al final «la sociedad española giró bruscamente hacia la senda de la sabiduría y dejó el espíritu de la conquista: atacó el problema mostrando un sincero descontento». En el siglo XVII el tifus, la viruela y la peste arrasaron Europa. Y en el XX, la «gripe española». Una política funesta lo empeoró todo. De hecho, los desastres de la primera mitad del siglo pasado pueden ser imputados a unos liderazgos mediocres, incapaces de entender la complejidad de los nuevos retos. A pesar de todo, Ruiz-Domènec regala esperanza al concluir que «la sociedad, desafiada, se despierta siempre. Y si no lo hace en el siglo XXI, será una excepción». Aquellos grandes desastres fueron seguidos por grandes respuestas. Tras unos primeros momentos en los que gobernaba la irresponsabilidad e, incluso, la maldad, las sociedades supieron sobreponerse, entendiendo la importancia del pragmatismo, del reformismo, de la cooperación y la flexibilidad, de la verdad, de las instituciones adecuadas y de la rendición de cuentas. ¿Será diferente esta vez? ¿Será la pandemia un puñetazo encima de la mesa que nos despierte del sueño narcisista?

¿Cómo será el mundo pospandémico? Influyentes pensadores como Fareed Zakaria o Ivan Krastev entienden que la pandemia no supone una ruptura con los fenómenos que hemos analizado en el capítulo anterior, sino que será un amplificador o un acelerador de tendencias y conflictos previos. Según Krastev, el factor clave para superar esta crisis no es tanto el tipo de régimen político como la confianza social en las instituciones. Por esta razón, aquellos Gobiernos

que han impulsado la polarización social y el descrédito de las instituciones han socavado, a su vez, la eficacia de su lucha contra la pandemia. Cuando la Generalitat de Cataluña ha exigido obediencia a la ciudadanía después de años promoviendo la desobediencia institucional, se ha topado con una profunda crisis de autoridad y con dificultades para evitar aglomeraciones en protestas de todo tipo. ¿Cómo confiarán los españoles en las instituciones si un vicepresidente del Gobierno pone en duda que nuestro país sea una democracia? El proceso español, igual que el *procés* catalán, como fenómeno de polarización social inducida desde el poder político, ha debilitado a la sociedad española a la hora de afrontar unida la crisis de la pandemia, pero hay más factores que explican por qué España ha liderado los peores rankings sanitarios y económicos durante los últimos meses. El politólogo búlgaro apunta que «la calidad de la burocracia es mucho más decisiva que el tamaño del presupuesto o incluso el gasto en sanidad». Tampoco hay que ir muy lejos para comprobarlo, ya que lo sufrimos con algunas irracionalidades del modelo autonómico. El Ministerio de Sanidad, por ejemplo, fue incapaz de garantizar el suministro de equipos de protección más básico, lo que llevó a España a ser el país con más sanitarios contagiados por la Covid-19 de todo el mundo. En otros casos, hubo directamente mala voluntad, como cuando el Govern de Joaquim Torra en Cataluña prefirió en numerosas ocasiones ser un obstáculo antes que colaborar en la solución vetando al Ejército español en sus tareas de desinfección de residencias o en el establecimiento de hospitales de campaña durante los días más duros de la pandemia. En fin, son problemas que no se solucionan con más recursos públicos, sino con una mejor política. No obstante, a corto plazo y a pesar de la enorme crisis y su mala gestión, los Gobiernos se han visto reforzados, porque los ciudadanos sentíamos miedo. Sentíamos miedo a morir, miedo a perder personas queridas, miedo a perderlo todo. Y se estaba dispuesto a sacrificar libertades a cambio de seguridad. En ese momento, la prioridad absoluta era la protección. Sin embargo, a medida que el problema no sea el coronavirus sino el desempleo y la pobreza, el miedo mutará en ansiedad. Y la ansiedad, a diferencia del miedo, sí permite el enfado y la ira, como indica Krastev. En España, paradoja de paradojas, el Gobierno se ha mostrado

incompetente en la gestión a la vez que era el primero en alimentar el discurso de la confrontación contra el resto de las instituciones, poderes y partidos. Incluso se ha vanagloriado de su sectarismo en el momento más inoportuno. «Nunca he querido pactar con el Partido Popular», proclamó jactancioso Pedro Sánchez en una entrevista en el *Corriere della Sera* en julio de 2020, precisamente en vísperas de las negociaciones sobre el Plan de Recuperación de la Unión Europea.

Aunque baje el tono de voz y simule afectación, la radicalidad del sanchismo es evidente por los temas, los posicionamientos y los aliados escogidos. En un reportaje para *El País* publicado el 31 de julio de 2020, a caballo entre la primera y la segunda ola pandémica, desde la Moncloa reconocían que cuentan con un calendario para esta legislatura «con asuntos como la guerra cultural y la reforma de la Constitución. Cada propuesta legislativa está contemplada en su momento». Millones de españoles sin trabajo o en un expediente de regulación temporal de empleo, los famosos ertes, mientras el Poder Ejecutivo se centra en la guerra cultural; es decir, en la exaltación de pertenencias identitarias beligerantes, en la fractura social subvencionada. La actitud polarizadora de Pedro Sánchez no es una novedad en el PSOE, aunque ahora, en tiempos de pandemia y crisis económica, luce con mayor gravedad. En el año 2008, a las puertas de unas elecciones generales y de la gran crisis financiera, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero acudía a los estudios de la cadena Cuatro para ser entrevistado por Iñaki Gabilondo. La complicidad entre ambos era notoria y al acabar la entrevista, y pensando que los micrófonos ya no estarían grabando, Gabilondo se interesó por las encuestas. «Bien», contesta Zapatero. El periodista parece satisfecho, «sin problemas». Pero el entonces presidente acaba reconociendo que «lo que pasa es que lo que nos conviene es que haya tensión». Quien presumía de talante y etiquetaba continuamente a la derecha de «crispadora» desvelaba su hipócrita estrategia en un descuido. En aquellos tiempos, las campañas de los socialistas catalanes contra el Partido Popular venían siendo muy duras, de una estigmatización y una virulencia que nada tenían que envidiar al trumpismo. Habían firmado el Pacto del Tinell con un partido independentista y otro comunista para excluir a una fuerza democrática de cualquier negociación. Algo impensable en

otras democracias maduras. Años más tarde Sánchez doblaría la apuesta. «No es no», entonaba en 2016 contra Mariano Rajoy y los populares. «Con Rivera no», cantarían sus militantes en 2019, mientras él los escuchaba sonriente ante la sede socialista de la calle Ferraz. «Yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no?», les diría, reafirmando su vocación por la exclusión y la inmoderación.

En todo caso, me permitirán la *boutade* de tomar el léxico de los teóricos populistas y definir a Sánchez como un significante vacío. A lo largo de su carrera ha demostrado una gran ambición por ostentar el poder que le ha llevado a hacer gala de una inaudita capacidad de resistencia. *Manual de resistencia* es, de hecho, el último libro que ha publicado. Es probable que también lo haya leído. Como significante vacío, Sánchez podría ser rellenado con cualquier idea, propuesta o eslogan con tal de satisfacer su ambición personal. Puede ser el candidato más duro contra el independentismo y el populismo, y también el presidente que les abra las puertas de la Moncloa. No hay crítico más inmisericorde del Sánchez del presente que el Sánchez del pasado. Su hemeroteca tuitera es toda una colección de contradicciones. Sin embargo, la inexistencia de un proyecto para todos los españoles lo ha compensado con la estrategia comunicativa diseñada por su gurú de cabecera y actual jefe de gabinete, Iván Redondo, y por la ideología política de la nueva izquierda populista de quien ha sido, durante trece meses, su vicepresidente Pablo Iglesias. Eso es el sanchismo: un triángulo formado por la ambición de Sánchez, la estrategia de Redondo y la ideología de Iglesias. No es extraño, pues, que en algunas de las discusiones más importantes en el Consejo de Ministros, Sánchez se posicione a favor de los ministros podemitas frente a algunos del PSOE, que representan una izquierda más clásica, más sensata y, lamentablemente, más agonizante. Toda la ambición desmesurada de estos personajes converge en una política profundamente divisiva para los españoles. Aceleran la fractura de la sociedad en el momento que necesitamos más unidad.

En su libro *La traición progresista*, el periodista argentino Alejo Schapire advierte del peligro que corren sociedades como la española si se dejan arrastrar por los actuales gobernantes:

> El avance de la izquierda identitaria por encima del proyecto de la emancipación universalista no sólo no está cumpliendo con sus promesas de justicia social: está propiciando un enfrentamiento tribal en detrimento del «nosotros», necesario para cualquier proyecto colectivo. La concepción relativista de la humanidad como un archipiélago de identidades en pugna, sin verdades absolutas, vuelve obsoletos consensos históricos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Las políticas de identidad de esta nueva izquierda, igual que el nacionalismo, actúan como un disolvente de la confianza en la sociedad, cada vez más fragmentada, y también como un elemento de distracción respecto a los retos realmente importantes. Mientras el nacionalismo catalán vivía ensimismado, Cataluña no dejaba de perder oportunidades como las surgidas por los efectos de otro populismo, el Brexit. Nunca se planteó seriamente atraer empresas y talento británico, y se perdió la posibilidad de captar la Agencia Europea del Medicamento para Barcelona. Del mismo modo, a las puertas de una pandemia que ya golpeaba a un país tan cercano y semejante al nuestro como Italia, la batalla entre las izquierdas gobernantes no podía ser más polarizadora. La tercera ola del feminismo radical escondía la primera ola del coronavirus.

Denuncia Lorenzo Bernaldo de Quirós que la «Santa Iglesia feminista de esta hora constituye una profunda mutación de lo que fue en su primera ola: un movimiento orientado a conseguir la igualdad política, legal y social de la mujer, la eliminación de las trabas que consagraban una injusta situación de desigualdad». Éste era un enfoque profundamente liberal a favor de la igualdad de derechos jurídicos. La segunda ola, a partir de los años sesenta, luchó por la igualdad de oportunidades, para que cada mujer pudiera desarrollar su carrera profesional: derecho a la baja por maternidad, derechos reproductivos o seguridad frente a los violentos. Sin embargo, la tercera ola pretende generar una guerra entre hombre y mujeres. A partir de la década de los ochenta, ya no busca la igualdad, sino la imposición gubernamental de nuevas discriminaciones. Es una deriva de una parte del feminismo (no todo, ni mucho menos) que pugna por cuestiones más particulares con un lenguaje más agresivo. Desde entonces, según Douglas Murray, «la exageración y el catastrofismo se

han convertido en moneda de uso corriente para el feminismo». En España, esta deriva ha llegado tarde, pero ha venido con fuerza. Desde Podemos y PSOE se impulsa un feminismo radical con una sobrecarga emocional que dificulta el debate. Incluso aquellas políticas de Ciudadanos que lo intentaron bienintencionadamente con una propuesta de feminismo liberal fueron rechazadas violentamente por sectores progubernamentales. Cuestionar la eficacia del lenguaje inclusivo, por ejemplo, se ha convertido en una actividad de alto riesgo.

A cuatro días del 8 de marzo de 2020, la cuenta oficial del Ministerio de Igualdad, dirigido por Irene Montero, tuiteaba: «La #LeyLibertadSexual quiere dar seguridad y protección a las mujeres. Queremos que el grito feminista "Sola y borracha, quiero llegar a casa" se convierta en una realidad para dejar de vivir con miedo. Los derechos de las mujeres nunca más se perderán en callejones oscuros». No deja de ser curioso que desde el Gobierno se dicte el lema de una manifestación. Más allá de una posible incitación al consumo abusivo de alcohol, el mensaje oficial se refería a una ley que ponía en evidencia la colisión entre dos tradiciones de la izquierda, o entre la izquierda tradicional y la nueva izquierda. Las discrepancias entre el PSOE y Podemos en torno al anteproyecto de ley de libertad sexual y a la capitalización del movimiento feminista marcó unas jor-nadas en las que el coronavirus ya corría por nuestra sociedad. Si meses antes la vicepresidenta Carmen Calvo había tratado de circunscribir el feminismo a la tradición socialista, el choque entre las dos facciones gubernamentales se evidenciaría cuando el entonces vicepresidente Pablo Iglesias acusó al ministro de Justicia, el socialista Juan Carlos Campo, de «machismo frustrado» por haber argüido cuestiones técnicas para frenar la polémica ley. Cuestiones, por otra parte, muy razonables dada la baja calidad legislativa del anteproyecto. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se sumó a los ataques de su jefe al ministro de Justicia: «Parece que cuando mujeres prestigiosas redactan una ley hace falta que venga un machote a explicar las cosas». Se pretendía imponer una corrección política que acallara cualquier crítica razonable. Con todo, el Consejo General del Poder Judicial apuntaría, un año más tarde, que la denominada ley

Montero no sólo contiene numerosos errores de escritura, sino que invade competencias autonómicas o de otros ministerios, colisiona con otras leyes y, lo más preocupante, «se estarían alterando de modo sustancial las normas sobre la carga de la prueba en el proceso penal, con riesgo de afectación del principio de inocencia». En la actualidad, la tramitación de esta ley sigue alargándose por las disputas en el seno del Gobierno, aunque en aquel momento se publicitaba como una medida de extrema urgencia. Mientras el norte de Italia, como una máquina del tiempo, ya mostraba claramente el futuro que España iba a sufrir en pocos días, los miembros del Consejo de Ministros se enzarzaban en una guerra que tenía más que ver con la propaganda que con las mujeres maltratadas. Eso sí, cuando alguien se atrevía a insinuar que quizá debería prestarse atención a la inminente pandemia, la izquierda política y mediática se unía para tacharlo de alarmista o de machista redomado, ya que la corrección política marcaba que sólo podía haber un tema en la agenda mediática de aquellos días.

Así se llegó al 8 de marzo. El Gobierno había llamado a realizar una concentración masiva, porque, según Carmen Calvo, «nos va la vida en ello». Pancartas con la frase: «El machismo mata más que el coronavirus». Los medios de comunicación afines ridiculizan a quienes advierten con miedo de lo que se nos viene encima. Nace el «sologripismo». Es poco más que una gripe, nos dicen. Una asistente a la manifestación aparece en TVE: «El coronavirus no existe. No hay ningún problema. Yo, besos a todo el mundo, y abrazos, y todo». Sin embargo, ellas iban con guantes. Mientras decían a la población que no había que temer al coronavirus, las ministras iban con guantes a la manifestación y pedían que no se las besase. Como en el *procés* catalán, la competencia por mostrar una pureza identitaria dentro del bloque gubernamental condujo a la población a tomar decisiones irresponsables basadas en una gran mentira. Como en el caso del *procés* catalán, la posterior rendición de cuentas tras una catástrofe evitable sería mínima. Vale la pena preguntarse qué habría pasado si, por aquellas fechas, Pedro Sánchez hubiera sido el líder de la oposición y Pablo Casado, el presidente del Gobierno que hubiera esperado para tomar decisiones ante la pandemia. En un ejercicio tuitero y ucrónico

de exactamente 280 caracteres, Jorge Bustos nos planteaba: «Imaginemos. Hay coronavirus. Gobierna el PP en España y el PSOE en Madrid. El Gobierno central autoriza una manifa en Colón en defensa de la familia. Al día siguiente se reconoce una escalada exponencial de contagios. Madrid cierra los coles. Marcha a Moncloa al grito de asesinos». Tampoco es necesaria una gran imaginación. Tenemos a nuestra disposición la maldita hemeroteca. Buscamos y encontramos las declaraciones vertidas sobre el ébola, el perro muerto y la gestión del Gobierno de Mariano Rajoy. La alcaldesa de Barcelona Ada Colau, una brújula moral que siempre apunta en la dirección equivocada, hablaba entonces de «exterminio encubierto». Pedro Sánchez y Pablo Iglesias atacaron ferozmente al presidente Rajoy y a la ministra de Sanidad Ana Mato. Pedían sus cabezas. Ansiaban el poder a toda costa. Es fácil deducir, pues, lo que hoy habrían dicho estos maestros del populismo. Es la guerra cultural de la izquierda la que le permite actuar con esa doble vara de medir, con ese cinismo, sin coste alguno. Al adversario se le atribuye toda la maldad. A los propios, como mucho, errores entendibles, fruto de la buena voluntad.

El Gobierno antepuso la propaganda supuestamente feminista a la salud de decenas de miles de mujeres. Quizá llegaron a creerse sus propias mentiras. La izquierda identitaria, aliada con los nacionalismos periféricos, dibuja España como un país oscuro, intolerante y machista. Nada más lejos de la realidad. Ciertamente, no vivimos en el paraíso. No somos perfectos y debemos seguir avanzando en la lucha contra la violencia machista o a favor de la igualdad de oportunidades, pero ni mucho menos somos los peores, tampoco entre los países de nuestro entorno. Al contrario, estamos entre los mejores países del mundo para vivir, tanto para hombres como mujeres. Cuando la izquierda identitaria exagera los problemas para imponer su agenda y su discurso, Douglas Murray aconseja que le preguntemos: ¿en comparación con qué? Esta interrogación ayuda a desmantelar muchas farsas, razón por la cual los narcisistas suelen no contestar. Ellos desean mostrarse como virtuosos que luchan contra lo peor. ¿Es España un país realmente machista? Quizá han conseguido imponer esa percepción, pero si comparamos datos objetivos difícilmente se encontrarán países en los que haya menos desigualdad y más seguridad

para una mujer. En marzo de 2018, con un Gobierno del Partido Popular, España fue el único país del mundo en el que se convocó una huelga general para reivindicar el Día Internacional de la Mujer. Las manifestaciones de aquel 8-M fueron multitudinarias. Precisamente aquella semana se publicitaba un informe de la Universidad de Georgetown y el Instituto de Investigación de la Paz de Oslo que situaba a España como quinto país en el bienestar para las mujeres. Este estudio valora la inclusión, la justicia, la seguridad, la escolarización, la inclusión financiera, el empleo femenino, el uso de móviles o la violencia en el seno de la pareja. Por otra parte, según el «Índice de peligro para la mujer», de Asher & Lyric, España es el país más seguro del mundo para viajar sola. Las ocho variables que tiene en cuenta este índice de 2019 son: la proporción de mujeres asesinadas intencionadamente, la violencia sexual fuera de la pareja, la violencia sexual dentro de la pareja, la discriminación legal, la brecha de género, la desigualdad de género, la actitud social ante la violencia contra las mujeres y el porcentaje de mujeres que se sienten seguras caminando solas de noche. Nunca es aconsejable volver a casa por la noche «sola y borracha», pero los datos demuestran que el nuestro no sería el peor país para hacerlo. Así pues, la imagen de España como país machista y retrógrado que trata de transmitir la nueva izquierda es tan distorsionada como la que vende el nacionalismo catalán y sus cantinelas sobre una España franquista o ladrona. Sin embargo, España sí sale muy mal parada en la práctica totalidad de rankings que muestran la gestión de la pandemia; a saber, muertos por millón de habitantes, sanitarios contagiados, caída del PIB o aumento del desempleo. En comparación con el resto de los países de Europa, el Gobierno de Sánchez está siendo el peor. Si logran tapar esa realidad con más políticas de identidad, nada mejorará nuestra sociedad ante otras olas de Covid-19, otras pandemias u otros retos.

La verdad es necesaria para la salud de una democracia y es, por tanto, un obstáculo para el populismo de los narcisos. Aquellos que quieren acaparar un poder sin límites fomentan la disolución de las barreras entre los hechos y la ficción. En las mejores distopías literarias del siglo XX, así como en las peores prácticas políticas, el totalitarismo se fortalecía con el sacrificio de la verdad. Los libros de George Orwell

o los regímenes nazis y comunistas muestran cómo el aliado más necesario del totalitario no es el convencido o el más fanático, sino, como escribió Hannah Arendt, «el individuo para quien la distinción entre hechos y ficción (es decir, la realidad de la experiencia) y la distinción entre lo verdadero y lo falso (es decir, los estándares del pensamiento) han dejado de existir». En el siglo XXI, lamentablemente, han hecho fortuna conceptos como *posverdad*, *fake news* o *hechos alternativos*. No surgen de la nada. Antes del triunfo de estos eufemismos, que esconden la mentira de toda la vida, el relativismo se había ido imponiendo paso a paso en nuestras sociedades. Triunfa la creencia de que no existe *la* verdad, sino una infinidad de verdades, siendo lo más importante el punto de vista de cada individuo o colectivo. La izquierda académica abrazó esta creencia, sobre todo a partir de los años sesenta, para combatir lo que creían que era el pensamiento dominante en Occidente. Pero las ideas tienen consecuencias, y lo que podía resultar estimulante desde el punto de vista artístico o cultural se convertiría en una pesadilla política. Si la verdad no tiene valor, la democracia no tiene dónde sustentarse. La razón se retirará para dar paso al imperio de los sentimientos.

El relativismo, la opinión por encima de la realidad, abre la puerta de par en par a charlatanes que alimentan el ego de la audiencia y a movimientos narcisistas como son el nacionalismo, la izquierda identitaria o, una reacción, la derecha populista. Si la verdad es lo que uno siente, el diálogo se enmaraña en una confusión de expresiones sentimentaloides. Cuando la sociedad se polariza y se fragmenta, cuando dejamos de compartir hechos y nos instalamos en burbujas, las emociones adversativas nublan la razón. Sólo se acepta e interioriza aquello que fortalece los prejuicios propios y se establece una barra libre de medias verdades y mentiras completas. La Ilustración entra en crisis ante el avance de una posmodernidad que dictamina que todo es subjetivo, creencia prolífica e inspiradora en el terreno artístico, pero que en política conduce al triunfo de los oportunistas, los mentirosos y los narcisistas.

El proceso independentista y la izquierda pandémica no habrían sido posibles en un contexto de sano escepticismo, ni tampoco sin unos potentes medios de comunicación (y propaganda) que aislaran a sus

consumidores de informaciones o argumentaciones que pusieran en duda su relato, el relato oficial. Ambos son procesos regresivos. La sociedad degenera, convirtiéndose en una yuxtaposición de compartimentos estancos, de tribus que odian al diferente y acaban adorando a políticos deshonestos por el simple hecho de ser de los suyos. Estamos ante *neoleninistas*, personas que creen que el fin justifica los medios, que la mentira puede ser un instrumento legítimo si sirve para crear un enemigo y atacarlo, y así fortalecer la identidad de grupo amenazado y evitar cualquier rendición de cuentas por mala gestión, promesas incumplidas o corrupción.

Cuando la verdad deja de importar y se prioriza el odio al otro, se puede realizar una afirmación y la contraria sin el más mínimo rubor. Se transita con ligereza hacia el cinismo. Para entender esta muerte de la verdad, Michiko Kakutani rescata una cita de *Los orígenes del totalitarismo*, de Arendt, que a cualquier observador del presente debería preocupar. Dice Arendt: «En un mundo incomprensible y en constante cambio, las masas han alcanzado un punto en el que creen al mismo tiempo todo y nada: creen que todo era posible y que nada ha sido cierto». Podríamos encontrar en el proceso independentista un claro ejemplo. «Tot és pos-sible» (todo es posible) no sólo es un programa radiofónico de la muy escuchada RAC1, forma parte de un verso («que tot està per fer i tot és possible») del poema *Ara mateix*, de Miquel Martí i Pol, que se popularizaría durante el *procés*. Curiosamente, el título original del libro de Peter Pomerantsev sobre la Rusia de Putin es *Nada es verdad y todo es posible*.

Todo era posible, sólo había que desearlo con mucha fuerza. Iban a conseguir que Cataluña fuera un Estado miembro de la Unión Europea y de Naciones Unidas en sólo dieciocho meses. Cualquier duda al respecto era rechazada con desprecio. Nadie podía cuestionarlos sin arriesgarse al ostracismo. Los líderes del *procés* mintieron al asegurar que Cataluña sería independiente, mintieron al prometer que aprobarían los últimos presupuestos autonómicos, mintieron al asegurar que eran una mayoría social y que tenían el apoyo internacional. Mintieron a sus seguidores al prometerles la República catalana. Siguen mintiendo. Ahora prometen a sus seguidores volver a hacer aquello que ante los jueces juraron no haber

hecho. Se presentan como víctimas de un Estado opresor desde sus cargos bien remunerados y su coche oficial. En su relato, España es una dictadura con «presos políticos» y «exiliados», y lo explican a todas horas en los medios públicos, como TV3 y Catalunya Ràdio, sin importarles la enorme contradicción. Y es que, seguimos con Arendt:

> La propaganda de masas ha descubierto que la audiencia está, en todo momento, dispuesta a creer lo peor, no importa lo absurdo que sea, y que no presenta especial objeción a que se le engañe, porque asume de antemano que cualquier afirmación va a ser un embuste. Los líderes totalitarios han basado su propaganda en el supuesto psicológico de que, en determinadas condiciones, cualquiera puede hacer creer a la gente las declaraciones más estrambóticas un día. Si al siguiente se les diera una prueba irrefutable de que aquellas declaraciones no eran ciertas, se refugiarían en el cinismo. En lugar de dejar de confiar en los líderes que les mintieron, declararían que ellos supieron en todo momento que aquellas afirmaciones eran calumnias y admirarían a sus líderes por su inteligencia táctica superior.

A esa supuesta inteligencia táctica superior, los procesistas la llamaron «jugada maestra». Cualquier rectificación del plan original era una jugada maestra. Cualquier mentira descubierta era otra jugada maestra. El procesismo nunca pierde; la cadena de mentiras nunca para. Una mentira mayor cubre a otra mentira. El diputado de Esquerra Gabriel Rufián prometió estar «dieciocho meses en el Congreso, ni un día más», no había «plan B», ni tampoco «nada que negociar». Estas contundentes promesas con plazos fijados de antemano fueron publicadas por *El nacional.cat* el 9 de diciembre de 2015. Rufián no abandonó el escaño. De hecho, volvió a ser el cabeza de lista de Esquerra en las elecciones generales de 2016, y en las de abril de 2019, y en las de noviembre de 2019..., sus seguidores no penalizaron la mentira. Jugada maestra, sí, la de la carrera política de Rufián y otros tantos trileros.

También Pedro Sánchez es un as de las jugadas maestras; es decir, de las mentiras para mantenerse en el cargo. En innumerables ocasiones negó la posibilidad de un pacto con Podemos. Llegó a decir que, con Pablo Iglesias en el Consejo de Ministros, él «sería un presidente del Gobierno que no dormiría por la noche, junto con el 95 por ciento de los ciudadanos de este país que tampoco se sentirían

tranquilos». Antes, el candidato Sánchez había prometido que nunca pactaría con el populismo, porque éste conlleva, entre otras calamidades, «cartillas de racionamiento». Tras la repetición electoral de 2019 se produjo el pacto del insomnio, el abrazo entre Sánchez e Iglesias. No había confianza, ni proyecto común, pero sí ambición desmedida y una excusa hiperbólica: las tres derechas, la ultraderecha, la amenaza fascista. El «trifachito», proclamaban los socialistas, como el inefable diputado e hincha de la polarización José Zaragoza. Difundir la paranoia permite engullir las mentiras con más avidez. Así, al populista le interesa una sociedad estresada y paranoica para que sus bulos se expandan, se viralicen como una pandemia política. Lo que importa es la fuerza del sentimiento, no la realidad de los hechos. El enemigo existirá en tanto que sintamos su amenaza. Si el fascismo está a la vuelta de la esquina, cómo no pactar con los comunistas, los populistas, los independentistas..., con quien sea. Si cada día nos repiten que la lengua catalana va a desaparecer y que el culpable es el castellano, los datos sobre la buena salud del catalán no importarán. Habrá que excluir al castellano de la educación, de la cultura y de los medios.

Kakutani resume perfectamente el proceso por el cual la amenaza fantasma permite el bucle de mentiras: «La indignación da paso a la fatiga de la indignación, que a su vez da paso a una especie de desgaste y un cinismo que dota de poder a quienes difunden los embustes». Algo parecido sucede con el proceso independentista y la izquierda pandémica. Alimentan la indignación de sus seguidores contra el supuesto enemigo hasta agotarlos, y tras tantas energías volcadas contra el otro, cualquier mentira es aceptada. Recordemos el encuentro entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ésta fue recibida por el ministro en territorio español, pese a la expresa prohibición del Consejo de la Unión Europea. Las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro dictaban que esta dignataria no podía poner un pie en territorio europeo, ya que es una persona que ha «menoscabado la democracia y el Estado de derecho en Venezuela, en particular mediante la usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional y su utilización para atacar a la oposición e impedirle su participación en

el proceso político». Sin embargo, Rodríguez estuvo varias horas en el aeropuerto de Barajas y dejó decenas de maletas en España sin ser sometidas a ningún control de seguridad. Cada nueva versión de Ábalos sobre el encuentro convertía la anterior en una flagrante mentira. Primero negó «de manera rotunda» haberse encontrado con ella. Después aseguró que solamente la había saludado dentro de la nave. Más tarde alegó que su misión era que ella no bajara del avión. Al poco tiempo dijo haber hablado con ella unos 20 o 25 minutos para que no pisara territorio europeo. A los pocos días confirmaría que estuvo con ella en la sala vip del aeropuerto. Nunca sabremos cómo acabó esta historia, ya que muy pronto la pan-demia del coronavirus lo taparía absolutamente todo. Lo único que quedó claro es el escaso valor de la palabra del ministro socialista.

El denominado *Delcygate* pronto quedó en el olvido ante la magnitud de la amenaza vírica, pero la catarata de mentiras y contradicciones del Gobierno de Pedro Sánchez no se detendría. Al contrario, aumentarían en número y en peligrosidad, porque ahora ponían en riesgo las vidas de los españoles. El Gobierno se convertía en un agente del caos, aunque una parte importante de la población asumía acríticamente los bandazos. El relato impulsado por la Moncloa daba giros de 180 grados, como el ocurrido entre el 8 de marzo y 14 de marzo, entre la manifestación feminista y el estado de alarma. Pasábamos del mejor sistema sanitario del mundo a todo era culpa de los ajustes presupuestarios del Partido Popular. Sin inmutarse y sin explicar que los mayores recortes a la sanidad fueron protagonizados por la Junta de Andalucía durante la época socialista. Cualquier exigencia de explicación quedaba diluida en un «no se podía saber», aunque al mismo tiempo el presidente Sánchez presumía de haber estado encima de la situación desde el mes de enero. Es un ejemplo claro del orwelliano doble pensamiento que promovieron durante la pandemia. No se podía saber y, a la vez, ya se estaba actuando. La verdad es justo lo contrario: estaban avisados y no hicieron nada o más bien poco. La que sigue podría ser la crónica de una pandemia anunciada.

Animar a acudir a las manifestaciones multitudinarias del 8-M, con todo lo que ya se sabía, fue la mayor negligencia de la historia de

nuestra democracia. Después negarían que una manifestación de miles de personas sin medidas de seguridad pudiera ser un foco de transmisión de contagio, pero al mismo tiempo —doble pensamiento, otra vez— han criticado actos con menos gente y más medidas, como un concierto de Raphael. El problema, con todo, no fue sólo la manifestación en sí, sino todo aquello que se permitió para que ésta pudiera realizarse y nadie sospechara del peligro: desde el mitin de Vox a partidos de fútbol con espectadores, pasando por la masificación en el metro de Madrid. Las alertas estaban ahí. El 30 de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había declarado la emergencia global por la COVID-19. A partir de ese momento, toda la responsabilidad recaía en el Gobierno de España, ya que, según la Ley General de Sanidad Pública, «la gestión de alertas que procedan de la UE o de la OMS es competencia directa y automática del Ministerio de Sanidad». Al día siguiente, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, aseguró: «España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado»; que no habría «transmisión local y, en ese caso, sería muy limitada y muy controlada»; que la enfermedad no era «excesivamente transmisible» y que «la epidemia comienza a remitir». Quizá no con la contundencia debida, pero lo cierto es que el 3 de febrero la OMS seguía advirtiendo y aseguraba que «las medidas de prevención y control son absolutamente esenciales para garantizar que los trabajadores sanitarios estén protegidos frente al virus». El 11 de febrero, la OMS reiteró la urgente necesidad de adquirir material de protección. Dos días después se reunieron los ministros de Sanidad de la Unión Europea, que alertaron del riesgo de desabastecimiento de productos sanitarios procedentes de China. Pero parecía que, para el Gobierno, la cosa no fuera con nuestro país. Tras esa reunión, el ministro Salvador Illa manifestó: «España tiene suficientes suministros de equipos personales de emergencias». Pronto España sería el país con más sanitarios contagiados por coronavirus del mundo.

El 24 de febrero, el director de la OMS urgía a la comunidad internacional a «hacer todo lo posible para prepa-rarnos para una pandemia». El brote en Italia ya estaba descontrolado. El 2 de marzo, el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades

advirtió sobre la celebración de actos masivos que pudieran acelerar la transmisión del virus. El Gobierno de Sánchez hizo caso omiso. Hasta después del anuncio del estado de alarma, el 14 de marzo, el ministerio no se lanzó a comprar mascarillas y guantes a gran escala en el mercado chino. Sí, se podía saber, y la mentira tuvo el precio más alto. Según un estudio de FEDEA, confinarnos el día antes del 8-M habría reducido un 62,3 por ciento los contagios en España: «Habiendo adelantado una semana el aislamiento que se decretó el 14 de marzo se habría disminuido el número de casos registrados, el de personas fallecidas y probablemente se hubiera evitado el colapso de muchos hospitales».

El ejemplo más evidente de desinformación gubernamental durante la pandemia fue la vinculada al uso de las mascarillas. A diferencia de otros países con más experiencia o con menos populismo, en un inicio, el Gobierno español desaconseja el uso de esta protección. Según Fernando Simón, bastaría con lavarse las manos y mantener la distancia social. Lo más grave es que durante semanas los voceros mediáticos afectos al poder ridiculizaron a las personas que usaban mascarillas o reclamaban su uso. Se las tildaba de ignorantes. Se burlaban de ellas en programas de televisión y en cuentas de Twitter. Más tarde se reconocerá que el problema era el desabastecimiento. El inicial discurso nega-cionista del Gobierno podría haber provocado contagios, totalmente evitables de haber tratado a la población como adulta y no como a niños a los que se les oculta información. En su libro *Manual de incompetencia (en tiempos de coronavirus)*, Iñaki Ellakuría y Pablo Planas ponen el dedo en la llaga: «Las directrices del Gobierno central y de los autonómicos durante el mes de marzo y abril, así como un clima mediático que en general se burla del uso de las mascarillas, acaban perjudicando a aquellos ciudadanos con menos recursos económicos o más desinformados, que serán los últimos en hacerse con elementos de protección contra el virus», creando una «aristocracia de las mascarillas».

El Ministerio de Sanidad apuntaba en un tuit del 24 de febrero: «No hay que tomar medidas innecesarias si estás sano, por ejemplo, las mascarillas». No será hasta mediados de abril que el Gobierno recomiende su uso en espacios cerrados y transportes públicos. En

mayo, la Comunidad de Madrid reparte mascarillas del tipo FFP2 y es criticada por un Gobierno que a veces parece más preocupado por atacar a esta autonomía que a la pandemia. Finalmente, a partir del 17 de mayo, dos meses después del inicio del estado de alarma, las mascarillas serán obligatorias. No tuvieron empacho en mentir descaradamente incluso ante prestigiosos medios internacionales. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, explicaba la supuesta estrategia de su Gobierno para hacer frente a la pandemia, que constaba de tres elementos esenciales: «El uso masivo de mascarillas y de desinfectantes. Número dos: hacer test. Esto es esencial, sobre todo para identificar a aquellos casos asintomáticos, pero que portan el virus y pueden ser contagiosos. El número tres tiene que ver con el uso de la tecnología para trazar mejor, empoderar a los ciudadanos y ser responsables en el manejo del virus o en su inmunidad». La realidad es que el Gobierno español se había mostrado vacilante con el uso de las mascarillas, fue incapaz de adquirir test, no ya para la población en general, sino para los propios sanitarios, y el uso de las nuevas tecnologías aún lo estamos esperando. Meses más tarde repetirían el ciclo de esperanzas y frustración respecto a los planes de vacunación.

Toda contradicción es asumida por los seguidores en un contexto de polarización. En el pasado, los aspirantes a dictador debían hacer grandes esfuerzos para eliminar la verdad. Ahora, ésta parece importarles a muy pocos. Es la cultura de la posverdad. El relato de los medios de comunicación contribuye a reforzar las opiniones de la tribu, pero también es cierto que la sobredosis de propaganda y de ruido en forma de tertulias, wasaps... nos agotan, nos hacen bajar la guardia, y el charlatán se aprovecha. El Brexit fue un ejemplo clamoroso. Tras la inesperada victoria del Brexit en el referéndum, uno de los máximos impulsores de la opción soberanista, Nigel Farage, no tuvo empacho en admitir que los datos que habían usado en la campaña eran falsos. Reconocía que las promesas no se podrían cumplir, pero el apoyo popular a su causa apenas se redujo. No cabe duda de que, en una hipotética independencia de Cataluña, pronto quedarían desmentidas todas las expectativas creadas en torno al paraíso prometido. Sin embargo, lo más probable es que la ira provocada por la frustración no se dirigiría hacia los falsos profetas,

sino hacia el enemigo interno, hacia los que ya denominan colonos o *ñordos*. La larga guerra cultural del nacionalismo ha aniquilado la capacidad de autocrítica. Las contradicciones y el doble pensamiento en el *procés* han sido constantes; así podría llegar a ser también con el proceso español. Las valoraciones sobre un mismo hecho cambian totalmente según el contexto o el interlocutor. El independentista puede asegurar que la lengua catalana está en vías de extinción si está tratando de justificar el monolingüismo obligatorio en el sistema educativo público; pero también puede afirmar, con la misma rotundidad, que el catalán está más fuerte que nunca y es una de las lenguas con mayor implantación en Europa para exigir que sea lengua oficial de la Unión Europea.

Uno de los estrategas del *procés*, miembro del autodenominado «Estado mayor» y que ahora empieza a ser investigado por la Justicia, David Madí, desveló en un libro publicado en 2007 cómo opera el independentismo con la comunicación. En *Democràcia a sang freda*, Madí reconoce: «Dels mitjans, em va sorprendre el fet de ser capaç de transmetre el que tu vols, la frivolitat de la professió i la capacitat de fer córrer rumors i notícies falses. No només perquè n'he fet córrer quan m'ha convingut, sinó perquè els he patit. El gran descobriment va ser que el negoci dels mitjans no és la informació, sinó la influència».[1] Reconocer su capacidad para el rumor y el engaño no supuso nunca un obstáculo para la carrera del que fuera portavoz y secretario ejecutivo de Comunicación y Estrategia de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Al contrario, de hecho, este impulsor del *procés*, al que se le atribuye la paternidad intelectual del «derecho a decidir», ha sido contratado por importantes empresas españolas. Fue presidente del con-sejo asesor de Endesa en Cataluña y asesor de Telefónica. Recientemente ha sido detenido por la Guardia Civil en el marco de una investigación por malversación de fondos públicos.

El estilo de Madí ha sido el que se impuso entre los comunicadores del *procés*. Tan acostumbrados están a imponer su visión a los medios de comunicación públicos y subvencionados que, en alguna ocasión, la prepotencia se les fue de las manos. La corresponsal del diario *Le Monde* en España, Sandrine Morel, explica en su libro *El huracán catalán* que fue amenazada con censura por parte

de un responsable de prensa de la Generalitat. Mientras tomaban un café, éste le dijo: «Si compramos dos páginas de publicidad en *Le Monde*, tus jefes te dirán qué debes escribir...». Al ver que ella no se achantaba, la rectificación fue: «Bueno, así funcionan las cosas aquí». El libro de Morel es fascinante, porque ha tenido que ser una periodista francesa la que desvele la enorme distancia que hay entre el discurso público y el privado en la política catalana.

En febrero de 2012, poco antes del inicio del *procés*, el entonces presidente de la Generalitat, Artur Mas, le reconoce que la autonomía que tiene Cataluña «ha funcionado bastante bien», y descarta apostar por la independencia porque la realidad catalana es «complicada», que la sociedad está «muy mezclada», y que para las empresas catalanas «el mercado natural es España». Meses después, Mas olvidaría la complejidad de la sociedad catalana, se erigiría como el nuevo Moisés que interpretaba la «voluntat d'un poble», de un pueblo endiosado, e iniciaría una deriva política suicida que acabaría provocando, años más tarde, la fuga de miles de empresas catalanas hacia otras comunidades autónomas. Mientras en público se vanagloriaban del carácter pacífico del independentismo, llegando a autodefinirse como la «revolución de las sonrisas», uno de los asesores de Mas confesó a Morel que se estaba cociendo un terrible enfrentamiento, un conflicto civil: «En los próximos años, esto va a ser Vietnam». La propia Morel reconoce que, con el paso del tiempo, «los dirigentes catalanes perdieron credibilidad ante una buena parte de la prensa internacional». Tras la declaración fallida de independencia del 10 de octubre de 2017, Morel apunta: «Todo parece una obra de teatro. Los periodistas sienten que se les ha utilizado para difundir falsas promesas y operaciones de comunicación y marketing».

La gran mentira del *procés* era la posibilidad de una independencia exprés y sin coste alguno. El propio *procés*, sin llegar a la independencia, ya tuvo unos costes enormes para Cataluña: sociedad fracturada, fuga empresarial e instituciones desprestigiadas. Sin embargo, esa gran mentira, esa gran estafa, no habría sido posible sin una pléyade de medias verdades y falsedades que la sustentaban. Desde la manipulación del pasado, práctica común de todo nacionalismo, hasta las simplificaciones, exageraciones o falsedades

que supuestamente legitimaban la independencia, el *procés* nos ha dejado un amplio abanico de mentiras. Eran tantas que si alguna se lograba refutar, enseguida se generaban otras que la cubrieran. Se magnificaron —o directamente inventaron— agravios del pasado para justificar las políticas discriminatorias del presente. Se construyó todo un relato romántico, plagado de mitos que trataban de mostrar a los catalanes como las víctimas de una incurable maldad castellana o española. Se conmemoraban unos hechos y se escondían otros. Se distorsionaron las palabras y las intenciones de personajes históricos. Se trató de reescribir la historia, mostrándola como un enfrentamiento entre España y Cataluña prácticamente desde el Compromiso de Caspe de 1412. Esta manipulación alcanzó su cenit en 2014, cuando se derrocharon millones de euros públicos en la gran campaña propagandística que fue la celebración del *tricentenari*, una manera de tergiversar la guerra de sucesión de 1714 para mutarla en una guerra de secesión. Se manipuló también la memoria sobre el franquismo como si ningún catalán hubiera apoyado al dictador. La realidad es que la mayoría de los alcaldes franquistas que siguieron siendo alcaldes con la democracia lo fueron con la federación nacionalista Convergència i Unió.

En su magnífico libro *Haciendo historia*, John H. Elliott critica la historiografía nacionalista en la misma línea que lo hacía Jaume Vicens Vives al cuestionar el relato romántico de los Ferran Soldevila o Antoni Rovira i Virgili. Para el historiador británico:

> Ni el síndrome del pueblo escogido ni el síndrome de la víctima inocente son propicios para escribir buena historia. El primero inclina a un planteamiento del pasado concebido en términos esencialistas, según el cual los logros nacionales se ven como derivados de las características especiales (espirituales, biológicas o raciales) inherentes a un pueblo y dirigidos a alcanzar los objetivos que se han fijado para ellos mismos dentro de un marco de pensamiento providencial o mesiánico. El efecto del segundo es imputar todas las desgracias de la comunidad a otras, e ignorar o desatender deficiencias más cerca de casa.

Así pues, ese victimismo no sólo estaría basado en falsedades, sino que sería un «elemento corrosivo en la sociedad catalana» al obstaculizar «su capacidad de afrontar algunos de sus problemas más

urgentes».

Más mentiras. A pesar de los continuos desmentidos por parte de las instituciones comunitarias, los dirigentes independentistas aseguraban que una Cataluña independiente seguiría formando parte de la Unión Europea. El propio «derecho a decidir» era un engaño. Cataluña gozaba del derecho de autodeterminación, coreaban, pero Naciones Unidas sólo lo reconoce a los pueblos colonizados, a los ocupados militarmente o allí donde exista una clara vulneración de los derechos humanos. Otro eslogan del *procés* era también otra elaborada farsa: «Espanya ens roba». Esta versión ibérica del «Roma ladrona», de la Lega Norte, fue machaconamente repetida en la política catalana. Abusaban del concepto «expolio fiscal», pero sólo en los medios catalanes. El relato suministrado a la prensa extranjera también estaba muy estudiado, y no querían que se les asociara con la xenofobia fiscal. Cifraban en 16.000 millones de euros los recursos que «se iban de Cataluña y no volvían». Silenciaban otros métodos de cálculo de unas balanzas fiscales que no se publican en ningún país. El discurso de la insolidaridad fue liderado por Oriol Junqueras y seguido por su discípulo y sucesor Pere Aragonès, actual presidente de la Generalitat. Sin embargo, Josep Borrell y Joan Llorach desmontaron la falacia del expolio en su libro *Las cuentas y los cuentos de la independencia*. Ambos suelen recordar que el *exconseller* Andreu Mas-Colell reconoció en Londres que Cataluña aportaba de acuerdo con su PIB y recibía de acuerdo con su población; es decir, un independentista, pero bien documentado como Mas-Colell, desmontó el «Espanya ens roba». De todas maneras, cabe señalar que si a igual nivel de renta, los catalanes pagamos más impuestos que el resto de los españoles no es por una decisión tomada desde la pérfida Madrid, sino porque las instituciones catalanas así lo han decretado: tramos autonómicos del IRPF más elevados, impuesto de sucesiones sin bonificar, récord autonómico en impuestos propios. Cataluña es el infierno fiscal de España, por expreso deseo de los sucesivos Gobiernos de la Generalitat. Con todo, al separatismo no le importa usar mentiras fácilmente refutables si sirven para engatusar a aquellos más sensibles al argumento económico. En este sentido, se han inventado incluso una sentencia del Tribunal Constitucional alemán que supuestamente limitaba la solidaridad entre

los *länder*. No sería la única vez que el nacionalismo manipulara el texto de una sentencia para justificar sus postulados. Durante meses, por ejemplo, blandieron la sentencia del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya sobre la declaración de independencia de Kosovo. Sin embargo, los textos que leían no eran de la sentencia, sino inventados. Participaron de este bulo la miembro del Consell Assessor per a la Transició Nacional Pilar Rahola, el juez Santiago Vidal, la entonces presidenta de la ANC Carme Forcadell, el periodista Jaume Barberà, *consellers* y diputados nacionalistas. A pesar de haberse demostrado que mentían, seguían repitiendo textos que no pertenecían a sentencia alguna. Los clérigos del *procés* engañaban a sus feligreses descaradamente, pero nunca perderían la credibilidad ante ellos. Las citas podían ser falsas, pero reforzaban aquello que sentían en su corazón. Matthew d'Ancona, en *Posverdad: La nueva guerra contra la verdad y cómo combatirla*, nos advierte del peligro de que «una proporción cada vez mayor de valoraciones y decisiones queden desterradas al ámbito de los sentimientos, en que la búsqueda de la verdad se convierta en una rama de la psicología emocional, sin amarres ni cimientos».

La política identitaria y el nacionalpopulismo han despreciado la responsabilidad y han tribalizado parte de la sociedad, la han infantilizado. El *procés* catalán fue un claro ejemplo de burbuja informativa en la que las mentiras quedaban impunes y se votaban programas imposibles. No habrá rectificación mientras el electorado no castigue el engaño. El mismo D'Ancona concluye:

> En el largo proceso de descomposición del discurso público que ha acabado llevándonos a la era de la posverdad, la clase política y el electorado se han confabulado en la banalización y el debilitamiento de lo que nos decimos unos a otros. Las promesas irrealizables tienen su contrapartida en las expectativas poco razonables; los objetivos no alcanzados se disimulan en parte mediante los eufemismos y las evasivas; el abismo entre la retórica y la realidad genera desencanto y desconfianza. Y entonces el ciclo vuelve a empezar. ¿Quién se atreve a ser honesto? ¿Y quién se atreve a prestar atención a la honestidad?

Pero no sólo «la clase política y el electorado» se han confabulado contra la verdad. La mentira tiene cómplices. La gran estafa del *procés*

habría sido imposible sin toda una enorme red clientelar y una Administración volcada en la propaganda y el relato. Uno de los politólogos que mejor ha estudiado la creación y la imposición de la narrativa nacionalista catalana es David Álvaro. Según el autor de *Cataluña, la construcción de un relato*:

> Todos los elementos que sustentan el Estado del bienestar moderno son susceptibles de ser instrumentalizados políticamente. Así sucede con la sanidad, la justicia, las infraestructuras y, sobre todo, con la educación y los medios de comunicación. Estos dos últimos de manera especial, pues abarcan dos ámbitos de amplio espectro. Por un lado, los jóvenes, como elemento garante del futuro del Estado-nación y, por otro, la información y el entretenimiento de masas. El primero garantiza el modelo de sociedad en el medio y largo plazo, y el segundo posibilita la creación de un sesgo informativo que reeduque a la sociedad.

Así pues, la relación hostil entre estos Gobiernos y la verdad no sería posible sin la complicidad de importantes medios de comunicación. En Cataluña, la imposición del unanimismo mediático fue una prioridad del pujolismo que alcanzó su cenit con los socialistas en la Generalitat y el editorial único de los principales periódicos catalanes. Éstos atacaron preventivamente al Poder Judicial ante la que iba a ser la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de 2006. Es decir, incentivado por el Poder Ejecutivo, que lo subvencionaba, el poder mediático amenazaba al Poder Judicial. Era el *procés* antes de ser llamado *procés*. Era el año 2009 y un Gobierno del PSC culminaba una aspiración nacionalista, que toda la prensa cata-lana cantara al unísono. *La Vanguardia*, *El Periódico de Cataluña*, *Avui*, *El Punt*, *Segre*, *Diari de Tarragona*, *La Mañana*, *Diari de Girona*, *Regió 7*, *El Nou 9*, *Diari de Sabadell* y *Diari de Terrassa* titulaban su editorial con: «La dignidad de Catalunya». Todo el proceso de elaboración del Estatuto fue un conjunto de movimientos tácticos entre el PSC y los partidos nacionalistas. Desde la propuesta de Pasqual Maragall, que no venía sostenida por ninguna reivindicación de la sociedad catalana, sino por su voluntad personal de competir por el electorado nacionalista, hasta su aprobación en referéndum, en el que sólo había obtenido el apoyo de apenas el 36 por ciento de los catalanes con derecho a voto. No obstante, el entonces presidente de la

Generalitat, el socialista José Montilla, agradeció el apoyo de esos doce medios de comunicación de esta manera: «Tanto por su simbolismo como porque refleja perfectamente la amplia unidad que hay en la sociedad catalana en la defensa del Estatut y de la vía institucional para expresar los deseos y aspiraciones del país». Esta declaración fue una muestra más de cómo el PSC colaboró con la fatal sinécdoque nacionalista que confunde la parte —el nacionalismo— con el todo —Cataluña—, excluyéndonos de la catalanidad a una gran mayoría de los catalanes.

Es imposible entender el *procés* catalán sin el papel de los medios de comunicación públicos en Cataluña. La propaganda y los sesgos partidistas han traspasado los informativos para inundar también el resto de los programas, desde los deportivos a los de humor. Todo es política y todo se entiende en clave nacionalista. Pujol tenía muy clara la importancia de los medios como elemento fundamental de *nation-building*, como estructura para construir una identidad nacional. En su *Programa 2000*, que se filtraría a la prensa en 1990, se reconocía como objetivo: «Lograr que los medios de comunicación públicos dependientes de la Generalitat sigan siendo unos transmisores eficaces del modelo nacional catalán. Para ello se utilizarán y difundirán de forma clara los conceptos relativos a la identidad nacional catalana». En este sentido, se instaba a la «depuración del lenguaje», a la «difusión del contenido de líneas de sensibilización elaboradas para el ámbito de pensamiento (creación del estado de opinión nacional)» o a «incidir en la formación inicial permanente de los periodistas y técnicos en comunicación para garantizar una preparación con conciencia nacional catalana». Entre las «actividades fundamentales» se consideraba «introducir a gente nacionalista de una elevada profesionalidad y una gran cualificación técnica en los lugares claves de los medios de comunicación», la «creación de una agencia de noticias catalana, de espíritu nacionalista y de gran solvencia». Y, ciertamente, a través de una televisión de gran calidad, TV3 consiguió ser la cadena de referencia para una parte importante de los cata-lanes. Fue una televisión moderna y capaz de atraer a pú-blicos diversos. Sin embargo, durante los últimos años la agitación y propaganda ha sido tan excesiva como descarada. El «espíritu nacionalista», que exigía

Pujol, se les ha ido de las manos. Ha ignorado el pluralismo de Cataluña. Y eso en el mejor de los casos, ya que en no pocas ocasiones se ha convertido en un medio hostil a, al menos, la mitad de los catalanes. La selección de tertulianos, el hooliganismo de algunos presentadores, el monolingüismo, la eliminación de la palabra *España*... Alejados ya completamente del interés general, los medios de comunicación públicos de Catalunya se han convertido en cajas de resonancia de la información y la intoxicación por y para independentistas. En no pocas ocasiones han alentado la deriva secesionista más que los propios políticos. Mantienen a sus espectadores atrapados en las lógicas procesistas, pero ya no captan nuevos públicos, ya que el resto de los catalanes desconfiamos profundamente de ellos. Transmiten la idea de una Cataluña homogénea que no existe, aunque sí desean. Han renunciado a la transversalidad y no volverán a dirigirse a un público mayoritario, aunque, de momento, la minoría cautiva les es suficiente para perpetuarse en el poder. Consolidados como herramientas de manipulación y construcción nacional, la lucha descarnada entre ERC y JxCat por el control de los medios públicos conforma en la actualidad la trastienda del Parlamento. Dirigir TV3 y Catalunya Ràdio supone asentar las bases del dominio futuro del espacio electoral independentista.

Para los líderes del proceso español, el control de los medios de comunicación también ha sido un objetivo primordial. Antes de alcanzar la vicepresidencia del Gobierno, Pablo Iglesias había expuesto en numerosas ocasiones cuál es su pensamiento sobre los medios de comunicación y qué habría que hacer con ellos una vez tomado el poder. En 2013, el secretario general de Podemos fue entrevistado por la televisión oficialista de Venezuela. Más allá de asegurar que «es imposible escuchar a personas de izquierdas en los medios de comunicación españoles», el ya conocido tertuliano afirmó que «es antidemocrático que en España los grandes medios de comunicación sean de propiedad privada de multimillonarios». En otra entrevista reconoció que lo que más deseaba era ser nombrado director de la televisión pública y que, de hecho, la condición para un pacto de izquierdas era que le entregaran a Podemos una cadena. El

antipluralismo de Iglesias no admite dudas cuando asevera que la existencia de «los medios de comunicación privados ataca la libertad de expresión». Sus referentes tampoco tranquilizan: «Es crucial tener un ministro de Comunicación teniendo como referencia lo que han hecho en Ecuador, Argentina y Venezuela».

La pandemia, estimuladora de instintos autoritarios, sirvió como excusa a Pedro Sánchez para limitar la libertad de los medios de comunicación. Durante aquellos meses de confinamiento, la gran mayoría nos habituamos al teletrabajo y a las videoconferencias. Las reuniones con nuestros compañeros se realizaban de manera virtual a través de plataformas como Zoom, que suplían con cierta eficacia la presencialidad. No había una excusa tecnológica para limitar la conversación o el debate. No obstante, la Secretaría de Estado de Comunicación, dirigida por Miguel Ángel Oliver, adujo la no presencia de los periodistas en la Moncloa como razón para imponer un sistema de censura previa a las preguntas de las ruedas de prensa. Él elegía qué preguntas se le formulaban al presidente. El control de la información era fundamental para un Gobierno que había actuado con gran negligencia al ignorar activamente las advertencias sobre el coronavirus. La ira de una población, a la cual habían encerrado una semana después de decirle que no se corría ningún riesgo al celebrar manifestaciones multitudinarias, podía desatarse. Se sacrificaría la libertad de prensa en el altar de la protección. Era el eterno dilema entre libertad y seguridad, pero esta vez manipulado por un poder que no consideraba como adultos responsables a sus ciudadanos. Con todo, debían disfrazar el liberticidio, otorgándole cierta legitimidad popular, así que el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) introdujo en abril de 2020 una polémica pregunta que bien podía indicar las intenciones gubernamentales. En un barómetro especial sobre el coronavirus, dos tercios de los encuestados, el 66,7 por ciento, se pronunciaron a favor de restringir y controlar las informaciones y establecer «sólo una fuente oficial de información», frente al 30,8 por ciento que se opusieron. El sesgo de la pregunta es evidente: «¿Cree usted que en estos momentos habría que prohibir la difusión de bulos e informaciones engañosas y poco fundamentadas por las redes y los medios de comunicación social, remitiendo toda la información sobre

la pandemia a fuentes oficiales, o cree que hay que mantener libertad total para la difusión de noticias e informaciones?». Para el CIS, sólo hay dos opciones: o las fuentes oficiales o los bulos. La cuestión es que en numerosas ocasiones las fuentes oficiales están siendo auténticas máquinas de propagación de bulos, incluso en cuestiones tan graves como el número de contagiados o de muertos. La contabilidad de las víctimas de la Covid-19 ha sido excesivamente creativa, a la altura de la información otorgada por el Gobierno chino durante los primeros días de la enfermedad.

Igual que los independentistas habían inventado sentencias, el Gobierno español apoyó su propaganda en estudios inexistentes. En la rueda de prensa del 28 de abril, el presidente del Gobierno fue preguntado por la CNN sobre los test de coronavirus. Su respuesta: «Hoy, por ejemplo, hemos conocido otro estudio de la Universidad Johns Hopkins, que no nos sitúa en el puesto octavo, como hacía ayer la OCDE, sino que nos sitúa en el puesto quinto del mundo en la realización de test totales». Más tarde, el 9 de mayo, la cadena estadounidense le inquiría sobre ese estudio, ya que era incapaz de encontrarlo. Con rostro marmóreo, Sánchez contestaba: «Los datos están ahí». Pero no los mostraba. El ministro Illa también haría referencia, al día siguiente, a ese supuesto estudio: «Son los datos que da la Universidad Johns Hopkins, son referidos y beben como fuente fundamental de su información del portal <worldometers.info>, que ustedes pueden consultar». Pues no. La Universidad Johns Hopkins no sitúa a España en ningún puesto en la realización de test, porque ni siquiera tiene un ranking en el que recopile estos datos. Por otro lado, el informe que sí existió, y no dejaba precisamente bien parado al Gobierno español, fue el de la Universidad de Cambridge. El estudio, que cuenta con la firma del prestigioso economista Jeffrey Sachs y de un equipo de expertos independientes, situó al Gobierno español como el que peor ha gestionado la pandemia de entre 33 países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Si días antes un ufano Sánchez proclamaba que habíamos «vencido al virus» y lanzaba una campaña de marketing bajo el lema «Salimos más fuertes», ahora la Universidad de Cambridge lo situaba como el peor gestor de todo Occidente. Los cinco indicadores

en los que se basaba el ranking eran: las muertes por cada millón de habitantes, la tasa de contagios, el grado de control de la epidemia, la capacidad para reducir el positivo y la reducción de la movilidad.

El Gobierno no sólo mentía descaradamente, también pretendía acallar las críticas por parte de la oposición. En aquel famoso barómetro el CIS formuló otras preguntas torticeras, más pensadas para crear un estado de opinión que para conocerlo. Entre otras: «¿Cree usted que los partidos y líderes de la oposición tienen que colaborar y apoyar al Gobierno en todo lo posible, dejando sus críticas o discrepan-cias para otros momentos, o que deben continuar criticando y oponiéndose al actual Gobierno en todo lo que consideren?». El CIS ha sido una más de las instituciones públicas que el proceso español ha desprestigiado profundamente al ser usado como un instrumento partidista, alejado de la ciencia política y la sociología. De las 38 preguntas que se plantearon en el barómetro, sólo una pedía la valoración sobre la gestión del Gobierno. No se preguntó por la reacción tardía o los fiascos en la compra de material de protección o de los test rápidos. Illa se negó a realizar las compras cuando se le advirtió de lo que se nos venía encima y, cuando ya era tarde, su ministerio fue estafado y compró test falsos a empresas importadoras, antes de que éstas tuvieran la licencia; también pagó por adelantado a intermediarios chinos por mascarillas que tuvieron que ser retiradas de los hospitales por no cumplir con los mínimos estándares de seguridad. Se compraron batas y gel hidroalcohólico a empresas asiáticas que multiplicaban los precios pedidos por empresas españolas. La lentitud y las irregularidades fueron constantes en el que entonces debía ser el ministerio más ágil y riguroso. Pero la preocupación del Gobierno era fundamentalmente una: la opinión crítica. El Consejo de Seguridad Nacional del Ejecutivo español aprobó un plan para vigilar los medios de comunicación. Se ordenó monitorizar las informaciones críticas con el Gobierno. Ojalá hubiera monitorizado los avisos de la OMS y la Unión Europea sobre el coronavirus. No tuvimos esa suerte. Es razonable, incluso necesario, que España combata las campañas de desin-formación, entre otras razones, porque ya las hemos sufrido por parte de potencias extranjeras, pero debe velarse en todo momento por la separación de poderes y la libertad de expresión. No era el caso.

Estaban tratando de crear una suerte de comité de la verdad, formado por personas directamente dependientes del presidente del Gobierno y no por un grupo de investigadores independientes. Pergeñaron un comité ajeno a los estándares democráticos de la Europa del siglo XXI, más propio de países como Rusia. Los presidentes de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) y de la Federación de Asociaciones de Periodistas de Madrid (APM) enseguida advirtieron que nada garantizaba que no fueran a monitorizar y censurar a los medios de comunicación españoles o a las voces críticas con su gestión. Al Gobierno le habría gustado que todos los periodistas españoles fueran como Miguel Lacambra, nombre falso de una persona que se hizo pasar por periodista, publicó en redes argumentos a favor del Gobierno y escribió en el digital *La Marea*, cercano a Podemos. Convertido en héroe de políticos e *influencers* izquierdistas, Lacambra pretendía hacernos creer que las aglomeraciones de marzo no habían propagado en ningún caso el virus y que la gestión del Gobierno había sido magnífica. Si más tarde llegarían a inventarse un comité de expertos, cómo no iban a inventarse entonces un periodista.

Para combatir la desinformación y las noticias falsas, lo mejor habría sido una apuesta clara por la verdad y la transparencia. Sin embargo, el Gobierno aprovechó el estado de alarma para andar en sentido contrario y anular el funcionamiento habitual del Portal de Transparencia. Éste debería servir a cualquier ciudadano que desee pedir cuentas de su gestión a la Administración pública, pero se pretendía obstaculizar cualquier crítica. Durante aquellos días en que saltaron diversos escándalos relacionados con las compras realizadas por el Gobierno, se privó a la ciudadanía de información relevante y se puso en manos del Ejecutivo la decisión de informar o no sobre cuestiones tan candentes como los costes y los beneficiarios de los contratos otorgados a empresas del sector sanitario. La voluntad de ocultación de la realidad era firme. Como señalan Iñaki Ellakuría y Pablo Planas: «Uno de los grandes logros del Gobierno durante la pandemia había sido, hasta la ceremonia de Estado, camuflar la muerte, ocultarla, hacerla completamente invisible para quienes no tienen un familiar o un amigo fallecido por la enfermedad del coronavirus». No había imágenes de hospitales, ni de morgues. Meses

más tarde, abroncarían a la sociedad por no tomarse en serio los riesgos de contagio aquellos mismos que escondieron el peligro y ocultaron las imágenes del dolor. Cuando a mediados de abril de 2020, el periódico *El Mundo* publica en portada una foto de dos sanitarios junto a una persona muerta por la COVID-19, los voceros progubernamentales estallan de indignación. Estaba bien publicar fotos de China, Estados Unidos, Italia o cualquier otro país, pero no de España.

La realidad debía ser escondida a una población que era tratada como una masa irresponsable por parte del Gobierno. Se exigían sacrificios a la población, pero se le escondía a ésta el motivo. Durante meses, Sánchez fue incapaz de acercarse al dolor de millones de españoles: ni él, ni Carmen Calvo, ni Pablo Iglesias se dignaron a visitar la morgue situada en el Palacio de Hielo o el hospital de campaña instalado en Ifema. Se bunkerizaron. Sánchez tampoco quiso acudir al funeral por las víctimas de la pandemia celebrado por la Conferencia Episcopal en la catedral de la Almudena. Era el 7 de julio y, en ese momento, ya habían muerto 40.000 españoles como mínimo. La primera visita del presidente a un hospital madrileño no se produciría hasta el 27 de noviembre. Se presentó en el Hospital de La Paz acompañado del ministro de Sanidad. Aprovecharon que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, estaba aquel día de visita oficial en Cataluña y no informaron formalmente al alcalde de Madrid, quien, de todos modos, quiso acompañar a los miembros del Gobierno. Días antes, Illa había rechazado la invitación de la presidenta madrileña para la inauguración del Hospital de Emergencias Isabel Zendal. La pandemia no redujo un ápice el sectarismo partidista de Sánchez y compañía.

«Siempre se repite esta misma historia», cantaba Camilo Sesto. Trato de huir de todo determinismo, porque creo que ni los catalanes ni el resto de los españoles estamos condenados a los malos Gobiernos, como si éstos fueran plagas bíblicas que escapan al control de la ciudadanía, pero lo cierto es que, en dos momentos muy difíciles de nuestra historia, cuando debíamos enfrentarnos a crisis de una magnitud desconocida en este siglo, ambos Gobiernos, el catalán y el español, empeoraron la situación al actuar con cinismo y negligencia.

Ante los efectos de la crisis económica, el Govern de la Generalitat decidió estimular la división entre los catalanes, subvencionando la mentira y la manipulación. Y ante la crisis de la pandemia de la COVID-19, el Gobierno de Sánchez e Iglesias también prefirió negar la realidad y priorizar la propaganda. Copió el funesto modo de gobernar de los independentistas. El populismo divisivo imposibilita las reformas que nuestro país necesita y, lo que es peor, alienta la involución democrática. Ante la amenaza de enemigos invisibles (coronavirus) o imaginarios (fascismo), justifican el socavamiento de todos los pilares de la libertad, empezando por la separación de poderes. Y si alguien cree que la libertad es secundaria en un periodo de crisis como el actual, habrá que recordarle que sin ella tampoco habrá prosperidad, ni bienestar. Sin libertad, no quedará nada.

Capítulo 4

El alma de la libertad

La libertad corre peligro cuando la cultura política predominante define al discrepante como el enemigo, cuando se justifica la mentira y el engaño y se burlan las reglas del juego. Preguntémonos, como Rob Riemen: «¿Qué futuro les espera a la democracia y a la libertad política cuando la gente se olvida de la esencia de la libertad, ya no reflexiona y, en lugar de obedecer a la razón, se deja guiar por la superstición, las emociones, la angustia, los deseos y la esclavitud?». Más allá de las constituciones y las leyes, la libertad necesita también una ecología moral que la sustente. Necesita un gran acuerdo social no escrito: un respeto por la verdad y por el adversario. En este sentido, la cultura política en España ha sufrido un nefasto giro en los últimos años, un gran paso atrás. La mentira y el conflicto regresan con fuerza de la mano de dos formaciones políticas que, durante algunos lustros, habían mostrado la moderación propia de los partidos *proestablishment*: Convergència i Unió y el PSOE. Incluso antes de competir respectivamente con ERC y Podemos, en estos partidos ya se había introducido el germen ideológico que provocaría su deriva populista e identitaria. La ingeniería social de José Luis Rodríguez Zapatero no se alejaba tanto del plan de Jordi Pujol, aunque este último lo hubiera desarrollado con más precisión y brillantez. Así pues, una de las grandes paradojas de los procesos catalán y español es que los principales arietes contra el espíritu de la Transición sean dos partidos que habían protagonizado un papel fundamental en la construcción de la España mo-derna.

El pujolismo impulsó una cultura política divisiva en la que encontramos catalanes de primera —los nacionalistas— y catalanes de segunda —el resto—. Según el Programa 2000 eran los primeros, los comprometidos con la causa, los que debían tener más facilidades para ascender tanto en la Administración pública como en una sociedad civil intervenida. Este caciquismo identitario fue el cimiento del *procés* independentista y de una hegemonía cultural y mediática que mantiene en el engaño perpetuo a una parte no despreciable de la sociedad. Y parecida hoja de ruta trata de imponer la izquierda española. Desde Zapatero, y sobre todo con Sánchez, el PSOE rehúye el debate sincero sobre la realidad a la que nos enfrentamos y las políticas públicas, y estigmatiza a la «derecha» simplemente por ser la derecha, no por lo que ésta hace o dice. Identitarismo puro. La reforma laboral era criticada por ser aprobada por el Partido Popular, pero una vez que el PSOE y Podemos han entrado en el Gobierno no la derogan, a pesar de haber pactado y firmado con Bildu que lo harían. Igual sucede con la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como la ley mordaza. PSOE y Podemos prometieron acabar con ella, pero son el Ejecutivo que más la ha aplicado. Más evidente es esa obsesión de la izquierda con el quién, y no con el qué, cuando se trata de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

A Ayuso se la ha masacrado, con más inquina que rigor, por cada una de sus propuestas contra la pandemia y el desempleo. Cuando se demostraban acertadas, se copiaban o se ignoraban, pero nunca se le reconocía el mérito. Fue el Gobierno de Ayuso el primero en cerrar colegios, en salir a comprar material sanitario, en solicitar test en los aeropuertos, en ofrecer mascarillas gratuitas, en practicar cierres perimetrales por zonas básicas de salud (ZBS)... Todo les parecía mal. Los partidos y los sindicatos de la izquierda criticaron también la habilitación de Ifema como hospital de campaña y tacharon de «propagandístico» e «innecesario» al Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal. A esta izquierda identitaria le molestó que se construyera un hospital público en una situación de la más absoluta emergencia. Y llegó a criticar amargamente que durante los primeros días no hubiera máquina de café. Recuerda: el síndrome de san Jorge. Se exagera la crítica por causas cada vez más pequeñas.

El Gobierno de Sánchez prefirió denigrar a la Comunidad de Madrid antes que colaborar con ella. De hecho, los criterios con los que el Ministerio de Sanidad gestionaba la crisis sanitaria no fueron, en ocasiones trascendentales, científicos, sino puramente partidistas y propagandísticos. El 31 de julio del año de la pandemia, un suplemento de *El País* le dedicaba un amplio reportaje a Iván Redondo, «el hombre del presidente», al que se le definía como un «experto en comunicación política, entre la publicidad y la propaganda, que gestiona el mensaje y la agenda del presidente». A «su dispositivo de apoyo inmediato» se le describía como «un equipo de campaña permanente», formado por «escritores de discursos, especialistas en imagen y destripadores de algoritmos». Pero por si las prioridades del enorme equipo de la Moncloa no estaban aún del todo claras, uno de sus miembros acabaría confirmándolo al periódico: Redondo cuenta con un calendario preciso para esta legislatura, «con asuntos como la guerra cultural y la reforma de la Constitución». La guerra cultural seguía y sigue siendo la prioridad en plena pandemia.

Seguiremos golpeados por olas de coronavirus y seguirán hablándonos de la amenaza fascista. Las batallitas identitarias llenarán tertulias y nos ofrecerán horas de distracción, pero son energías volcadas en la generación de conflictos y no en la cooperación. El coste de oportunidad es enorme. Es inteligencia derrochada o puesta al servicio de la involución social, económica y democrática. Es una ruptura del espíritu de la Transición que nos instala en una política de la discordia y que pone en riesgo los mejores logros de nuestra historia. En la lógica del procesismo español tampoco se le reconoce ningún mérito al adversario, ni ninguna legitimidad, ni tan siquiera un mínimo de dignidad; sólo cabe su destrucción política. Ni ante la peor crisis que hayamos sufrido tienden la mano a la oposición para alcanzar los acuerdos más necesarios. Ya ni descuelgan el teléfono. Los Sánchez, Iglesias o Redondo, igual que los Puigdemont, Torra o Junqueras, prefieren poner el acento en lo que nos diferencia. Narcisismo y confrontación. No tratan de resolver problemas, sino de generarlos para crear preocupaciones, y con éstas un cambio cultural que les garantice el apoyo electoral independientemente de cuál sea su gestión. En sus tomas de decisiones, los criterios sanitarios y

económicos quedan relegados a la ideología y al interés particular. No obstante, tratar de gestionar las sociedades bajo esas premisas tiene y tendrá un precio muy elevado.

Despreciar la experiencia no sale gratis. Manipular el pasado para legitimar decisiones del presente, tampoco. El relato de España que, desde Zapatero, impulsa cierto socialismo se asemeja cada vez más al de la leyenda negra. Detrás de la actitud adanista y soberbia de Sánchez y compañía está el rechazo o la ignorancia del mejor legado de nuestros predecesores. Reabren heridas que sus padres políticos habían cicatrizado y desdeñan cualquier idea de reconciliación. Para esta nueva izquierda, la categoría de interlocutor queda circunscrita a aquellos con quienes comparten el desprecio por la España heredada; es decir, a los nacionalismos y los separatismos. Todos ellos prometen un paraíso terrenal rompiendo con el pasado y despreciando el presente, pero no es la primera vez que una clase política se deja atrapar por esta mezcla de optimismo inconsciente y odio visceral. Siempre acaba mal. La lección de nuestra historia, de cualquier historia, es que estas actitudes no nos conducen a un futuro mejor, sino a la repetición de los peores errores, a la frustración y al rencor, al resentimiento y a la fractura entre los españoles.

De alguna manera, hoy el PSOE de Sánchez regresa a una relación semileal con la democracia española, rompiendo con lo que significó el felipismo. A finales de los años setenta, los socialistas españoles eran asesorados por el SPD alemán de Willy Brandt. Esta influencia, y la voluntad de ensanchar una base social infinitamente más moderada que en los años treinta, llevó a Felipe González a abandonar la retórica de la revolución y la ideología marxista para abrazar la modernización y la socialdemocracia. Poco a poco, los socialistas españoles empezaban a parecerse a sus homónimos europeos. Ahora, sin embargo, desdeñan la primera lección de una Transición en la que sus padres políticos tuvieron un papel relevante. Ésta nos demostró que el pasado debe ser fuente de experiencia y sabiduría, y no una justificación para legitimar aberraciones presentes. La gene-ración política que construyó la España constitucional no hizo tabla rasa ni formuló un pacto para el olvido, como malintencionadamente algunos denuncian. Al contrario, durante el proceso de elaboración de la

Constitución se tuvo muy presente el pasado, con sus errores y sus aciertos. Se evitó tropezar con la misma piedra. Se evitó repetir las causas de pretéritos conflictos. En todo caso, la Transición fue un pacto de perdón y concordia, valores muy diferentes al olvido.

La inteligencia de los protagonistas de la Transición fue combinar el reformismo intenso con la inclusión de todas las ideologías. Como los padres de la Unión Europea, aquellos hombres supieron maridar pragmatismo y visión de futuro. Por un lado, se prescindió de aquellos métodos revo-lucionarios que permanentemente fracasan a la hora de construir y consolidar una democracia. Y, por otro, también abandonaron cualquier tentación de imposición, aquel «trágala» que motivó el fracaso de los intentos constitucionales precedentes. Se evitó, en definitiva, un sistema de perpetuación en el poder que hiciera traumática cualquier alternancia. En *El camino a la democracia en España*, Manuel Álvarez Tardío explica los principios fundamentales que hicieron que el régimen fundado en 1978 fuera un éxito, a diferencia de la República de 1931; a saber, «que todos debían participar en la fundación democrática; que el principio democrático no impedía que existiera un sistema de contrapesos que evitara la concentración del poder; y que el objetivo prioritario debía ser un marco de competencia política que no cerrara las puertas a ningún programa político con la salvedad fundamental del respeto a los derechos y las libertades fundamentales».

En la Transición española predominaron unos principios de liberalismo político que eran prácticamente anecdóticos en el periodo republicano y que, hoy en día, empiezan, lamentablemente, a desvanecerse en España y en gran parte de los países occidentales. Ciertamente, el contexto internacional de la segunda mitad de los setenta poco tenía que ver con el de los convulsos años treinta. Las modas ideológicas eran bien diferentes. La influencia de las potencias europeas tampoco era la misma. La época de entreguerras no fue en especial favorable a la tolerancia y a la contención, dos virtudes clave para sustentar las democracias modernas; mientras que tras la muerte en la cama del dictador Franco, nuestro entorno ya era el de una Europa democrática y liberal, en la que el fascismo y el comunismo no eran valorados como alternativas decentes. Con todo, el paso hacia la

democracia no fue un camino de rosas: los extremismos golpeaban con virulencia, lo que hace aún más admirable que aquellos líderes políticos mantuvieran la retórica del respeto y la voluntad de cesión imprescindibles para el gran pacto.

La retórica política es fundamental para la consolidación de una democracia. Como hemos comentado más arriba, puede unir una sociedad en torno a un objetivo común o dividirla en facciones irreconciliables. En la Transición se tuvo muy presente el pasado —la República, la guerra civil y la dictadura franquista—, pero no se aprovechó como fundamento para un discurso frentista. Se apeló a la altura de miras. Como señala el historiador Stanley G. Payne en su libro *En defensa de España*: «González nunca llamó a Suárez "fascista" o "falangista", y éste no tildaba al líder socialista de "rojo"». Así fue durante años hasta que el PSOE, en 1993, vio peligrar su hegemonía y propagó que un Gobierno del PP sería una vuelta al franquismo. En la campaña de 1996 redoblarían la estrategia polarizadora con aquel anuncio electoral en el que aparecía un dóberman y se presentaba una hipotética victoria de centroderecha como una vuelta a la España del blanco y negro. Esta retórica de la hipérbole alcanzaría su cenit más tarde en las campañas catalanas del PSC, el partido que firmó el Pacto del Tinell y estableció con los independentistas un cordón sanitario a un partido constitucionalista como el PP, que entonces estaba liderado en Cataluña por el moderado Josep Piqué.

La victoria de José Luis Rodríguez Zapatero aceleraría el desgaste de la cultura de la Transición. Ahí localizamos el inicio de la fractura actual. Presumía de talante, pero su estrategia era la de la tensión con el ánimo de movilizar a una mayoría socialista. Zapatero empezó a quebrar gravemente los consensos de la Transición. Presumía de memoria histórica, pero aplicó la desmemoria para que los españoles olvidaran que la democracia había nacido con un pacto constitucional que suponía el perdón, la superación de un pasado trágico y la voluntad de mirar al futuro con generosidad; es decir, con concordia. Ésta nunca fue fácil. La Constitución nos ha dado las mejores páginas de nuestra historia, una democracia moderna, una sociedad de oportunidades y de bienestar, aunque la violencia tardó en desaparecer. ETA siguió asesinando hasta que fue derrotada por el

Estado de derecho, demostrando que la justicia, y no la venganza, es la mejor defensa de la democracia. Esta Constitución ha sobrevivido también a dos intentonas golpistas, una tradicional en el Congreso de los Diputados en 1981 y otra adjetivada como posmoderna en el Parlamento de Cataluña en 2017. La concordia nunca fue fácil, pero fue el espíritu constitucional el que la hizo posible.

El PSOE de Sánchez, sin embargo, sigue con la desmemoria de Zapatero. Borra lo que significó la Transición, pero también blanquea los crímenes y los delitos del terrorismo y del golpismo. Parece haber olvidado definitivamente las lecciones del pasado al otorgar la llave de la gobernabilidad a los protagonistas del último golpe, cuyos partidos siguen liderados por un ya culpable de sedición y por un fugado enloquecido. Si la equidistancia entre la Constitución y el separatismo ya es inmoral, la asimetría en el trato de Pedro Sánchez hacia golpistas y constitucionalistas supera los límites democráticos. A unos los agasaja con negociaciones al margen de las instituciones y a los otros no les descuelga el teléfono. Poner a Sánchez en la Moncloa fue la victoria más importante —quizá la única— de los protagonistas del *procés*. No consiguieron separar Cataluña del resto de España, pero han situado en el Gobierno de la nación a un agente de la fragmentación y el conflicto.

Ni en las horas más graves de la pandemia ni en el foro más inoportuno, la izquierda gubernamental ha dejado de azuzar la división. En el Congreso de los Diputados, en una sesión de la denominada Comisión para la Reconstrucción, el entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias aprovechó su comparecencia para lanzar la acusación contra Vox de querer un golpe de Estado. «Creo que a ustedes les gustaría dar un golpe de Estado, pero no se atreven.» Era mayo de 2020 y España se enfrentaba a un aterrador panorama de contagios y desempleos. Necesitábamos otro tipo de políticos. Ausente en la gestión y en el escenario menos adecuado, allí donde se debían forjar acuerdos, Iglesias incendiaba el ambiente político con falsas acusaciones contra la oposición. La peor acusación en el peor momento. «Váyanse y cierren la puerta al salir», espetó al portavoz de Vox que abandonaba indignado la comisión ante la pasividad de su presidente, el diputado socialista Patxi López. El

narcisista Iglesias se regodea en la provocación, aunque sea improductiva o, incluso, contraproducente. Su legado político será la bronca gratuita y la coherencia perdida. Esta política de la mentira y del odio muestra una preocupante falta de nobleza de espíritu. Y es que Iglesias muestra como nadie ese individualismo que ha degenerado en egolatría, totalmente desvinculado de cualquier noción de responsabilidad.

El daño es profundo. La mentira de los líderes y la propaganda de los partidos tienen impacto en la cultura política de una sociedad. Es el efecto secundario de las palabras. La fractura de una sociedad puede deberse a motivos objetivos, pero también puede ser inducida por la irresponsabilidad de aquellos que supeditan la distinción entre el bien y el mal al posicionamiento partidista. Si grandes intelectuales han caído en ese error a lo largo de la historia, cómo no iban a sucumbir mediocres políticos en la época de las redes sociales. La ambición por el poder sacrifica la integridad, también la integridad intelectual. Los charlatanes han contaminado las palabras. Éstas pierden sentido en su boca. Dice Riemen que «el lenguaje no tolera mentira alguna. Si se miente, las palabras se vuelven mudas y pierden su alma». Pervierten las palabras. El conocimiento se desparrama entre eslóganes y prejuicios. Las emociones asfixian la razón y tergiversan la percepción de la realidad. Bombardeadas por determinada propaganda, incluso aquellas personas de entornos seguros y economías acomodadas pueden sentir una profunda ansiedad por motivaciones políticas. Por ejemplo, no pocas personas mayores de los barrios altos de Barcelona caminan con tristeza, encogidas como ovillos con su lazo amarillo, creyendo sufrir el peso de un Estado opresor sobre sus espaldas. Demasiada TV3. El *procés* las ilusionó. Iban a ganar con facilidad una guerra que nunca habían librado. Y ahora les amargan la vida. Se irritan con facilidad ante quienes creen inadaptados por no abrazar la plena catalanidad. Esquerra Republicana y las diferentes escisiones de la antigua CiU crearon ese agujero negro emocional del que ahora son prisioneras. Generaron una cultura en la que sólo es legítimo pactar con independentistas. Su apelación al diálogo era vacua. Pervirtieron la palabra. Y ahora Esquerra, a pesar de la voluntad de sus líderes, no puede salir del chantaje al que le someten los de Puigdemont porque

cualquier acercamiento a los «colonos» sería una traición. Ellos mismos jugaron a esa hipocresía en el pasado. Fueron las 155 monedas de Gabriel Rufián.

Y no se vislumbra una salida a corto plazo. Continuarán atrapados en esa (in)cultura política durante años y años. De hecho, ante la imposibilidad de cumplir sus promesas, la nueva élite procesista se reconcentra en un agrio resentimiento. Al nacionalismo ya no le queda ningún atisbo de civismo. La diputada de Junts per Catalunya Aurora Madaula asegura sentir «vergüenza y rabia» al escuchar unas palabras en castellano en el Parlament. Tras esta supremacista afirmación, ha sido ascendida a secretaria de la Mesa del Parlamento catalán, cuya presidenta, Laura Borràs, también tiene un amplio historial de comentarios que la desacreditarían en cualquier rincón de Europa. El nacionalismo etnolingüístico puede ser minoritario en Cataluña, pero marca el paso de la actual política. Una vez destruida la cultura del respeto es muy difícil volver a reconstruirla.

También en el proceso español hallamos una reconcentración del odio en los discursos. El mismo Iglesias sube un tono que ya estaba excesivamente elevado. Él había abandonado Vallecas para instalarse en un fabuloso chalet en Galapagar, una espléndida dacha. Se acoge a todos los privilegios que antes denunciaba. Para Iglesias, la distancia entre el dicho y el hecho es un trecho sideral. Y pretende camuflar su falta de ejemplaridad y el escaso valor de su palabra con una sobreactuación y una retórica incendiaria. Tras poco más de un año en el Gobierno, en el que ha visto más series de televisión que reformas ha impulsado, abandona la vicepresidencia para presentarse a las elecciones de la Asamblea de Madrid, y lo hace con un discurso propio de otra época. Llama a «hacer frente a la derecha criminal». La retórica de la hipérbole alcanza sus más altas cotas: «Hay que impedir que estos delincuentes, que estos criminales que reivindican la dictadura, que hacen apología del terrorismo de Estado, que promueven la violencia contra los migrantes, contra los homosexuales y contra las feministas, o que cuando un grupo de militares habla de fusilar a 20 millones de rojos dicen que son su gente, puedan tener todo el poder en Madrid, con todo lo que eso implica para el resto del país». Iglesias entraría en

la precampaña madrileña sin contención moral y con incontinencia verbal. Amenaza al PP augurándole que «no van a volver al Consejo de Ministros», y a Ayuso y otros dirigentes populares que van a «terminar en la cárcel». Al Robespierre del casoplón sólo le falta sacar una guillotina a pasear. Sin embargo, el antifascismo de opereta de Iglesias tiene consecuencias en forma de pedradas a los militantes de Vox. La violencia de aquellos que asaltan sedes del PP o desinfectan las plazas por donde pasan los dirigentes de Ciudadanos en Cataluña se reproduce ahora en Madrid. Las palabras criminales reclaman acciones criminales. La ideología se transforma en falsa religión, beligerante y excluyente, e identifica a herejes e infieles.

Esta degeneración de la cultura política es una amenaza para la convivencia y la libertad, sobre todo en un momento en el que la política está presente de manera continua en nuestra vida cotidiana y afecta a nuestras convicciones más profundas. Señala el politólogo Víctor Lapuente que

> la sacralización de la política late en el fondo de la creciente polarización de la esfera pública. Hemos abandonado la religión que nos une, la de Dios o la patria, una religión que se queda en la esfera de lo moral, que guía nuestro comportamiento personal, pero que no desciende al barro de la lucha política, y nos hemos vuelto creyentes ciegos en la religión que divide: la religión partidista. Las nuevas religiones políticas amenazan las libertades fundamentales de nuestras sociedades, porque exigen un compromiso absoluto de sus seguidores para salvar al mundo.

Cada vez más impermeables a los argumentos del otro. Desaparece la humildad. No se escucha. Algunos son narcisistas. Otros están henchidos de odio y sólo ansían acabar con el enemigo. Y otros se dejan arrastrar por el signo de los tiempos. Lamenta Lapuente que «para sobrevivir en un ambiente tan caldeado, hoy un político no necesita demostrar eficiencia en la gestión, sino pureza ideológica». De este modo, sucumbe el espíritu de la Transición. Se imposibilitan los acuerdos necesarios para el bien común. Es la política del bloqueo. La vetocracia, la llama Fukuyama. Es más fácil destruir que construir. No hay reformas, no hay política. Sólo espectáculo lamentable. La parálisis legislativa se combina con la inestabilidad gubernamental. En Cataluña

se suceden las legislaturas cortas. En el resto de España se entra en dinámicas parecidas: elecciones que se repiten, elecciones que se adelantan, mociones de censura y campaña permanente. La mirada a largo plazo parece imposible. Crece la nostalgia por el bipartidismo. Sin embargo, el mundo no espera y la parálisis política supone la degeneración institucional.

Ni el *procés* catalán, ni el proceso español alcanzarán los objetivos prometidos por sus impulsores. Su empeño sólo conseguirá carcomer las instituciones democráticas, mientras reciben, eso sí, el aplauso acrítico de aquellos que han caído en el engaño populista e identitario; es decir, de aquellos que supeditan cualquier idea de bien común a la satisfacción de sus egos. Al fin y al cabo, tanto el independentista como el sanchista son dos procesos de una decadencia más amarga que dulce. Ambos son un riesgo para la convivencia y la prosperidad, porque a pesar de disfrazarse con ropajes democráticos, son enemigos del pluralismo de valores y acarrean una cultura política contraria a la libertad y la responsabilidad.

La peligrosidad de este ataque a los cimientos de la democracia liberal no es evidente, al menos para la mayoría de la población, lo que dificulta la fuerza de su denuncia. La Generalitat independentista venía corroyendo estos cimien-tos mucho antes de los espectaculares hechos de 2017, y sigue haciéndolo ahora, pero no pocos siguen creyendo que todo es mera propaganda, inocua palabrería. De la misma manera, la izquierda identitaria no necesita establecer un régimen de partido único para cercenar las libertades, le es suficiente con influir, penetrar o apropiarse de todas aquellas instituciones que, en determinado momento, pudieran controlar o limitar su poder ejecutivo, desde los medios de comunicación hasta los órganos judiciales. No obstante, sólo hay que observar quién apoya internacionalmente ambos procesos para darse cuenta de su baja calidad democrática. Puigdemont y compañía sólo han obtenido la complicidad de partidos euroescépticos, de extrema izquierda o de extrema derecha. En el caso de la izquierda española, los vínculos con el régimen venezolano no se limitan sólo a Podemos, sino que también implican al expresidente Zapatero y a actuales ministros del PSOE, como Ábalos. La influencia iraní en el ascenso mediático de Pablo

Iglesias tampoco es tranquilizadora. Todas estas malas influencias tienen un objetivo: desgastar y desestabilizar una democracia europea como la española.

El contexto internacional de desconsolidación de la democracia liberal debería alertarnos, ya que en España convergen todos aquellos elementos que están debilitando a las sociedades occidentales. No estamos solos en este declive, pero el hecho de liderar la mayoría de los rankings negativos derivados de esta pandemia señala que algo funciona aquí peor que en los países de nuestro entorno. Además, señalar que la situación social o económica también empeora en el resto de Europa no debería ser ningún consuelo, sino, tal vez, un acicate para buscar respuestas en aquellos estudios y autores que han logrado identificar posibles causas comunes a esta decadencia. Éste sería el caso de Niall Ferguson, quien en *La gran degeneración* analizó algunas de las claves explicativas del declive social y económico. Según el historiador británico, las instituciones que fundamentaron la hegemonía de Occidente fueron el gobierno representativo, el libre mercado, el imperio de la ley y la sociedad civil. Y todas ellas se han deteriorado en los últimos tiempos.

Apunta Ferguson que

> en algunos conjuntos de instituciones las personas pueden florecer libremente como individuos, como familias, como comunidades. Ello se debe a que, de hecho, dichas instituciones nos incentivan a hacer cosas buenas, como, por ejemplo, inventar nuevas y más eficientes formas de trabajar, o cooperar con nuestros vecinos en lugar de intentar matarlos. A la inversa, hay marcos institucionales que tienen el efecto contrario: incentivar la mala conducta, como matar a la gente que nos molesta, o robar las propiedades que codiciamos, o dedicarnos a perder el tiempo.

No es baladí, pues, preguntarnos qué tipo de incentivos están generando los cambios institucionales introducidos por los procesos catalán y español. ¿Fomenta la Generalitat la cooperación entre los propios catalanes? ¿Atrae más empresas e inversiones? ¿Incentiva el Gobierno de Sánchez la confianza entre los españoles? ¿Tejen redes clientelares o apuestan por la meritocracia? ¿Estimulan la cultura del esfuerzo o el vivir de la subvención? Más bien parece que tanto el nacionalismo catalán como la izquierda pandémica están premiando

malas conductas que agravarán la pobreza y el conflicto en los próximos años. Los procesos catalán y español suponen, por tanto, el socavamiento acelerado de esos pilares de la libertad y la prosperidad. Es una decadencia financiada desde el poder político. En Cataluña, el independentismo agravó los efectos de la crisis financiera de 2008, logrando que esta comunidad dejara de ser el motor económico de España y fuera ya superada claramente por Madrid. También el sanchismo, con su irresponsable sectarismo, está hundiendo aún más nuestro país durante la actual crisis múltiple. Ambos son impulsores de unas malas políticas que tienen graves consecuencias institucionales y, por consiguiente, también sociales y económicas.

La primera de las instituciones que Ferguson identifica como pilar de la libertad y la prosperidad es el gobierno representativo. En otros capítulos ya hemos analizado cómo el populismo defiende un concepto de *democracia* diferente al de las sociedades modernas y liberales. Su apuesta es la de un líder carismático que interpreta directamente la voluntad del pueblo y que, en todo caso, usa mecanismos referendarios para legitimarse. Pero no sólo la deriva autoritaria supone un riesgo para el gobierno representativo, también lo es la mala política económica. El estudio de Ferguson se centra en el mundo anglosajón, pero la mayoría de sus conclusiones son igualmente válidas para unas cuentas públicas catalanas o españolas aún menos saneadas. Según el británico, uno de los grandes peligros de las democracias occidentales es la tendencia a que los votantes del presente vivan a costa de los votantes del futuro. Durante los años posteriores a la crisis de 2008 fue tendencia el debate entre los que defendían un mayor gasto público y quienes apoyaban la austeridad. ¡Austericidio!, clamaban aquellos que no caían en la cuenta de que dicha palabra significa lo contrario de lo que creían; es decir, el asesinato de la austeridad.

La política irresponsable supone endeudamiento, y éste, la ruptura del pacto intergeneracional, de esa asociación entre generaciones que el padre del liberal-conservadurismo, Edmund Burke, definió como el auténtico contrato social. Más de dos siglos después, Ferguson recupera al gran pensador para advertirnos que «el mayor desafío que afrontan las democracias maduras es el de cómo restaurar el contrato social entre generaciones». La deuda es una traición a los

más jóvenes. Y es un problema que a éstos «les resulte bastante difícil calcular sus propios intereses económicos a largo plazo», ya que con facilidad tomarán decisiones políticas contrarias a la sostenibilidad de aquellos servicios públicos que podrían disfrutar en el futuro. Quizá la responsabilidad en la política de gasto no sea un gran atractivo electoral, pero deberíamos tenerla siempre presente para no acabar perdiendo la soberanía como le sucedió a la Grecia intervenida por la troika.

Cataluña es hoy la comunidad autónoma más endeudada de España, con una deuda pública que alcanza más de 80.000 millones de euros, un equivalente al 35,9 por ciento de su PIB y el 26,2 por ciento del total del sistema autonómico. En Cataluña, la deuda «autonómica» per cápita es el doble que en Madrid. Cada día los catalanes somos más dependientes del Estado gracias a la mala gestión y al despilfarro de los sucesivos Gobiernos de la Generalitat. El descon-trol se inició con aquellos Gobiernos tripartitos de izquierdas, que dejaron compromisos de deuda hasta el siglo XXII —sí, has leído bien, hasta el siglo XXII—, los nietos de nuestros nietos aún estarán pagando la fiesta de unos Gobiernos tan insolidarios e insostenibles como los del PSC, ERC e IC-V. Los tripartitos compartían la sentencia (de muerte económica) de la socialista Carmen Calvo: «El dinero público no es de nadie». Compartían una cultura cortoplacista y electoralista. El socialismo olvidó u ocultó que llegaría el momento en que se debería devolver el dinero prestado. En *Todo lo que era sólido*, el escritor Antonio Muñoz Molina —poco sospechoso de veleidades neoliberales— recuerda una visita al palacio de la Moncloa a finales de 2004. Varios directores de centros del Instituto Cervantes fueron recibidos por Zapatero, y uno de ellos, César Antonio Molina, le pidió un aumento del presupuesto destinado a la institución cultural. La respuesta del entonces presidente sorprendió, por su frivolidad, al escritor: «Hay dinero. Hay mucho dinero este año. Y el año que viene habrá mucho más». Es la insoportable levedad del pensamiento de Zapatero. Todo se soluciona con más gasto, nos prometen. Fueron aquellos días de vino y rosas, pero como relata lapidariamente el escritor: «Había mucho dinero y de repente ya no lo hubo». La crisis estalló y la respuesta de Zapatero fue la misma que había practicado hasta entonces: el derroche. Los

multimillonarios planes E no crearon ningún puesto de trabajo fijo. A finales de 2008 empezaron a aprobarse estos proyectos de construcción de infraestructuras: muchas quedaron a medio hacer, otras no tenían ningún sentido y algunas tenían un coste publicitario superior al de la propia obra. Fueron populares las bromas sobre aquellos enormes y caros carteles que anunciaban unas obras nimias. Los proyectos carecían de valor añadido, las pérdidas fueron milmillonarias y el Tribunal de Cuentas acabaría detectando numerosas irregularidades. El Banco de España concluiría, años más tarde, que por cada nuevo empleo que había generado el Plan E (o Zapatero) se habían invertido más de 160.000 euros. Y fueron, en todo caso, empleos temporales y mayoritariamente masculinos, mostrando una intolerable falta de perspectiva de género en sus políticas. Un fracaso absoluto para un plan que tenía precisamente como principal objetivo la creación de empleo. Fue dinero dilapidado que sumió a nuestro país en una crisis de deuda y sin margen de maniobra. La enorme irresponsabilidad de Zapatero se traduciría en 2010 en los recortes sociales, en la rebaja del sueldo de los trabajadores públicos y en la subida de impuestos como el IVA.

Años más tarde, la pandemia golpearía; y los países con los deberes presupuestarios hechos tendrían recursos para ayudar a los sectores económicos más afectados por la crisis. Es el caso de Alemania, no el nuestro. Miedo da pensar cómo el turbozapaterista Sánchez va a gastar los fondos de recuperación europeos. Alguna pista ya tenemos. Antes de la llegada del maná comunitario, el Gobierno español ha dilapidado 53 millones de euros públicos en el rescate de una sospechosa aerolínea de avión único. Las irregularidades del caso Plus Ultra, una suerte de segunda temporada del *Delcygate*, no transmiten una buena señal a Bruselas y a los socios europeos. Populismo de amiguetes y más paralelismo con el *procés*: hace diez años la Generalitat salió al rescate de la aerolínea Spanair. Poco después, ésta quebraba.

Repetir el error de Zapatero significaría que algo profundo falla en nuestro sistema institucional. El éxito económico de un país está íntimamente ligado a la configuración de sus instituciones políticas mucho más que a cuestiones como la geografía. Para el economista

Douglass North: «Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente, son las limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente, estructuran incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico». Tanto el nacionalismo catalán como el socialismo español han lastrado el futuro de las próximas generaciones, porque los incentivos institucionales creados no se han dirigido precisamente a fomentar el esfuerzo y el mérito. Al contrario, el derroche y el clientelismo están siendo fuertes incentivos a la mediocridad y, por tanto, benefician sólo a ciertas élites, mientras limitan la prosperidad de la mayoría.

Cabe preguntarnos, una vez más, si las instituciones españolas favorecen el ahorro, la inversión y la innovación o, por el contrario, están incentivando conductas económicamente menos productivas. En los últimos años, una cultura de mayor intervencionismo se ha introducido en Cataluña como caballo de Troya del *procés*. CiU era un partido de centroderecha que, en general, defendía los postulados del liberalismo económico. Sin embargo, la deriva populista ha llevado a sus sucesores a hermanarse ideológicamente con la izquierda antisistema de la CUP. El propio Ayuntamiento de Barcelona sigue en manos del populismo menos meritocrático de Ada Colau y unos comunes que, con la pandemia, han visto cumplir sus sueños (pesadillas para el resto de los mortales): la desaparición del turismo de la capital catalana y el declive de la industria del automóvil. La segunda teniente de alcalde, Janet Sanz, pidió aprovechar la crisis del coronavirus para «evitar que se vuelva a reactivar» el sector automovilístico. La petición de esta izquierda tan poco obrera se hizo realidad, y al poco tiempo Nissan anunciaba el cierre definitivo de su fábrica en Barcelona. Alrededor de 3.000 trabajadores perderían su empleo y otros 25.000 también podrían correr el riesgo de engrosar las listas del paro. Es un claro ejemplo de la contradicción entre los sentimientos de la izquierda posmoderna y los intereses de la clase trabajadora.

Es evidente que la segunda de las instituciones que Ferguson identificaba como fundamentales para la prosperidad también está siendo atacada por los populismos de todos los colores. Hablamos del

libre mercado. Burocracia y clientelismo pueden ser recetas útiles para mantenerse en el poder, pero son, sin duda, impedimentos para el fortalecimiento de una sociedad de oportunidades. La comparación entre los Gobiernos independentistas de Cataluña y los Gobiernos liberales de la Comunidad de Madrid pone de relieve la importancia del voto. El PIB catalán cerró el cuarto trimestre de 2020 cayendo un 0,5 por ciento, cuando en el mismo periodo el PIB de la Comunidad de Madrid crecía un 4,4 por ciento. La fuga de empresas iniciada en el otoño de 2017 continúa. En 2020, un total de 1.164 empresas se fueron de Cataluña, la mayoría de ellas, cómo no, a Madrid. Las inversiones extranjeras en Cataluña cayeron por segundo año consecutivo, un 22,7 por ciento en 2020, mientras que en ese mismo año en Madrid aumentaban un 23,6 por ciento. Las empresas se van y las inversiones dejan de venir. Ambos fenómenos tienen un impacto social, porque menos trabajo es más pobreza. En el último año, el paro se ha disparado un 31,56 por ciento en Cataluña, un aumento muy superior a la media española, 16,54 por ciento. A finales de 2020 eran 537.900 los catalanes que querían trabajar y no podían. Y nada de ello es una maldición: la catarata de malos datos económicos es la consecuencia de la persistencia en malas decisiones. Es la deuda. Son los impuestos. Respecto a Madrid, en Cataluña el tipo impositivo del IRPF es más alto en todos los tramos y existen muchas menos deducciones y bonificaciones. Mientras la Comunidad de Madrid solamente aplica tres impuestos propios —el impuesto sobre la instalación de máquinas en establecimientos de hostelería autorizados, el impuesto sobre depósito de residuos y un recargo sobre el impuesto de actividades económicas—, la Generalitat alcanza la cumbre de la creatividad impositiva. Cataluña posee diecinueve impuestos propios de los que se aplican quince.

La pandemia no ha modificado la querencia nacionalista por saquear el bolsillo de los catalanes. Al contrario, en la primera ola subieron los impuestos a las familias que iban a perder a un ser querido. En un momento como aquel, esta subida del impuesto de sucesiones raya la inmoralidad. El Parlamento catalán aprobó unos presupuestos de la Generalitat para 2020 con la creación de nuevos impuestos, la subida del IRPF o de la tasa turística en plena caída

económica. Eso sí, no había crisis para el aparato de propaganda. En el año de la pandemia, TV3 y Catalunya Ràdio iban a gestionar 297,6 millones de euros, de los que 239 millones proceden de una transferencia directa de la Generalitat. Se iban a repartir 7,7 millones para subvenciones a medios en catalán o aranés y 59,8 millones para publicidad institucional. Tampoco había crisis para la propaganda en el exterior, destinando 49,7 millones para «acción exterior» y «cooperación al desarrollo». En la segunda ola las prioridades no cambiaron, y decidieron masacrar a diferentes sectores económicos sin apenas compensación y nada de diálogo, mientras abrían una NASA catalana de 18 millones de euros y más falsas embajadas en Australia, Japón y Senegal. En definitiva, la comparación con Madrid es dolorosa para aquellos que vivimos en Cataluña y queremos que nuestra comunidad vuelva a ser una sociedad abierta y una tierra de oportunidades.

Son más impuestos y también son malas leyes. Lo peor es que el nacionalismo catalán busca premeditadamente la inseguridad jurídica y regula buscando el conflicto, no la solución. Es una estrategia, que reconocen en privado, para alentar el victimismo. Aprueban leyes de cara a la galería, de manera propagandística para aparentar buenas intenciones, mientras introducen claros elementos de inconstitucionalidad para que, una vez que sean recurridas al Tribunal Constitucional, puedan rasgarse las vestiduras, proclamar que están oprimidos y tener una excusa (imperfecta) para no atender a los más vulnerables. En materias socialmente sensibles, como la pobreza energética o la política de vivienda, han preferido crear inseguridad jurídica y atacar a empresas y propietarios antes que desarrollar las competencias que sí tiene la Generalitat. De hecho, es un *modus operandi* que ya usaron con el actual Estatuto de Autonomía: crear un conflicto competencial, presentarse como víctima y olvidarse de la gestión. También lo escribe Ferguson: «El imperio de la ley tiene muchos enemigos. Uno de ellos son las malas leyes». La baja calidad legislativa o el exceso regulatorio conducen a la confusión y a la arbitrariedad. Un visionario Frédéric Bastiat ya nos advirtió en el siglo XIX que la «ley se ha pervertido por la influencia de dos causas muy diferentes: el egoísmo no inteligente y la falsa filantropía». Los dos

procesos están repletos de falsos filántropos. «Son demasiados los que se colocan sobre la humanidad para sujetarla, y los que no tienen más profesión que ocuparse de ella», diría el francés. Falsos defensores del *fet diferencial* imponen trabas burocráticas y pésimas regulaciones.

Por otra parte, la cultura política contraria al Estado de derecho es una de las causas más evidentes de la decadencia de Cataluña. El independentismo ha impulsado un discurso que disocia la democracia del imperio de la ley. Sin embargo, como señala Ralf Dahrendorf, la democracia necesita, al menos, dos condiciones fundamentales: el imperio de la ley y la sociedad civil. También la libertad. «Todos somos esclavos de las leyes para poder ser libres» es la célebre cita de Marco Tulio Cicerón. La democracia es la regla de la mayoría, pero también la protección de la libertad de las minorías. Ésa es una de las razones esenciales de las constituciones: protección de los individuos frente al poder. Así pues, para cualquier genuino amante de la libertad y la democracia suena a auténtica aberración la contraposición que el nacionalismo realiza entre «legitimidad democrática» y legalidad. Más grave todavía es cuando se trata de sustituir la democracia representativa por el clamor (el *clam*) de la calle. Pretenden poner la pancarta por encima de la ley y la consigna por encima del voto.

En algunos momentos del *procés* parecía que el Parlament se supeditaba a la asociación independentista ANC, igual que ahora parece que el Palau de la Generalitat esté al albur de los caprichos del inquilino de la mansión de Waterloo. El nacionalismo ha provocado tantas disfunciones en las instituciones públicas que es inevitable plantearse sus reformas, aunque no en los términos que suelen dominar el debate mediático y que se centran en el eterno dilema entre centralizar o descentralizar. Centralizar para evitar duplicidades competenciales y la deslealtad de algunas autonomías. Descentralizar para acercar el poder a la ciudadanía o para contentar a aquellos que desean mayor autogobierno. Suelen ser éstos los argumentos esgrimidos en este debate. Sin embargo, sería interesante plantear esta cuestión fundamental con una mirada más elevada y situar el debate en la necesidad de un Estado que funcione, que sea eficaz y eficiente, que otorgue correctamente las responsabilidades y rinda cuentas y que todas sus partes estén sometidas de manera implacable al imperio de la

ley.

No hay democracia sin ley. Y tampoco hay prosperidad sin un Estado de derecho que garantice la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad. En Cataluña los ataques a la justicia han sido continuos, pero ésta ha resistido. El desprecio del nacionalismo por la separación de poderes queda en evidencia cuando exigen al Poder Ejecutivo español que actúe al margen del Poder Judicial y libere a los culpables de la sedición; pero, sobre todo, las máscaras democráticas se cayeron con la Ley de Transitoriedad Jurídica que aprobaron en el Parlament en septiembre de 2017 y que pretendía esbozar el marco institucional de la incipiente República catalana. Se subvertía el principio de jerarquía normativa en tanto que una norma de un parlamento autonómico contradecía frontalmente normas de rango superior, tanto del ámbito español como europeo. Se dibujaba un nuevo Estado, más populista que democrático, en el que una mayoría parlamentaria no reforzada controlaba el nuevo Poder Judicial y la sindicatura electoral. Se transformaba el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en un nuevo Tribunal Supremo de Cataluña, con una Sala Superior de Garantías que haría las labores de nuevo Tribunal Constitucional. El Poder Judicial debería haber funcionado coordinándose con el Ejecutivo, siendo el presidente del Tribunal Supremo elegido directamente por el presidente de la Generalitat. Las intromisiones políticas en el nuevo Poder Judicial habrían sido múltiples de no haberse frenado aquella locura. La voluntad de los políticos independentistas era, claramente, poder actuar con toda impunidad. Era construir una república, sí, pero bananera.

Pues bien, esa disparatada Ley de Transitoriedad que se alejaba de cualquier estándar democrático europeo podría haber sido fuente de inspiración del intento de reforma del Consejo General del Poder Judicial que propusieron el PSOE y Podemos. A pesar de tantas proclamas regeneracionistas antes de acceder al poder, una vez en él la izquierda española presentó una iniciativa legislativa para politizar el CGPJ reduciendo la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a sus vocales. Pretendían pasar el rodillo y evitar la negociación con la oposición en una cuestión tan trascendente como el gobierno de los jueces. Evidentemente, estas intenciones despertaron las críticas del

Partido Popular y los recelos europeos. La Unión Europea no estaba dispuesta a tener un frente iliberal también en el oeste. El propio PSOE sabía qué implicaba dicha reforma; por esta razón la presentó a través del grupo parlamentario como proposición de ley y no como un proyecto de ley del Gobierno, ya que de esta última forma debería haber recabado los informes del Consejo de Estado, del Consejo Fiscal y del propio CGPJ, quedando a las claras el ataque a la independencia judicial que se pretendía perpetrar. En abril de 2021, más de 2.500 jueces españoles integrados en la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente se dirigieron a la Comisión Europea

> para poner de manifiesto el riesgo a que se ve sometido el Estado de derecho en España a causa de la deriva legislativa por reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en trámite. La primera reforma, ya en vigor, prevé un «apagón» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al dejarle sin funciones de designación de cargos judiciales en la situación actual y hasta que sean renovados sus componentes (vocales). La segunda reforma prevista implica una rebaja de las mayorías exigidas en las cámaras legislativas para la designación de los vocales judiciales, de manera que los partidos de Gobierno por sí solos puedan decidir la íntegra composición del CGPJ.

Finalmente, y tras una reunión entre el ministro de Justicia y la vicepresidenta de la Comisión Europea, Věra Jourová, el Gobierno español ha pedido a los grupos parlamentarios que retiren la iniciativa referida a esta última reforma. Sánchez, como Puigdemont, también ha buscado la impunidad total. A este último lo frenó el Estado; al presidente español, la Unión Europea.

A pesar de todo, el embate del procesismo español contra el Poder Judicial no se limita al intento de reforma del CGPJ. En la campaña electoral de noviembre de 2019, y siendo presidente en funciones, Sánchez prometió que traería a Puigdemont a España para ser juzgado. Lo lograría porque, según él, la Fiscalía General del Estado «depende» del Ejecutivo. En una entrevista radiofónica en RNE, Sánchez se preguntó: «¿La Fiscalía de quién depende? ¿De quién depende?». Tímidamente el periodista apuntó: «Del Gobierno». Y Sánchez remató: «Pues ya está». La imagen de injerencia del Gobierno

en el sistema judicial que transmitió el presidente español fue un balón de oxígeno para la campaña separatista contra la imagen de España. Semanas más tarde, Sánchez pasaría de las palabras a la acción y colocaría como fiscal general a la que hasta entonces había sido su ministra de Justicia, Dolores Delgado. En el Gobierno, Delgado ya había demostrado su falta de respeto a una institución como la Abogacía del Estado, al presionarla para cambiar la calificación jurídica en el juicio del *procés* y pasar de rebelión a sedición. Para consumar la acción se cesó al abogado del Estado Edmundo Bal. Nada iba a parar a Delgado en su misión de complacer a los socios independentistas de Sánchez, incluso desamparó al juez del Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa del *procés*, cuando Puigdemont presentó una demanda civil contra él ante la justicia belga. Más allá de las polémicas de Delgado vinculadas a grabaciones en las que insultaba al ministro de Interior o aludía a su preferencia por los «tribunales de tíos», la elección de un perfil como el suyo para dirigir la Fiscalía es claramente una muestra del nulo respeto de Sánchez a la independencia del sistema judicial.

Esta tendencia iliberal se aceleraría con la llegada del coronavirus. El Gobierno de Sánchez ha tratado de obstaculizar las investigaciones judiciales sobre las posibles negligencias en su gestión de la pandemia. La instrucción del sumario de la juez Carmen Rodríguez-Medel provocó una autoritaria actuación del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska. La investigación la llevaba a cabo la Guardia Civil como policía judicial, y el ministro purgó al coronel Diego Pérez de los Cobos por negarse a filtrarle información de manera ilegal sobre la investigación. Fue purgado por cumplir la ley. Se da la circunstancia de que Pérez de los Cobos había dirigido el operativo para detener el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Era un hombre que estaba en el punto de mira de los partidos independentistas, los nuevos amigos de Sánchez. El Estado, pues, abandonaría a uno de sus servidores. Además, por aquellas fechas, la Fiscalía de la Audiencia Nacional también revisaría la calificación del caso de Josep Lluís Trapero, exmayor de los Mossos. El Gobierno cerraba el círculo de la vergüenza. Los dos procesos, siempre conectados.

Pero también hubo ceses en la Policía Nacional. El jefe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de este cuerpo policial, José Antonio Nieto González, había advertido el 24 de enero de la necesidad de que los agentes que intervinieran en el control de llegadas de vuelos procedentes de China usaran guantes y mascarillas. Licenciado en Medicina y Cirugía, Nieto recomendó «evitar aglomeraciones». Fue cesado el 14 de marzo. A finales de marzo, el director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, admitió que la Política Nacional tenía constancia de la necesidad de comprar material de protección desde aquel 24 de enero, confirmando que sí se podía saber —o al menos intuir— lo que iba a suceder. En definitiva, el Gobierno de Sánchez purgó a un guardia civil por negarse a incumplir la legalidad y a un policía nacional por decir la verdad. Le molesta la ley y la verdad. Si alguien ha merecido ser cesado fulminantemente en todos estos asuntos es, sin duda, el soberbio ministro de Interior.

Tras el gobierno representativo, el libre mercado y el imperio de la ley, Ferguson propone la sociedad civil como cuarto y definitivo sostén civilizatorio. También Dahrendorf la situaba como una condición fundamental para la democracia y la definía como «la sociedad de las asociaciones, de las agrupaciones libres de personas». La sociedad civil es la superación de la dependencia del Estado. Es superar el atomismo y el aislamiento tejiendo lazos voluntarios con otros ciudadanos. Es el entramado de mercados, asociaciones e instituciones independientes de las estructuras políticas, aunque puedan tener sus motivaciones en la política, así como en la economía, la cultura o el ocio. El liberalismo político defiende una sociedad civil vigorosa, libre y plural. Según el sociólogo Víctor Pérez-Díaz, un gobierno democrático y liberal se fundamenta en tres principios respecto a la sociedad civil. En primer lugar, el respeto de una amplia área para el ejercicio de las libertades individuales (y sus organizaciones). En segundo lugar, sensibilidad hacia las presiones en defensa tanto de los intereses particulares como de las diferentes versiones del interés general. Y, finalmente, la exigencia de una «esfera pública» en la que se debata la pluralidad de visiones sobre el interés general. Ninguno de estos tres principios es respetado por el poder político nacionalista, que es intervencionista, homogeneizador,

asfixiante.

Si el *procés* catalán ha podido llegar tan lejos fue porque desde el principio, desde el pujolismo, el nacionalismo tuvo muy claro que su ataque al Estado democrático sólo podría triunfar habiendo asaltado previamente la sociedad civil. En Cataluña se han podido malversar las competencias y los recursos públicos, y se ha doblegado el imperio de la ley, entre otras razones, porque la Generalitat carecía de un contrapeso en la sociedad civil. En realidad, Administración pública y asociaciones civiles se retroalimentaban. El plan de Jordi Pujol funcionó. Tejió una red de complicidades que llevó al nacionalismo a colonizar la práctica totalidad de los medios de comunicación, las universidades, las organizaciones empresariales y los colegios profesionales. Especial mención merece, por vergonzante, el papel de los sindicatos, cuyos dirigentes actúan en Cataluña como palmeros de la burguesía más insolidaria. No se han perdido ninguno de los saraos del *procés*.

El Estado, sin embargo, ha estado prácticamente ausente en el apoyo a una sociedad civil constitucionalista en Cataluña. Unos lo tienen todo, con el apoyo de la Generalitat; los otros sólo reciben incomprensión y desamparo. En Cataluña, las asociaciones a favor de la convivencia y contra el independentismo sobreviven gracias al valiente voluntarismo de unos pocos, y entre la hostilidad y la indiferencia de los muchos. El proceso español está agravando peligrosamente esta desigualdad en Cataluña. El Gobierno del PSOE y Podemos tiene al separatismo como interlocutor preferente, mientras abandona a los constitucionalistas catalanes que, sin apenas recursos, protegen sus derechos y libertades como buenamente pueden. Es una actitud negligente por parte del Gobierno español, ya que debilita la democracia ante el próximo ataque del separatismo. Cuando vuelvan a intentarlo, quizá no salgan tantos constitucionalistas a la calle como en el 8 de octubre de 2017.

Las democracias necesitan una riqueza de asociaciones voluntarias. Es fundamental, bien lo sabía Alexis de Tocqueville, una sociedad civil fuerte para evitar que la democracia degenere en tiranía de la mayoría y se imponga el amiguismo y la corrupción. En el mundo anglosajón la relación entre poder político y sociedad civil ha sido de

independencia. En el norte de Europa se ha tendido más a la cooperación. Sin embargo, en Cataluña esta relación ha sido más bien una fusión. Aquí el Gobierno autonómico está en disposición de exigir adhesiones inquebrantables a los agentes sociales. El asociacionismo está fuertemente subvencionado y sabe qué mano nunca debe morder. La telaraña se ha ido extendiendo a medida que la Generalitat acumulaba más y más competencias. De este modo, la otrora vital sociedad catalana está sucumbiendo a un estatismo que extingue el dinamismo y la creatividad. El actual nacionalismo catalán tiene poco de liberal y mucho de estatista. A partir de 2012, el discurso que impulsó Artur Mas como respuesta a todos los problemas de los catalanes era la separación del resto de los españoles y la creación de estructuras de Estado. No era más libertad ni una sociedad más grande —como proponía la derecha británica—, sino más Estado. Algo tuvo que ver en esa mala idea quien fuera su *conseller* de Cultura, Ferran Mascarell, una persona con orígenes ideológicos maoístas.

Es en la educación donde más daño puede haber infligido esta apuesta por el estatismo y la homogeneización. Como apunta Ferguson: «Los países inteligentes están alejándose del modelo obsoleto de los monopolios educativos del Estado y permitiendo a la sociedad civil regresar a la enseñanza, que es lo que le corresponde». No parece que ni Cataluña ni España vayan en la misma dirección que los países inteligentes. Sólo algunas comunidades autónomas que se han resistido a la tentación progre mantienen modelos educativos de calidad.

La libertad de los padres para elegir la mejor educación posible para sus hijos es fundamental para incrementar los estándares. El *procés* catalán y el proceso español se han caracterizado por su intervencionismo en la educación. Buscan la homogeneidad y el control absoluto. Sin embargo, igual que en otros monopolios, si sólo existiera un proveedor de educación su calidad se vería resentida con rapidez. No se trata de recortar la educación pública, sino que los padres tengan la capacidad de elegir también otros modelos concertados o privados. El debate no debería centrarse tanto en multiplicar el gasto público, sino en cómo invertir, por ejemplo, en más becas o en la implementación del cheque escolar que garantice una mayor libertad a todas las familias y una mejor educación a sus

hijos.

Con el objetivo de la alfabetización asegurado, nuestras sociedades deberían ser más ambiciosas. Ferguson lo es: «La revolución educativa del siglo XX fue que en las democracias la educación básica estuviera al alcance de la mayoría de la gente. La revolución educativa del siglo XXI será que la educación de calidad esté al alcance de una creciente proporción de niños. Si alguien está en contra de eso, entonces él es el verdadero elitista: él es el que quiere mantener a los niños pobres en escuelas pésimas». Una educación mediocre bloquea el ascensor social, reduce las oportunidades y nos estanca en la desigualdad. Sin embargo, la izquierda española, a diferencia de la sueca o la danesa, se regodea en sus prejuicios ideológicos. No es una cuestión monetaria. Es una cuestión cultural. La educación de calidad necesita una cultura del esfuerzo, del mérito y de los conocimientos. La ausencia de exigencia en el modelo progresista español conduce a los estudiantes a la despreocupación, primero, y a la frustración, después. Al nacionalismo rabioso y a la izquierda indignada les podría interesar una generación de jóvenes sin conocimientos ni oportunidades, pero como sociedad moderna estamos ante un fracaso absoluto. En este sentido, los ataques tanto de la izquierda española como de la Generalitat independentista al modelo de escuela concertada son un flaco favor al futuro de todos los jóvenes, acudan a escuelas concertadas o a otras.

No quisiera acabar esta reflexión sobre la educación sin una mención a la cuestión de la lengua, ya que son muchas las mentiras que en torno a ella ha propagado el nacionalismo y que el progresismo ha aceptado acríticamente. Repiten machaconamente que el modelo de inmersión lingüística en Cataluña es un éxito, pero no hay datos que corroboren que los estudiantes catalanes aprendan el castellano igual que el resto de los españoles, ya que no existe ninguna prueba común para toda España que nos ayude a comparar el nivel de las diferentes comunidades. En realidad, el modelo está equivocado incluso en el nombre. Más que inmersión es ahogamiento, porque la inmersión se produce cuando un joven estudia en una lengua diferente a la de su entorno familiar. Sin embargo, casi la mitad de los catalanes usan el catalán en casa y con sus amigos como lengua habitual, por lo que el

monolingüismo escolar provoca que más allá de las dos horas semanales de las asignaturas de lengua o literatura castellana, no cambien de lengua y, por tanto, no tengan la oportunidad de aprender correctamente el idioma común de todos los españoles. Los resultados son tristemente observables para todos aquellos que impartimos clases en las universidades catalanas y encontramos alumnos con pavorosos déficits en lengua castellana. Cabe apuntar también la injusticia de este sistema para los hijos de familias castellanoparlantes que sufren un mayor fracaso escolar. La escuela con monolingüismo vehicular es, en definitiva, injusta para todos. No es ningún modelo de éxito, pero también nos mienten cuando nos dicen que está consensuado. Falso. No lo está políticamente, pero menos aún socialmente, aunque traten de silenciar las voces que lo denuncian. La falta de investigaciones sobre la opinión de los catalanes respecto al modelo lingüístico se ha subsanado con un trabajo de GAD3 para Sociedad Civil Catalana publicado a finales de 2020. El estudio arroja unos resultados más próximos al sentido común que al relato nacionalista: el 64 por ciento de los catalanes prefiere un modelo de educación trilingüe (catalán, castellano e inglés) y sólo un 9 por ciento se decanta por un sistema de inmersión lingüística en catalán. Menos de uno de cada diez catalanes formaría parte de ese cacareado consenso. Así pues, el modelo preferido por los catalanes estaría más cerca del bilingüismo equitativo o del trilingüismo en proporciones variables.

No obstante, el Gobierno de Sánchez ha salido en defensa del nacionalismo y en contra de esa mayoría social, llegando a pactar una enmienda a la conocida como ley Celaá para eliminar la referencia al castellano como lengua vehicular en toda España. El PSOE, una vez más, se lo pone difícil a esas humildes familias catalanas que deciden recurrir a los tribunales para defender sus derechos ante la imposición nacionalista. Y es que debemos tener en cuenta que la libertad y la excelencia son siempre obstáculos para cualquier proyecto colectivista. El nacionalismo no excluye el castellano como una manera de proteger la lengua catalana, sino como un instrumento de ingeniería social profundamente clasista. Prefieren beneficiar a los hijos de las familias más proclives a sus postulados políticos, mientras tratan de homogeneizar y, por tanto, empobrecer a toda Cataluña. No hay

ninguna otra justificación para mantener un sistema de exclusión de una lengua oficial, algo inédito en el resto de Europa. Ninguna justificación. Tampoco las injusticias del pasado pueden legitimar las injusticias del presente. Reflexiona Amin Maalouf en *Identidades asesinas*:

> Una lengua que ha estado mucho tiempo oprimida, o al menos desatendida, ¿puede legítimamente reafirmar su presencia a costa de las otras, y con el riesgo de instaurar otro tipo de discriminación? Evidentemente, no se trata aquí de examinar los diferentes casos particulares, que se cuentan por centenares, de Pakistán a Quebec, de Nigeria a Cataluña; se trata de entrar con sentido común en una época de libertad y de serena diversidad, dejando atrás las injusticias que se han cometido sin sustituirlas por otras, por otras exclusiones, por otras intolerancias, y reconociendo a todos el derecho de hacer coexistir, en su identidad, la pertenencia a varias lenguas.

Los procesos catalán y español están siendo posibles porque el separatismo y la izquierda han impulsado durante años una cultura política que desprecia aquellos valores que nos permiten vivir en libertad: la responsabilidad, la moderación (el reformismo), el pluralismo y también el patriotismo. Creyendo que se enfrentaban a un Estado franquista o a una amenaza fascista, los fieles incautos han avalado con su voto una actuación política irresponsable, sin contención, que ha desgastado, como hemos visto, al gobierno representativo, al libre mercado, al imperio de la ley y a la sociedad civil. Por esta razón, la prosperidad y la convivencia no serán posibles si antes no recuperamos una cultura de libertad, incluso cierto patriotismo de la libertad.

La sociedad española necesita un pacto por la sensatez, igual que Cataluña necesitaba un acuerdo del *seny*, a saber, un contrato tácito para no dejarse arrastrar por la polari-zación de los populismos, para defender unos valores que inciten a los representantes públicos a guiarse por el bien común, abriendo espacios de libertad y no encerrándonos en el ensimismamiento identitario. Se trata de fortalecer el sistema democrático nacido en la Transición con una robusta cultura liberal democrática, de un respeto mutuo que a pesar de las discrepancias anteponga el diálogo al veto para reformar sin

destruir, para proteger las libertades. La fuerza del cambio está descentralizada en la sociedad civil. Ésta debe fortalecerse y mantenerse independiente de las injerencias de la política colectivista. Es esta sociedad, ajena a la tiranía del tacticismo de los ciclos electorales, la que puede construir puentes con visión amplia y estratégica, y con un mayor conocimiento de la complejidad social y económica de nuestro país. En un libro anterior lo definí como «un acuerdo social para que actitudes individuales diferentes generen incentivos políticos diferentes, a favor de la reforma, de la mejora institucional continua y, en definitiva, del debate democrático maduro». En última instancia, es un cambio de valores para que la política se vea forzada a defender la reforma en lugar de la ruptura, la igualdad de oportunidades en lugar del clientelismo y la libertad en lugar del intervencionismo. Ser ciudadanos responsables es el primer, e imprescindible, paso para una mejor política.

El conflicto (no violento) es inherente a la política democrática y es positiva la existencia de esa competencia de ideas que nos permite progresar. El problema reside hoy en las ideologías fracasadas del pasado que regresan convertidas en religiones identitarias, sin espacio para las ideas, asfixiándonos entre voluntades del ser excluyentes y beligerantes. La dialéctica amigo-enemigo ya ha hecho suficiente daño a nuestra sociedad. Las mayorías silenciosas no deberían permitir que los agentes de la discordia sigan actuando como sus portavoces. En Cataluña, el nacionalismo se apropia indebidamente de la totalidad de la sociedad porque gran parte del constitucionalismo se ha retirado; exhausto, se ha desconectado de la política. Ése es el gran peligro que corre ahora también España: que la indiferencia o el hastío de la mayoría deje la política en manos de las minorías radicalizadas.

La libertad sin responsabilidad es una estafa. El *procés* catalán fue posible por una renuncia a ejercer la respon-sabilidad como ciudadano, a dejarse arrastrar por una política que prometía resolver todos los problemas con una solución mágica. También el proceso español es fruto de la creencia en la posibilidad de asaltar los cielos votando a unos charlatanes. Sin embargo, regalar las esperanzas a movimientos utópicos fue el primer paso para la frustración y el odio que ahora amenazan la convivencia y la libertad. Para protegerlas es, pues,

necesario recuperar la responsabilidad. Ser responsables en el debate público, con las informaciones que compartimos, con nuestra actitud en las redes sociales y ante aquellas personas a las que podemos influir. No hay mejor manera de persuadir que la ejemplaridad. Como apunta el historiador Timothy Snyder: «La vida es política, no porque al mundo le importe cómo te sientas tú, sino porque el mundo reacciona a lo que tú hagas. Las mínimas decisiones que tomamos son en sí una especie de voto».

Ser individualmente más responsables en el debate público, evitar las trampas de los agitadores, reconduciría la política hacia una mayor moderación y un impulso reformista. Recuperemos el mejor maridaje, el del liberalismo conservador, cuyo sustantivo, el *liberalismo*, es la corriente de pensamiento que ofrece el objetivo más noble para los seres humanos: la libertad. Poder perseguir la felicidad y desarrollar todas nuestras potencialidades sin más traba que la libertad de los otros. Por otra parte, el adjetivo *conservador* es la manera más adecuada de entender el mundo, si queremos proteger esa libertad, ya que entiende que la experiencia es más sólida que la ocurrencia, que lo razonable es más humano que lo racional y que, por tanto, la reforma acaba siendo para el progreso más útil que la revolución. No estamos, pues, ante una ideología cerrada, sino ante la sabia intuición de que la sociedad es tan compleja que no cabe en una simple teoría. Es una fuerza de cambio, que permite la permanente adecuación de las instituciones a los nuevos retos, sin grandes saltos que creen inseguridad en la sociedad o que dilapiden la sabiduría acumulada. Aquí podemos recuperar la idea burkeana de pacto entre generaciones: respetar el legado de nuestros padres y dejar a nuestros hijos un mundo mejor. Mejor, no perfecto. Como indica Valentí Puig: «Aceptar que vivimos en un mundo que siempre será imperfecto quizá vaya a ser una de las decisiones más provechosas de nuestro siglo, y a la vez una de las lecciones más difíciles de aprender». Ningún populista la ha aprendido. Los procesos catalán y español han sido liderados por adanes altaneros que creyeron que nada bueno se había hecho antes de su llegada. Es la fatal arrogancia que denunciaba Friedrich von Hayek. Sin embargo, ante aquellos que prometen ruptura porque, dicen, todo está mal en nuestro país, cabe aplicarles la recomendación de Murray y

preguntarles en comparación con qué. ¿Era más democrática e integradora la Segunda República que la actual monarquía parlamentaria? ¿Tiene Cataluña menos competencias que cualquier otra región europea? ¿Sufren las españolas un mayor machismo que las mujeres de los países de nuestro entorno? En un reciente manifiesto preelectoral, algunos intelectuales madrileños proclamaban que: «Esta vez sí es posible conseguir que la derecha, y la ultraderecha, salgan del poder en la Comunidad de Madrid después de 26 infernales años de atentados contra los derechos y la dignidad de la mayoría ciudadana». ¿Es Madrid un infierno? ¿En comparación con qué? ¿Qué otra región española es menos infernal? Las empresas y el talento huyen de Cataluña a la Comunidad de Madrid. ¿Se van de un paraíso procesista a un infierno fascista?

Exagerar los problemas es la estrategia del revolucionario, pero hoy la revolución es más bien un modo de vida. La catalana revolución de las sonrisas se ha convertido en la parálisis de los frustrados. De la misma manera, Iglesias y sus camaradas nada han cambiado cuando han llegado al Gobierno de España. En realidad, han mejorado su patrimonio y han degradado las instituciones, pero su discurso revolucionario ha contrastado con la nulidad reformista. Las falsas expectativas sólo generan frustración y ésta puede derivar en violencia. Por tanto, debemos escapar de los políticos que lo prometen todo, porque ellos sí asfaltan el camino hacia un infierno. Además, mientras la política se instale en el mundo de los sueños, no se acometerán las reformas necesarias y quedaremos rezagados en la carrera global. Mientras la educación queda atrapada en discursos ideológicos, no crearemos igualdad de oportunidades. No conseguiremos la mejor educación posible para el mayor número posible de estudiantes, como pedía Ferguson. Dejaremos un mundo peor a nuestros hijos por no atender retos como la deuda y la demografía. Cómo modernizar los Estados de bienestar sin caer en los autoritarismos orientales merece un debate más sereno y menos ideológico. Imposible en el clima de exaltación actual. Sin embargo, un proyecto reformista ambicioso sería incluso una manera de afrontar las tensiones territoriales por elevación, ofreciendo un futuro mejor y más realista que el de los nacionalistas y populistas. En este sentido, comparto la reflexión de

John Micklethwait y Adrian Wooldridge sobre la importancia de resucitar dos grandes ideas liberales. Por un lado, «revivir el espíritu de libertad, poniendo más énfasis en los derechos individuales y menos en los derechos sociales». Y, por otro, «revivir el espíritu de la democracia disminuyendo las cargas del Estado. Si el Estado promete demasiado, crea destemplanza y dependencia entre los ciudadanos, sólo reduciendo lo que promete, la democracia será capaz de expresar sus mejores valores de flexibilidad, innovación y resolución de problemas». La nueva realidad pandémica nos exige aún más impulso reformista. El diálogo y el pacto que lo hagan posible en áreas como la enseñanza, la sanidad o la fiscalidad podrían ayudar a recuperar la confianza perdida entre los actores políticos, pero también entre la ciudadanía y las instituciones. En este sentido, será necesaria una política más humilde, pero también más ambiciosa, menos épica y más realista, con el fin de acabar con el bloqueo que supone la lógica del conflicto permanente. Como defiende Valentí Puig en *Moderantismo*, para hacer frente a las políticas de tribu, el liberalismo conservador deberá reivindicar la experiencia por encima de la ideología, la ética de la responsabilidad por encima de la ética de la convicción y encontrar un equilibrio entre pragmatismo y valores. La reacción nacionalpopulista, por su parte, sólo aceleraría la decadencia de nuestras instituciones, de la libertad y de la convivencia.

En esta idea de individualismo responsable que venimos defendiendo es esencial recuperar también el sentido del pluralismo. Éste es distinto al multiculturalismo, esa suma de colectivos identitarios y cerrados. El pluralismo no es tampoco relativismo, el todo vale. Es reconocer los límites de la razón humana y no imponer a los demás nuestra idea de vida buena. «Ni todo vale ni nada es absoluto», escribe Lorenzo Bernaldo de Quirós. En su obra *En defensa del pluralismo liberal*, muestra también su preocupación por la desaparición del «espíritu de conciliación y de reforma que presidió la Transición» y por la instauración de una suerte de guerra civil fría en la que se criminaliza al que piensa diferente. Bernaldo de Quirós llama a recuperar la bandera de la tercera España que «no tiene nada que ver con el centrismo por oposición a las otras dos, sino con el deseo de construir una sociedad en la que los individuos puedan vivir como

deseen, expresar sus ideas sin temor a la represalia, en la que los valores morales pertenecen a la esfera íntima libre de las personas, en la que el Estado y el Gobierno no pretendan imponer a nadie los ideales en los que ha de creer». En el caso del *procés* catalán, suelo defender la necesidad de una doble reconciliación, entre catalanes y catalanes y con el resto de los españoles, para la que será necesaria fortalecer un doble pluralismo, entendiendo España no como un mosaico en el que cada comunidad es una tesela monocolor, sino como un cuadro impresionista en el que tanto los colores como los trazos culturales, sociales y económicos se entremezclan; donde los matices y las diferencias son importantes, pero que nunca se olvida aquello que nos es común.

En este sentido, planteo también una defensa de un patriotismo que defienda precisamente el pluralismo y la libertad. Frente a las tribus, la idea patriótica de nación plural de ciudadanos libres. El trabajo será arduo, porque, como escribió Stanley G. Payne: «España es el único país occidental, y probablemente del mundo, en el que una parte considerable de sus escritores, políticos y activistas niegan la existencia misma del país». El patriotismo no es nacionalismo; es, en cierta medida, su antídoto. Así los define Snyder: «Un nacionalista nos anima a ser la peor versión de nosotros mismos, y después nos dice que somos los mejores». Su única verdad es el resentimiento. Por el contrario, «un patriota quiere que la nación esté a la altura de sus ideales, lo que implica pedirnos que seamos la mejor versión de nosotros mismos». El nacionalismo es la imposición de la homogeneidad, mientras el patriotismo es el amor por la realidad plural de una nación. Al patriota le preocupa aquello que atente contra la libertad. Al nacionalista, sin embargo, le preocupa la diferencia y el pluralismo, uno de los pilares de la propia libertad. Es cierto que el patriotismo apela a un sentimiento de pertenencia, pero no excluyente ni beligerante. Es totalmente compatible con la identidad múltiple que cada uno posee y nos hace únicos. Maurizio Viroli defiende la necesidad de un lenguaje del patriotismo de la libertad que despierte pasión por el bien común, en un terreno alejado tanto de la frialdad de una racionalidad sin emociones como de la agitación de las bajas pasiones del nacionalismo. El patriotismo de la libertad exige

responsabilidad, mientras el nacionalismo es culpabilizar al otro de los propios males. Así, el pragmatismo en la defensa de la libertad nos exige entender la fuerza de la identidad; entender que el cosmopolitismo poco tiene que hacer frente al embate nacionalista en amplias capas de la población. Tras viajar por todos los confines del mundo azotados por la lacra identitaria, Michael Ignatieff concluyó: «La fe nacionalista nunca ha sido erosionada por argumentos económicos». La libertad no sólo debe ser defendida porque genere prosperidad, sino porque es éticamente superior a la no libertad, porque respeta la dignidad humana, porque nos impulsa a ser mejores. Los defensores de la libertad deben entender, pues, la necesidad de ganarse los corazones para su causa. James Buchanan, un gran liberal, nos advirtió de que «no nos hemos preocupado por salvar el alma del liberalismo clásico. Los libros y las ideas son necesarios, pero no son suficiente, por su propia cuenta, para asegurar la viabilidad de nuestra filosofía. No, el problema está en la presentación de las ideas». La libertad no es sólo útil, es un fin moral. Ante las locuras identitarias, tenemos el deber de defender el alma de la libertad.

Epílogo

El problema de escribir un libro de rabiosa —en todos los sentidos— actualidad es que los nuevos acontecimientos pueden desmentir con facilidad algunas de sus tesis. En realidad, nada me habría gustado más que así fuera. Lamentablemente, el resultado de las elecciones catalanas del 14 de febrero y el desarrollo de la campaña electoral en la Comunidad de Madrid demuestran la vigencia de los dos procesos descritos en las páginas anteriores. Y, sobre todo, confirman dos preocupaciones: la salida del Estado de Cataluña, desamparando a los constitucionalistas, por un lado; y la radicalización identitaria de las izquierdas españolas que ya acusan de fascismo a todo aquel que se mueve a la derecha del PSOE.

Finalicé la redacción de *El proceso español* pocas semanas después de unas elecciones catalanas a las que concurrí en la lista del Partido Popular. El resultado de los comicios no puede describirse de otra manera que de rotundo fracaso. La alta abstención fue un paso atrás para el constitucionalismo catalán y, en especial, para su vertiente más liberal. Ciudadanos perdió 30 diputados, pasando de ser la primera fuerza del Parlament a la séptima. El PP se dejó en aquellas urnas un diputado y continúa sin poder formar grupo parlamentario. La reacción nacionalpopulista de Vox aglutinó, por su parte, el voto del descontento y de reafirmación de las dinámicas procesistas.

Dos meses y medio después, sin embargo, los partidos independentistas, que habían superado por primera vez la barrera del 50 por ciento de los votos, seguían sin poder formar un nuevo Govern. A pesar de la pandemia y la crisis económica, estas formaciones andan discutiendo sobre cómo continuar el *procés* y qué papel debe protagonizar el Consell per la República, la tapadera de Carles Puigdemont para pagarse el «palacete» de Waterloo y los sueldos de sus cortesanos, bufones, como el rapero Valtònyc, incluidos. Mientras

tanto, las grandes empresas catalanas siguen huyendo, mayoritariamente a Madrid, Andalucía y Galicia, según el Colegio de Registradores. Y las pymes siguen cerrando, afectadas por la pandemia y las decisiones de la Generalitat. En definitiva, la amarga decadencia catalana seguirá, al menos, una legislatura más.

El resultado de estas elecciones también demuestra el grave error de enfoque que han cometido todos los Gobiernos españoles con la situación catalana. La reflexión suele girar en torno a qué actitud adoptar frente al nacionalismo, a pesar de que los sucesos del año 2017 deberían clarificar bastante el debate al demostrar su insaciabilidad. A partir de entonces, debería haber sido obvio que cualquier cesión será utilizada para el mismo fin, preparar el nuevo *momentum*, como diría Torra, para atacar a la democracia y conseguir, definitivamente, la secesión. Pero el gran y persistente error es dejar a los constitucionalistas catalanes al albur de los caprichos del nacionalismo. Es una decisión de los Gobiernos españoles, pero también es cierto que la relación entre el Gobierno español y los constitucionalistas catalanes es una materia que no está en el debate público. Todo se enfoca hacia el nacionalismo. Y, por tanto, nunca se ha reivindicado con suficiente fuerza un proyecto de Estado para reforzar el constitucionalismo en Cataluña. El nacionalismo tiene toda una Administración pública, la Generalitat, a su favor. Sin embargo, el constitucionalismo anda atrapado entre esa Generalitat que le es hostil y un Estado que se bate en retirada.

El constitucionalismo necesita coordinar estrategias para llegar al máximo número posible de catalanes, ya que la única manera de recuperar la convivencia es refundar democráticamente la Generalitat desde dentro. Así, es necesaria una apuesta clara del Estado en defensa y promoción del constitucionalismo en Cataluña. Su desaparición es un grave *problema*. Si cualquier idea positiva de España se retira de Cataluña, será cuestión de tiempo que desaparezcan también todos los afectos. Lo sabe bien nuestro refranero: ojos que no ven, corazón que no siente. Cualquier atajo, además, podría resultar peligroso. Sólo habrá convivencia si hay justicia; es decir, sin subterfugios que permitan al nacionalismo esquivar la ley. Sólo habrá reconciliación entre los catalanes cuando las instituciones sean de todos y para todos

los ciudadanos.

Los mimbres para tejer la reconciliación y la recuperación existen. Cataluña necesita recuperar el pensamiento de Jaume Balmes, que pedía «la mayor inteligencia posible para el mayor número posible» y «el mayor bienestar posible para el mayor número posible». Recuperar la Cataluña rica y plena. Esa Cataluña de todos, que nos llenaba de orgullo y que era admirada en toda España. Recuperar la creatividad de la Cataluña modernista que erigió edificios más allá de sus límites. Recuperar aquella ambición que cristalizó en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 y la Exposición Internacional de 1929. Esa Cataluña modernista miraba al futuro y era líder en tecnología y diseño al servicio de las personas, construyendo el Hospital de la Santa Creu y Sant Pau hace un siglo. Es la Cataluña que ofrecía soluciones vanguardistas y era la proa económica de España. Era la cultura en expansión libre de corsés políticos. Recuperar esa fuerza creadora requiere libertad. Necesitamos la Cataluña inquieta de Jaume Vicens Vives. La Cataluña de la inteligencia irónica de Josep Pla. Necesitamos la Cataluña acogedora que abrió los brazos a la mejor literatura en español. La de aquellos años del boom de los Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y tantos otros. También la Cataluña de la *senyera*, la de todos. La Cataluña del *president* Tarradellas. La Cataluña que parió la España democrática con dos de los padres fundadores de nuestra Constitución: Jordi Solé Tura y Miquel Roca. Necesitamos aquella Cataluña, con Barcelona como punta de lanza, que supo construir grandes proyectos con el resto de los españoles. La Barcelona de Cobi, de la que fueron los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Entonces el mundo sí que nos miraba y lo hacía con admiración. Necesitamos la Cataluña plural, abierta y mestiza de Montserrat Caballé o Rosalía.

Viendo la Cataluña del *procés* es evidente que cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Pero no tenemos derecho a la nostalgia si antes no lo hemos intentado todo para recuperar la mejor Cataluña, y en ese intento debemos ganar la Generalitat democráticamente y ponerla al servicio de un proyecto integrador y de libertad para todos los catalanes, así como para el resto de los españoles. Necesitamos revertir la ocupación de la sociedad civil que el nacionalismo ha ido

construyendo durante los últimos cuarenta años. Y para ello son necesarios: liderazgos políticos, ejemplares, serios, con ideas claras, que den la cara en las instituciones catalanas; unidad estratégica y de acción de todo el constitucionalismo, recuperando el espíritu perdido del 6 y 7 de septiembre por el cual supimos estar por encima de los intereses partidistas y particulares, trabajando unidos en defensa de la democracia; un pacto de Estado para fortalecer las instituciones y mejorar la presencia del Estado en Cataluña y, finalmente, dejar de premiar a un supuesto nacionalismo moderado que, en realidad, sólo es un separatismo consciente de que no logrará sus objetivos la semana que viene. Con recursos, inteligencia y persistencia algún día el constitucionalismo logrará refundar democráticamente la Generalitat de Cataluña y, así, garantizar el respeto a las normas de convivencia, ejercer el autogobierno plenamente y con lealtad institucional, despolitizar la Administración pública y liberar la sociedad civil. Ese día Cataluña volverá a la cabeza de España.

Sin embargo, el tiempo de esa idea todavía no ha llegado. La cuestión identitaria no sólo sigue dominando la política catalana, sino también la española. Sánchez e Iglesias metieron el *procés* en la Moncloa, socavando todos los pilares de la democracia y la libertad; a saber, la separación de poderes, el pluralismo o la sociedad civil. Iglesias naturalizó el insulto y la mentira en la política española, también la intimidación y el acoso —lo llamaron escraches—. La radicalización de un ya radical Iglesias en la campaña ma-drileña podría hacernos creer que estamos ante los últimos y desesperados coletazos —nunca mejor dicho— de la izquierda populista e identitaria. Sin embargo, las palabras no son inocuas. Ha cambiado la cultura política. Y no pocos ministros socialistas se expresan ya con la misma falta de respeto a la verdad y a los adversarios que los podemitas. Es posible que cuando el lector tenga este libro entre las manos, Iglesias haya fracasado electoralmente en las autonómicas de Madrid, pero el daño ya estará hecho al haber conseguido que el PSOE haya mutado definitivamente en puro sanchismo, poniendo en riesgo la neutralidad de las instituciones, la convivencia y la prosperidad de todos los españoles. Deseo equivocarme y estar sólo planteando la peor de las hipótesis.

Por suerte, el futuro nunca está escrito, depende del conjunto de las decisiones que tomemos cada uno de nosotros. Este libro, sin ir más lejos, es el fruto de una decisión: la de no bajar la guardia y alertar sobre la deriva tomada por la izquierda española, una deriva demasiado parecida a la del nacionalismo catalán. El *procés* acabó con la sociedad fracturada y empobrecida. Dejemos, por favor, de tropezar con la misma piedra.

Agradecimientos

Este libro no habría sido posible sin la iniciativa y la paciencia de su editor, Roger Domingo. Para él, toda mi gratitud, reconocimiento y una explicación: el contexto de campaña permanente y las vicisitudes de la política catalana no me permitieron ser tan veloz en la redacción como habría deseado. También les debo un enorme agradecimiento a todos aquellos medios de comunicación que me han permitido publicar columnas regularmente y, así, mantenerme al día de la actualidad política y tener el material necesario para la elaboración de esta obra. Pienso en especial en *The Objective*, *El Debate de Hoy* y *ABC Catalunya* y en aquellas personas concretas que han confiado en mis textos: Ignacio Peyró, Álvaro Petit, Pablo Velasco, David Vicente Casado, Àlex Gubern y Daniel Tercero. Y, finalmente, nunca podría dejar de mencionar en un apartado como este a la persona que me Sanima, me soporta y nunca me falla, mi mujer.

Bibliografía

Álvarez Tardío, Manuel, *El camino a la democracia en España. 1931 y 1978*, Gota a Gota, Madrid, 2005.

Álvaro, David, *Cataluña, la construcción de un relato*, Deusto, Barcelona, 2019.

Bastiat, Frédéric, *La ley*, Alianza, Madrid, 2005.

Bayona, Antoni, *No todo vale. La mirada de un jurista a las entrañas del* procés, Península, Barcelona, 2019.

—, *Sobrevivir al* procés. *En busca de tierra firme*, Península, Barcelona, 2020.

Berlin, Isaiah, *Sobre el nacionalismo. Textos escogidos,* Página Indómita, Barcelona, 2019.

Borrell, Josep y Joan Llorach, *Las cuentas y los cuentos de la independencia*, Catarata, Madrid, 2015.

Canal, Jordi, *Con permiso de Kafka. El proceso independentista en Cataluña*, Península, Barcelona, 2018.

Cardenal, Juan Pablo, *La telaraña. La trama exterior del* procés, Ariel, Barcelona, 2020.

Castellà Andreu, Josep Maria, *Estado autonómico. Pluralismo e integración constitucional*, Marcial Pons, Madrid, 2018.

Coll, J., I. Molina y M. Arias Maldonado (coords.), *Anatomía del* procés. *Claves de la mayor crisis de la democracia española*, Debate, Barcelona, 2018.

Coscubiela, Joan, *Empantanados. Una alternativa federal al sóviet carlista*, Península, Barcelona, 2018.

Crick, Bernard, *En defensa de la política*, Tusquets, Barcelona, 2001.

Dahrendorf, Ralf, *La libertad a prueba. Los intelectuales frente a la tentación totalitaria*, Trotta, Madrid, 2009.

D'Ancona, Matthew, *Posverdad. La nueva guerra contra la verdad y cómo combatirla*, Alianza, Madrid, 2019.

De Ramón, Juan Claudio, *Diccionario de lugares comunes sobre Cataluña. Breviario de tópicos, recetas fallidas e ideas que no funcionan para resolver la crisis catalana*, Deusto, Barcelona, 2018.
Dion, Stephane, *La política de la claridad. Discursos y escritos sobre la unidad canadiense*, Alianza, Madrid, 2005.
Dudda, Ricardo, *La verdad de la tribu. La corrección política y sus enemigos*, Debate, Barcelona, 2019.
Eatwell, Roger y Matthew Goodwin, *Nacionalpopulismo. Por qué está triunfando y de qué forma es un reto para la democracia*, Península, Barcelona, 2019.
Ellakuría, Iñaki y Pablo Planas, *Manual de incompetencia (en tiempos de coronavirus)*, Funambulista, Madrid, 2020.
Elliot, John H., *Haciendo historia*, Taurus, Madrid, 2012.
Ferguson, Niall, *La gran degeneración. Cómo decaen las instituciones y mueren las economías*, Debate, Barcelona, 2013.
Fukuyama, Francis, *Identidad. La demanda de dignidad y las políticas de resentimiento*, Deusto, Barcelona, 2019.
Gascón, Daniel, *El golpe posmoderno. 15 lecciones para el futuro de la democracia*, Debate, Barcelona, 2018.
Guilluy, Christophe, *No Society. El fin de la clase media occidental*, Taurus, Barcelona, 2019.
Haidt, Jonathan, *La mente de los justos. Por qué la política y la religión dividen a la gente sensata*, Deusto, Barcelona, 2019.
Hayek, Friedrich A., *Camino de servidumbre*, Alianza, Madrid, 2000.
Ignatieff, Michael, *Sangre y pertenencia. Viajes al nuevo nacionalismo*, El Hombre del Tres, Madrid, 2012.
—, *Fuego y cenizas. Éxito y fracaso en política*, Taurus, Barcelona, 2014.
Jiménez Torres, David, *2017. La crisis que cambió España*, Deusto, Barcelona, 2021.
Judt, Tony, *Algo va mal*, Taurus, Barcelona, 2010.
Jullien, François, *La identidad cultural no existe*, Taurus, Barcelona, 2017.
Kakutani, Michiko, *La muerte de la verdad. Notas sobre la falsedad en la era Trump*, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2019.
Kedourie, Elie, *Nacionalismo*, Alianza, Madrid, 2015.
Krastev, Ivan, *¿Ya es mañana? Cómo la pandemia cambiará el mundo*,

Debate, Barcelona, 2020.
Lanier, Jaron, *Diez razones para borrar tus redes sociales de inmediato*, Debate, Barcelona, 2018.
Lapuente, Víctor, *El retorno de los chamanes. Los charlatanes que amenazan el bien común y los profesionales que pueden salvarnos*, Península, Barcelona, 2015.
—, *Decálogo del buen ciudadano. Cómo ser mejores personas en un mundo narcisista*, Península, Barcelona, 2021.
Latorre, Rafa, *Habrá que jurar que todo esto ha ocurrido*, Madrid, La Esfera de los Libros, 2018.
Leith, Sam, *¿Me hablas a mí? La retórica, de Aristóteles a Obama*, Taurus, Barcelona, 2017.
Levitsky, Steven y Daniel Ziblatt, *How Democracies Dies. What History Reveals about our Future*, Penguin, Nueva York, 2018.
Lilla, Mark, *El regreso liberal. Más allá de la política de la identidad*, Debate, Barcelona, 2018.
Lipset, Seymour Martin y Stein Rokkan, «Estructuras de división, sistemas de partidos y alineamientos electorales», en *Diez textos básicos de ciencia política*, Ariel, Barcelona, 2001.
Llapart, María y José Enrique Monrosi, *La coalición frente a la pandemia. Crónica política del año que cambió la historia*, Península, Barcelona, 2020.
Maalouf, Amin, *Identidades asesinas*, Alianza, Madrid, 1999.
—, *El desajuste del mundo*, Alianza, Madrid, 2009.
Madí, David, *Democràcia a sang freda. Les interioritats de la política catalana*, L'arquer, Barcelona, 2007.
Marco, José María y Jorge Martín Frías (coords.), *La hora de España. Una afirmación liberal conservadora*, Deusto, Barcelona, 2020.
Martí, Josep, *Cómo ganamos el proceso y perdimos la República. Una crónica de la crisis de Estado desde dentro y desde fuera*, ED Libros, Barcelona, 2018.
McCloskey, Deirdre Nansen, *Por qué el liberalismo funciona. Cómo los verdaderos valores liberales crean un mundo más libre, igualitario y próspero para todos*, Deusto, Barcelona, 2020.
Mercado, Francisco, *Una pandemia de errores. Cómo y por qué la mala gestión del Gobierno convirtió a España en campeona mundial del*

coronavirus, Deusto, Barcelona, 2020.
Micklethwait, John y Adrian Wooldridge, *La cuarta revolución. La carrera global para reinventar el Estado*, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2015.
Milián Querol, Juan, *El acuerdo del* seny. *Superar el nacionalismo desde la libertad*, Unión Editorial, Madrid, 2014.
Mondéjar, Santiago, *A golpes con el Estado. Una indagación acerca del soberanismo catalán tras la sentencia del Tribunal Supremo*, ED Libros, Barcelona, 2019.
Morel, Sandrine, *En el huracán catalán. Una mirada privilegiada al laberinto del* procés, Planeta, Barcelona, 2018.
Mounk, Yascha, *El pueblo contra la democracia. Por qué nuestra libertad está en peligro y cómo salvarla*, Paidós, Barcelona, 2018.
Muñoz Molina, Antonio, *Todo lo que era sólido*, Seix Barral, Barcelona, 2013.
Murray, Douglas, *La masa enfurecida. Cómo las políticas de identidad llevaron al mundo a la locura*, Península, Barcelona, 2020.
Noelle-Neumann, Elisabeth, *La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social*, Paidós, Barcelona, 2003.
North, Douglass C., *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*, Fondo de Cultura Económica, México, 2006.
Payne, Stanley G., *En defensa de España. Desmontando mitos y leyendas negras*, Espasa, Barcelona, 2017.
Pérez-Díaz, Víctor, *La primacía de la sociedad civil*, Alianza, Madrid, 1993.
—, *Una interpretación liberal del futuro de España*, Taurus, Madrid, 2002.
Pomerantsev, Peter, *La nueva Rusia. Nada es verdad y todo es posible en la era de Putin*, RBA, Barcelona, 2017.
Puig, Valentí, *Por un futuro imperfecto. Los retos políticos en el umbral del siglo xxi*, Destino, Barcelona, 2004.
—, *Moderantismo. Una reflexión para España*, Península, Barcelona, 2008.
—, *Los años irresponsables. Lo que va de siglo*, Península, Barcelona, 2013.
—, *Memoria o caos. Por la continuidad de la tradición cultural de*

Occidente y contra la desmemoria de nuestros días, Destino, Barcelona, 2019.
Riemen, Rob, *Nobleza de espíritu. Una idea olvidada*, Taurus, Barcelona, 2017.
—, *Para combatir esta era. Consideraciones urgentes sobre fascismo y humanismo*, Taurus, Barcelona, 2018.
Rivero, Ángel, Javier Zarzalejos y Jorge del Palacio, *Geografía del populismo. Un viaje por el universo del populismo desde sus orígenes hasta Trump*, Tecnos, Madrid, 2017.
Rosanvallon, Pierre, *El siglo del populismo*, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2020.
Ruiz-Domènec, José Enrique, *El día después de las grandes epidemias. De la peste bubónica al coronavirus*, Taurus, Barcelona, 2020.
Salmon, Christian, *La era del enfrentamiento. Del* storytelling *a la ausencia de relato*, Península, Barcelona, 2019.
Sánchez Costa, Fernando, Miriam Tey y Martín Gurría (coords.), *En defensa de la democracia. Crisis política, populismo y nacionalismo de Barcelona a Washington*, Almuzara, Córdoba, 2019.
Sartori, Giovanni, *La sociedad multiétnica. Pluralismo, multiculturalismo y extranjeros*, Taurus, Barcelona, 2001.
—, *La carrera hacia ningún lugar. Diez lecciones sobre nuestra sociedad en peligro*, Taurus, Barcelona, 2016,
Schapire, Alejo, *La traición progresista*, Península, Barcelona, 2021.
Sen, Amartya, *Identitat i violència. Qui té interès a convertir la identitat en un conflicte?*, La Campana, Barcelona, 2009.
—, *Desarrollo y crisis global*, Complutense, Madrid, 2011.
Snyder, Timothy, *Sobre la tiranía. Veinte lecciones que aprender del siglo xx*, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2017.
Spinney, Laura, *El jinete pálido. 1918: la epidemia que cambió el mundo*, Crítica, Barcelona, 2018.
Tarín, Santiago, *En el tsunami catalán. Una biografía del proceso independentista*, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2020.
Thompson, Mark, *Sin palabras. ¿Qué ha pasado con el lenguaje de la política?*, Debate, Barcelona, 2017.
Villacañas, José Luis, *Populismo*, La Huerta Grande, Madrid, 2015.
Viroli, Maurizio, *Por amor a la patria. Un ensayo sobre las diferencias*

entre patriotismo y nacionalismo, Deusto, Barcelona, 2019.
Von Randow, Gero, *Revoluciones. Cuando el pueblo se levanta*, Turner, Madrid, 2018.
VV. AA., *Catalanisme. 80 mirades (i+)*, ED Libros, Barcelona, 2018.
Wind, Marlene, *La tribalización de Europa. Una defensa de nuestros valores liberales*, Espasa, Barcelona, 2019.
Zweig, Stefan, *Fouché. Retrat d'un home polític*, Quaderns Crema, Barcelona, 2004.

Notas

1. Pueden encontrar la transcripción del diálogo entre Enric Millo y el periodista Albert Castillón en el libro colectivo *En defensa de la democracia* (Editorial Almuzara, 2019).

1. <https://elpais.com/politica/2016/06/20/actualidad/1466448698_313220.html>.

2. <https://elpais.com/politica/2017/09/28/ratio/1506601198_808440.html>.

1. «De los medios, me sorprendió el hecho de ser capaz de transmitir lo que tú quieres, la frivolidad de la profesión y la capacidad de hacer correr rumores y noticias falsas. No sólo porque los he hecho correr cuando me convenía, sino porque los he sufrido. El gran descubrimiento fue que el negocio de los medios no es la información, sino la influencia.»

El proceso español
Juan Milián

No se permite la reproducción total o parcial de este libro,
ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión
en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico,
mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos,
sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción
de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito
contra la propiedad intelectual (Art. 270 y siguientes
del Código Penal)

Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos)
si necesita reproducir algún fragmento de esta obra.
Puede contactar con CEDRO a través de la web www.conlicencia.com
o por teléfono en el 91 702 19 70 / 93 272 04 47

© del diseño de la portada, Sylvia Sans

© Juan Bautista Milián Querol, 2021

© Centro de Libros PAPF, SLU., 2021
Deusto es un sello editorial de Centro de Libros PAPF, SLU.
Av. Diagonal, 662-664
08034 Barcelona
www.planetadelibros.com

Primera edición en libro electrónico (epub): junio de 2021

ISBN: 978-84-234-3263-9 (epub)

Conversión a libro electrónico: Realización Planeta